Voces de resistencia Entrevistas a líderes sociales y activistas

María Camila Rincón Moreno William Alejandro Moreno Hernández

Proyecto creativo escrito

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social y Periodista

Director:

Mauricio Díaz Calderón Comunicador social y periodista / Magíster en Estudios Culturales

Universidad de La Sabana
Facultad de Comunicación
Comunicación Social y Periodismo
Bogotá D.C.
2019

En memoria de quienes perdieron la vida defendiendo las causas que consideraban justas.

Contenido:

Resumen	7
Prefacio	9
Introducción	13
El hijo de la tierra muisca de Suba	20
Reivindicar al campo colombiano	30
La constructora de paz del oriente antiqueño	39
La carimba contemporánea	49
Los líderes fantasmas	58
La doctora que salva vida animal	69
La abuela del feminismo en Colombia	78
Por la diversidad, ni un paso atrás	87
Derechos en clave trans	99
El mito del cuerpo	107
Agradecimientos	121
Referencias bibliográficas	122

Resumen

Ser defensor de derechos es sinónimo de resistencia. En Colombia puede ser, incluso, una vocación de riesgo y más cuando se trata de sobreponerse al olvido institucional, a la estigmatización social y a la violencia armada. Sin embargo, la lucha de minorías y distintos sectores de la población se ha enmarcado en movimientos de ciudadanos que reivindican a diario su lugar en la sociedad. *Voces de resistencia* es un compilado de entrevistas a líderes sociales y activistas que defienden y promueven los derechos de sus comunidades y poblaciones. A través de conversaciones profundas con Héctor Lorenzana (Cabildo Indígena Muisca de Suba), Guillermo Andrés Mosquera (Coccam), Gloria Elsy Ramírez (Asovida), Juan de Dios Mosquera (Movimiento Cimarrón), Camilo Quintero (MASP), Martha Ciro Aguirre (ADA), Florence Thomas (Grupo Mujer y Sociedad), Elizabeth Castillo, Laura Weinstein (Fundación GAAT), Vicente García (Mosodic), José David Díaz y John Díaz (Movimiento antiteletón), se busca visibilizar sus luchas, conocer el trasfondo de sus discursos y entender la importancia de su labor en el sostenimiento de la democracia.

Palabras clave: derechos, derechos humanos, líderes sociales, activismo, democracia, indígenas, afrocolombianos, campesinos, Población LGBT, víctimas del conflicto armado, medioambiente, personas con discapacidad.

Abstract

Being an activist is a synonym of resistance. In Colombia it can even be a profession of risk and even more when it comes to overcoming institutional oblivion, social stigmatization and armed violence. However, the struggle of minorities and different sectors of the population has been framed in movements of citizens who claim their place in society on a daily basis. Voces de Resistencia is a compilation of interviews made to community leaders and activists that defend and promote the rights of their communities and populations. Through deep conversations with Héctor Lorenzana (Cabildo Indígena Muisca de Suba), Guillermo Andrés Mosquera (Coccam), Gloria Elsy Ramírez (Asovida), Juan de Dios Mosquera (Movimiento Cimarrón), Camilo Quintero (MASP), Martha Ciro Aguirre (ADA), Florence Thomas (Grupo Mujer y Sociedad), Elizabeth Castillo, Laura Weinstein (Fundación GAAT), Vicente García (Mosodic), José David Díaz and John Díaz (Movimiento antiteletón), it seeks to make visible their struggles, to know the background of their speeches and to understand the importance of their work in sustaining democracy.

Keywords: rights, human rights, democracy, indigenous, afro-Colombian, countrymen, LGBT community, victims of armed conflict, environment, disabled people.

Prefacio La entrevista, la base del periodismo

Si se exploran todos los géneros periodísticos, se podría decir que la entrevista es la base en común que tienen todos. La entrevista fija sus bases en la conversación, en las interrogaciones que el discípulo le hacía a su maestro, en los diálogos literarios y en los ficticios que se divulgan a través de la prensa (Cantavella, 1996, p. 9). Todos los periodistas tuvieron que, en algún momento, haber hablado con una fuente para recopilar datos e información necesaria para la nota, crónica o reportaje que estuviera realizando. "Toda información periodística proviene de una o varias entrevistas" (Cantavella, 1996, p. 22). Sin embargo, por la inmediatez del periodismo, la rapidez y el afán de publicar las noticias primero que otros medios, hoy en día se está perdiendo el rigor y el conocimiento que se merece la fuente cuando el periodista va a entrevistarlo, pues la entrevista no solo es una forma de conseguir los datos y las cifras necesarias para la noticia.

La entrevista es la base fundamental para la construcción del periodismo y funciona como herramienta, para que el periodista llegue a la información, y como género periodístico, que es la forma de indagar profundamente en cuanto a un tema con un personaje que esté relacionado al mismo. La entrevista es el resultado de una relación dialéctica entre entrevistado y entrevistador, que genera nuevas respuestas e interrogantes a propósito de algo, es decir, que genera conocimiento (Cantavella, 1996, p. 27).

Por eso, esta puede verse de dos maneras: la que es solo para la recopilación de información específica que necesita el periodista, o como género periodístico que, según el Manual de Géneros Periodísticos, permite al periodista entrar en el campo del análisis y la profundización en los temas y personajes que aborda (Velásquez, et al. 2000, p. 79).

Se convierte en un género cuando por sí misma constituye un artículo entero o en su mayor parte(Cantavella, 1996, p. 22). Para esto es necesario volver a darle importancia a la fuente, que realmente sea conocedora del tema y dedicarle el tiempo, sentarse a hablar con ellos, dejar que expliquen y que el periodista entienda de qué están hablando. En esto, el rol del entrevistador es plantear preguntas, es la única manera de abrir camino al conocimiento de la persona. Según Ana

Cristina Restrepo en su libro Página en Blanco, "Plantear preguntas es esperar historias" (Restrepo, 2012, p. 16). El rol del periodista es de estructurar la entrevista balanceadamente, entre las historias y la indagación de la información.

El entrevistador debe conducir la entrevista, pero en muchas de ellas es necesario que permita cierta dispersión, cierto divague que aporta el aire relajado de la conversación y ofrece cierta libertad al entrevistado para que sea más espontáneo (Halperín, 2012 p.36).

Eso es lo que se hizo en este trabajo, se buscó tener una conversación con los activistas para que tuvieran la libertad de contarnos sus experiencias, historias y conocimientos sobre las problemáticas del país. A muchos de ellos no se les había dado la oportunidad de ser entrevistados para un perfil. Normalmente los medios de comunicación solo los buscan para que les den datos y cifras sobre las respectivas problemáticas en que se especializan.

Escogimos la entrevista para darles voz a los líderes y activistas, para que sus palabras cobrarán vida con el lector. En la crónica se pierde la voz directa, en la entrevista los activistas le hablan directamente al lector, como si ellos mismos estuvieran escuchándolos.

El reto llegó a la hora de transcribir las entrevistas. Mantener el estilo y la personalidad de cada uno de los activistas era todo un desafío. "Hay que dejar muy claro desde el principio que no debe identificarse la entrevista, concebida, con el diálogo que se mantiene con una persona con el fin de publicar sus palabras más o menos literalmente" (Cantavella, 1996, p. 9). El diálogo es estrella en sí mismo, no un simple vehículo para transmitir ideas, pues permite al lector vivir lo que fue el encuentro del periodista con el personaje. Para transmitir los sentimientos de los activistas a través de las palabras fue necesario hacer la investigación necesaria de cada personaje para no incurrir en faltas de estilo o de coherencia.

Como bien lo dice la periodista colombiana Ana Cristina Restrepo, es un proceso de negociación de sentidos, es decir de una manera bella lo que ellos responden y que, a veces no lo dicen de una manera tan bonita u organizada por la informalidad del lenguaje oral (Restrepo, 2012, p. 16). Ahí es donde se refleja el talento y la escrupulosidad del periodista al editar cada una de las entrevistas. No se transcribe, sino que se hace una versión de lo que dijeron, con la seguridad de que todo va a quedar más claro, pero ateniéndose a la veracidad.

Para elegir las voces de resistencia que integran este libro hicimos, en primer lugar, un mapeo de los movimientos y liderazgos sociales en Colombia. Esa búsqueda nos permitió conocer la gran variedad de sectores de la población que se movilizan en defensa o promoción de sus derechos y libertades. Sin embargo, decantamos la lista y nos quedamos con nueve: indígenas, afrocolombianos, campesinos, víctimas del conflicto, personas con discapacidad, población LGBT, mujeres, ambientalistas y animalistas. Los elegimos porque sus procesos organizativos y sus luchas han sido históricamente importantes —en la medida que han enmarcado grandes triunfos en el orden constitucional—y, en lo particular, más complicados, pues han tenido que sobreponerse al olvido estatal, la estigmatización social e incluso la violencia armada.

El siguiente paso fue elegir un representante de cada lucha, lo que significó un nuevo rastreo, esta vez entre organizaciones, fundaciones, colectivos y todo tipo de agrupaciones que trabajan por estas causas. El resultado es una polifonía de voces que hablan, con conocimiento de causa, desde diferentes partes del país (Bogotá; Argelia, Cauca, y Granada, Antioquia), con perspectivas distintas (la academia, la ciudadanía y las organizaciones) pero, sobre todo, respaldadas por años de recorrido.

Organizamos un plan de trabajo, atendiendo a los tres momentos de la entrevista propuestos por Cantavella: preparación, ejecución y escritura (1996, p.97). En un primer momento, establecimos contacto con los diferentes activistas y líderes. Ese primer acercamiento fue importante porque pudimos establecer condiciones para hacer las entrevistas: requeríamos un tiempo prudente y un espacio adecuado para conversar a fondo. En el caso de los líderes que no viven en Bogotá, ante la imposibilidad de viajar a sus lugares de residencia, concertamos conversaciones extensas vía telefónica. Y si bien este es un tema aconsejable, procuramos sacar provecho al máximo de la información que nos podía proporcionar cada fuente.

Ese primer momento, además, demandó un proceso profundo de documentación, porque, como indica Jorge Halperín, "el periodista, al ser nexo entre el personaje y el público, debe tener completo entendimiento del tema que se está tratando" (2012, p.36). Para cada entrevista investigamos la historia del movimiento en Colombia y los avances en términos jurídicos (leyes, sentencias de altos tribunales, decretos, normas), así como los desafíos actuales. También consultamos otras fuentes documentales, como cifras publicadas por organizaciones nacionales o

internacionales, así como bibliografía apropiada para cada entrevista (Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y libros de autoría de la fuente, por ejemplo).

Esto nos permitió sostener conversaciones a la altura de cada fuente, pues estábamos al tanto del grueso de los temas que rodearon las entrevistas, pero sobre todo nos permitió lograr conversaciones fluidas, que son, como sugiere Cantavella (1996, p. 110), la mejor entrevista posible, pues, cuando se deben abordar varios temas, como en este caso, se debe procurar "que venga bien el pase, dirigiendo las preguntas de manera que no parezca que vayamos agotándonos y tengamos que recurrir a una abrupta transición" (p. 111).

Esas conversaciones quedaron condensadas en estas páginas, motivadas por la concepción de la entrevista nacida de una realidad, de una necesidad de crítica social, de expresión personal ante los demás y que se convertirán en la aportación más valiosa del periodismo (Cantavella, 1996, p. 10). Esperamos, entonces, que el lector encuentre en este trabajo la cara olvidada de Colombia, en voz de sus protagonistas, de quienes se sobreponen a diario a la estigmatización social, la carencia estatal y la violencia armada.

Introducción Defender los derechos humanos: una vocación de riesgo

"Los nadies, que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

Sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos

Que la bala que los mata"

Eduardo Galeano.

Ser líder social o activista en Colombia es correr peligro constantemente. Así lo señala 'La Naranja Mecánica' (2019), un informe de la ONG Somos Defensores, que registró 805 agresiones individuales a personas defensoras de derechos humanos tan solo en 2018. Esa alarmante cifra recoge todos los casos de amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos documentados en el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), que recopila información reportada por Somos Defensores y por otras organizaciones sociales y no gubernamentales.

Detrás de esta cifra están personas de diferentes partes del país que, en medio del clima de desesperanza que recorre la nación, han encontrado la manera de sobreponerse y trabajar colectivamente por distintas causas: el buen uso de los recursos naturales, la defensa de sus territorios, combatir la discriminación, reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Son defensores de derechos humanos, personas de a pie que trabajan por mejorar las condiciones de su entorno y las vidas de aquellos que, por lo general, son olvidados por la institucionalidad.

En sentido estricto, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2019), un defensor de derechos humanos es "una persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales" en cualquier plano nacional o local.

Naciones Unidas extiende el uso del término para referirse a un 'activista' y, en Colombia, a partir del gobierno de Juan Manuel Santos, el término es equiparable para definir 'líder social'.

Cuando se habla de 'defensores de derechos humanos' se trata, entonces, de personas que individualmente o como integrantes de fundaciones, colectivos, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro tipo de asociación humana, trabajan y defienden intereses de distintos sectores de la población. Sin embargo, esa labor les ha significado a estos defensores un riesgo inminente para sus vidas. El informe de Somos Defensores registra un aumento en la cifra global de agresiones individuales –pasó de 560 agresiones en 2017 a 805 en 2018–, pero alarma particularmente el número de amenazas y asesinatos. Las amenazas pasaron de 370 casos en 2017 a 583 en 2018 y los asesinatos, de 106 casos en 2017 a 155 en 2018.

Este cruento panorama viene en aumento desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, en 2016. El movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en su informe 'Todos los nombres, todos los rostros', dan cuenta de 702 líderes sociales que habrían sido asesinados entre enero de 2016 y mayo de 2019. De esa cifra, según el informe, 499 pertenecían a minorías y comunidades rurales. Es decir, eran líderes campesinos, líderes indígenas, líderes afrodescendientes o líderes comunales.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación –que trabaja con cifras de Naciones Unidas, organización que hace seguimiento directo a los casos en territorio—, reportó 274 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y abril de 2019. Mientras que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, contabilizó 281 homicidios entre enero de 2016 y mayo de 2019.

Esas cifras, sin embargo, no coinciden con los registros de Medicina Legal, que reportó 317 líderes sociales asesinados entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019. Ni tampoco con los de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de 462 líderes asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, así como de 982 amenazas contra defensores de derechos humanos entre marzo de 2018 y febrero de 2019.

De acuerdo con Alejandro Jiménez (comunicación telefónica, 22 de mayo de 2019), investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, a pesar de la definición de Naciones Unidas, en Colombia,

cada organización, e incluso el mismo Gobierno Nacional, trabajan con un concepto distinto de 'líder social', así como una metodología propia de recopilación de datos, por lo que resulta difícil conocer la cifra real de amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos. Sin embargo, lo cierto, señala Jiménez, es que sí hay un considerable aumento de estos crímenes desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

En ese sentido, es pertinente preguntarse cómo los defensores de derechos humanos luchan por otros derechos cuando el derecho más fundamental, la vida misma, no está garantizado y, sobre todo, quién –o quiénes– está detrás de las constantes agresiones en su contra.

En primera instancia, habría que explicar cuál es la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos en sus comunidades. Paula Gaviria (comunicación telefónica, 06 de junio de 2019), quien fue Consejera Presidencial para los Derechos Humanos entre 2016 y 2018, explica que amenazar o asesinar a un defensor impacta la cohesión que ellos construyen con su comunidad alrededor de un propósito común. "Es como si estuvieran amenazando a toda una comunidad, afectando su esperanza, que está representada en ese líder que trabaja por un futuro diferente".

Y es que las comunidades, ante el abandono institucional, encuentran en los defensores una especie de representatividad, lejos de las agendas de movimientos y figuras políticas. De hecho, el SIADDHH explica que "un defensor o defensora de derechos humanos es en sí mismo un líder en la sociedad civil en cualquiera de sus ámbitos geográficos (nacional, regional o local), lo que significa que no pertenece a ninguna institución del Estado". Esa característica es trascendental para entender el rol de los defensores al interior de sus comunidades si se tiene en cuenta que en Colombia los ciudadanos no confían en las instituciones.

Un estudio publicado por la Corporación Latinobarómetro (2018) determinó cuánto confían los ciudadanos de varios países de América Latina en sus instituciones. En el caso de Colombia, la medición arrojó que, por ejemplo, el poder judicial solo recibe la confianza de 23 de cada 100 colombianos, mientras que el Congreso de la República despierta una confianza de apenas el 20 % y los partidos políticos, de 16 %.

Para entender desde las ciencias sociales esta decisión de algunas personas de agruparse para trabajar por un fin común es oportuno citar la figura de 'movimiento social'. Según el magíster en

ciencia política Alberto Ramos Garbiras (2015), estos movimientos "se organizan y crecen como instrumento de reacción y medio de acción para llevar a cabo reclamaciones".

Es decir, los movimientos sociales son, en sentido estricto, grupos de personas contestatarias que se reúnen en torno a un propósito común. En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, el propósito puede plantearse como la manera colectiva de actuar en favor de uno o más derechos, por eso en la literatura especializada se le reconoce como la forma básica que toma el movimiento social. Esa defensa puede abarcar el derecho a la vida, a una salud de calidad, la educación y/o la no discriminación, así como los derechos de una población en particular, como los derechos de la mujer, las poblaciones indígenas, los menores de edad o cualquier minoría social.

Esa relación entre derechos y movimientos sociales está basada en la definición de los derechos como procesos de lucha y negociación permanente entre gobernantes y gobernados, que en algunos casos pueden ser moderados por instancias institucionales y en otros actúan como promotores en la creación o redefinición de esas instancias (como se cita en López, 2017).

El propósito de actuar en favor de un derecho constituye, entonces, una lucha, que puede entenderse, según el sociólogo francés Alain Touraine (2005), como cualquier "forma de acción organizada y conducida por un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social". Por eso, como explica Touraine, el movimiento social siempre está ligado a reivindicaciones y presiones, pues es precisamente a través de estas que surgen sus luchas.

Para Touraine (2005, p.262), además, una lucha solo se reconoce como tal si es conducida en nombre de una población particular, si está organizada y no existe solo como una mera opinión – así es posible establecer un 'conflicto' ante el cual el movimiento se integra— y si combate a un 'adversario', el cual puede definirse de manera abstracta —el Estado, por ejemplo—.

Las movilizaciones sociales, entonces, son una lucha reivindicativa de una comunidad y de sus defensores de derechos humanos alrededor de uno o más derechos. Esa defensa o promoción puede encaminarse en dos sentidos: por un lado, en la exigencia de derechos que aún no son reconocidos en el orden estatal o, por otro lado, en el respeto y cumplimiento de los derechos que ya son reconocidos en sus órdenes constitucionales.

En ambos casos, las movilizaciones sociales en defensa de los derechos humanos llevan a cabo todo tipo de acciones para hacer visibles sus reivindicaciones. Esos métodos de lucha son definidos como "repertorios de confrontación" (Tilly y Wood, 2010), los cuales comprenden "creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda" y que, además, se caracterizan por ser "públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso".

En ese sentido, un grupo de campesinos en el departamento del Cauca que se reúne para negociar con el Gobierno Nacional un proceso de restitución de tierras o un colectivo de personas LGBT en Bogotá que sale a las calles a defender sus derechos patrimoniales pueden entenderse como auténticos movimientos sociales en la medida que utilizan esos "repertorios de confrontación" y esas manifestaciones de unidad para promover sus reivindicaciones en torno a la defensa de derechos humanos.

En Colombia, esas movilizaciones sociales son cada vez más frecuentes. Lo demuestra el informe '¿Dónde, cómo, quiénes y por qué se movilizan los colombianos?' (2017), publicado por la Fundación Ideas para la Paz, que reporta un aumento del 91 % en el desarrollo de marchas, paros y huelgas entre 2013 y 2017. El documento señala que la mayoría de estas movilizaciones estuvieron relacionadas con la demanda de garantías laborales, peticiones de servicios y bienes públicos, inconformismo con el Gobierno, asuntos de tierra o vivienda y la demanda de garantías de justicia o seguridad.

Todo este panorama pone sobre la mesa la idea de una sociedad que, a pesar de vivir descreída de sus instituciones, cada vez está más dispuesta a reivindicar sus derechos y movilizarse para lograrlo.

Esas acciones reivindicativas, sin embargo, les puede costar la vida a quienes las lideran. La organización Somos Defensores (2019) apunta en su reciente informe anual que, en 2018, fueron asesinados 63 líderes comunales, 24 líderes indígenas, 24 líderes comunitarios, 19 líderes campesinos, 7 líderes sindicales, 6 líderes afrocolombianos, 3 líderes de víctimas del conflicto, 3 líderes educativos, 3 líderes de restitución de tierras, 2 defensores ambientales y 1 líder de la población LGBT. En relación con la presunta responsabilidad de estos 155 asesinatos, el SIADDHH encontró que la mayoría fue cometida por autores desconocidos (111), 16 por

paramilitares, 12 por disidencias o grupos pos desmovilizados de las extintas Farc, 9 por la guerrilla del ELN y 7 por la Fuerza Pública.

Diferentes organizaciones de defensores de derechos humanos coinciden en que no cuentan con garantías de seguridad. El informe 'Todos los nombres, todos los rostros' (2019), de Indepaz, advierte que "aún faltan desarrollos normativos y acciones efectivas para enfrentar la violencia sistemática en contra de comunidades, organizaciones y liderazgos". La organización Somos Defensores (2019), por su parte, explica que "la protección del Gobierno no debe estar solo en escoltas, carros, chalecos y teléfonos móviles, sino también en la implementación y puesta en marcha de las rutas y procesos de protección colectiva ya definidos en los instrumentos jurídicos".

Y es que el aumento en las cifras de asesinatos y amenazas en contra de defensores ocurre a pesar de que se han diseñado instrumentos legales e instancias políticas para hacer efectivas garantías de seguridad y protección en diferentes contextos. "Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, SISEP (Decreto Ley 895 de 2017); la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS (Decreto Ley 154 de 2017); la Unidad Especial de Investigación (Decreto Ley 898 de 2017); el Cuerpo Élite de la Policía Nacional para la Paz (Junio de 2017) y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, (Decreto 660 de 2018)" (Somos Defensores, 2019. p, 58).

Las organizaciones de personas defensoras de derechos humanos coinciden en la urgencia de implementar estos instrumentos jurídicos, pues las solicitudes de protección, aseguran, desbordan la capacidad de respuesta del Gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección.

El panorama se hace más crítico porque las autoridades dicen que, además, no hay certeza de los motivos detrás de los crímenes. El responsable de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Luis González (2019, enero) sostiene que "las principales víctimas han caído en los lugares donde las comunidades pelean por desterrar la cultura de la ilegalidad. Es decir, aquellos municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos, que sirven de ruta del narcotráfico y donde subsiste la minería ilegal registran las tasas más altas".

Al respecto, Somos Defensores (2019) explica en su informe correspondiente a 2018 que, en departamentos como Cauca y Antioquia –donde hubo 28 y 26 casos de homicidios en 2018 respectivamente–, ese recrudecimiento de la violencia en contra de los defensores de derechos

humanos se ha registrado en territorios donde alguna vez hubo presencia de las extintas Farc y que en la actualidad estarían controlados por nuevos grupos guerrilleros. Por eso, insiste el documento, "es importante que el Gobierno y la Fiscalía aceleren los procesos de investigación de los asesinatos y no salgan a desvirtuar la labor de los defensores asesinados, relacionando sus casos solo con ajustes de cuentas o problemas sentimentales" (p. 96).

Lo cierto es que los defensores no se rinden. En una declaración pública, Amnistía Internacional (2018, p.2), organización que también ha hecho seguimiento al incremento de esta violencia, señaló que "a pesar de la adversidad, las personas defensoras de los derechos humanos (...) coinciden en afirmar que su vocación para defender los derechos humanos es mucho más fuerte que los deseos de callarlos a la fuerza".

Por eso, es momento de dejar de hablar únicamente de las cifras de líderes y activistas asesinados o amenazados. Son comunidades y poblaciones enteras las que pierden cuando ellos, sus defensores, no están. Hablemos en plural, como lo hacen ellos: campesinos, afros, indígenas, personas de orientación sexual e identidades de género diversas, víctimas del conflicto, defensores del medioambiente y las especies. Hablemos de los rostros e historias detrás del desalentador paisaje que proponen las cifras. El primer paso es visibilizar y conocer sus luchas, por eso, en este libro, el lector encontrará conversaciones profundas con líderes sociales y activistas de Bogotá y los departamentos de Antioquia y Cauca que, a diario, trabajan desde distintos frentes por sostener la esperanza, la igualdad y la justicia.

El hijo de la tierra muisca de Suba

Por William Moreno Hernández

Una casa de estilo colonial y fachada amarilla se alza en el extremo oriente de la plaza principal de la localidad de Suba, en Bogotá. La construcción alberga varios locales. En medio de una cafetería y un local para adelantar trámites inmobiliarios llama la atención una puerta angosta que conduce a un pasillo profundo y oscuro. Al ingresar, sobre la puerta que marca el fin de ese pasillo, hay un letrero en el que se lee 'Choc Mhuyqy', que en español quiere decir 'Bienvenido'.

"Es lengua muisca", me dice Héctor Lorenzana, quien me recibe en la puerta. Héctor es un líder del clan nativo Caita muisca y me da la bienvenida al Cabildo Indígena Muisca de Suba, uno de los 14 cabildos indígenas que hay en Bogotá.

En Suba, relata Héctor, la comunidad muisca fue reconocida como resguardo indígena hacia 1538, con la llegada de los españoles. Para ese entonces, según reza la historia, la región de Suba hacía parte del Cacicazgo de Guatavita del Territorio del Zipa de Bacatá. Sin embargo, esa nueva figura territorial que trajo la Conquista se mantuvo hasta 1878, cuando se diluyó el resguardo y se produjo una posterior división de tierras entre las familias indígenas.

A principios del siglo XX, los terratenientes llegaron a la región, lo que significó, como cuentan los abuelos muiscas, una pérdida constante de tierras para las familias indígenas, pues en adelante se empezaron a expedir títulos de falsa tradición en los que no figuraban los verdaderos propietarios de los terrenos. Así se configuró un escenario ideal para que en las décadas de los 70 y 80, tras la anexión de la región de Suba a Bogotá en 1954, se intensificara la urbanización del territorio y se sacara provecho de los problemas de titulación para construir de manera fraudulenta en tierras de la comunidad muisca.

La lucha por la reivindicación de esta comunidad ancestral inició, precisamente, a finales de los 80, cuando varias familias que buscaban proteger sus tierras decidieron organizarse bajo la

figura de cabildo, motivadas por un título colonial que, insistían, ratificaba su estado de resguardo indígena. Tras meses de debates, en 1991 finalmente esa figura se reconoció legalmente ante la Constitución Política, dando inicio a lo que hoy se conoce como el Cabildo Indígena Muisca de Suba, una organización autónoma y sin ánimo de lucro reconocida ante el Ministerio del Interior.

El cabildo lo encabeza un gobernador —me cuenta Héctor—, seguido de un vicegobernador, un alcalde mayor, un alcalde menor y alguaciles encargados de la seguridad. Todos son elegidos por elección popular. La comunidad muisca de Suba, según el censo radicado en 2010 ante el Ministerio del Interior, está compuesta por cerca de 2.500 familias en las que están agrupadas alrededor de ocho mil personas, aunque en el cabildo hoy calculan que ya son cerca de diez mil.

En barrios como el Rincón, Tibabuyes, Salitre, Casablanca y Tuna Alta, subsisten los apellidos Nivia, Niviayo, Mususú, Chipo, Cera, Bajonero, Quinche, Caita, Cabiativa y Yopasá, que conforman las familias muiscas —antes clanes— de la localidad de Suba. Hoy los integrantes de esta comunidad, además de vivir, estudiar y trabajar como cualquier persona común, luchan por conservar las costumbres que mantienen con vida su tradición, sobreponiéndose ante la amenaza permanente de la urbanización.

Así lo resume Héctor, quien dice que llegó al cabildo muy joven, motivado por defender los territorios ancestrales de Suba. A sus 41 años, se declara un "hijo del maíz" y "una gota de sol que cayó en Suba". Es un convencido de la paz y de la necesidad "de construir país a partir de lo diverso, lo pluricultural y lo multiétnico".

Nos sentamos a conversar en una sala del cabildo. Héctor me pide un momento y enciende un velón que, acto seguido, pone sobre una mesa que está en medio de los dos. "Pido permiso para hablar, por la vida y la protección de todas las formas de vida", dice, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Hay silencio por unos segundos. Luego, posa sus ojos sobre mí. Dice mi nombre y quién soy como si me estuviera presentado. "Ya podemos empezar", afirma.

¿Cómo es la vida de un muisca en una ciudad como Bogotá?

Es difícil. Actualmente, el pueblo muisca está compuesto por cinco comunidades: en Bogotá nos encontramos en lo que hoy se conoce como Bosa y Suba y en Cundinamarca en Chía, Cota y

Sesquilé. Esa característica ha hecho que la mitad de nuestro cuerpo territorial esté en lo urbano y la otra mitad en "lo rural". Y digo en "lo rural", porque Cundinamarca, si sumercé lo mira, ya es más urbano que rural. Todo eso representa un problema gigante porque nos pone en una zona gris. Los muiscas de Suba y los muiscas de Bosa estamos en los antiguos resguardos ancestrales, que están disueltos hoy en tierras colectivas, pero seguimos viviendo en tierras ancestrales. Los abuelos dicen: 'Nosotros no llegamos a la ciudad. La ciudad llegó a nosotros'. Es decir, nosotros nunca nos hemos movido de nuestras tierras.

¿Y qué implicaciones tiene vivir en esa 'zona gris'?

La manera como nos relacionamos con el entorno. Le pongo un ejemplo: la relación que hemos tenido con la Thomas van der Hammen, porque gran parte de la reserva hacía parte del resguardo de nuestra comunidad. Hoy en día, gran parte son los humedales y esa parte "rural". Y nosotros, como comunidad, no estamos viviendo dentro de los humedales. Esa aclaración es importante. Nadie vive dentro de una iglesia, porque en lo sagrado nadie vive, si acaso uno vive al lado. El cura vive al lado de la iglesia, pero no dentro de la iglesia. Y eso mismo pasa con nosotros. Dentro de los humedales los abuelos nunca construyeron, porque ellos respetaron profundamente los caminos del agua y le decían a uno: 'Esto por acá es agua. Esto es de los encantos, mijo. Eso no es de ustedes'. Si usted construye, genera enfermedad, porque si un espacio se desarticula, eso comienza a producir enfermedad física y territorial. Eso también se puede explicar desde occidente con el tema de cómo la arquitectura y el paisajismo se dan cuenta de que el espacio influye sobre las realidades sociales.

Ahora que menciona la reserva Thomas van der Hammen, ¿cómo recibieron, a nivel de comunidad, la certificación que el Ministerio del Interior le dio en septiembre pasado a la Alcaldía de Bogotá para aumentar las áreas de restauración ambiental y el área total de la reserva? Se lo pregunto porque esa certificación asegura una ausencia de población indígena dentro de la reserva.

Sabíamos que el Ministerio del Interior iba a decir eso porque cuando se habla de 'lo indígena' siempre se piensa en selvas, en lo rural. Pero no. Bogotá también es un territorio indígena. Y no porque los indígenas de acá sean desplazados, como muchos creen, sino porque somos nativos del territorio. ¿Por qué Bogotá se llama Bogotá? ¿O por qué los nombres Suba, Teusacá, Engativá o Bosa? Porque son los nombres de los antiguos territorios que seguimos presentes.

Sabemos que el tema de tierras en Colombia ha sido un problema para muchas personas que tienen otros intereses. A muchos no les interesa reconocer que nosotros tenemos una presencia territorial y una relación espiritual con espacios de la reserva. Y el caso de la comunidad muisca de Suba es particular porque somos uno de los únicos pueblos indígenas que estamos en tierras ancestrales y, al mismo tiempo, estamos en contexto de ciudad. Eso genera un choque porque en las leyes no se entiende que 'lo indígena' también vive y tiene raíces en la ciudad.

La certificación del Ministerio del Interior también decía que, debido a esa supuesta ausencia de población indígena en la reserva, no era necesario hacer una consulta previa para adelantar el proyecto de la Alcaldía. ¿Eso también lo esperaban?

Sí. Acá en Colombia ni el Estado ni el Distrito le aseguran de buena manera los derechos a uno. Aquí hay que exigirlos. Hace unos años, la Alcaldía de Peñalosa tuvo que reconocer una consulta previa con nuestros hermanos de Bosa. Y no fue gratis, sino que a nuestros hermanos les tocó reunirse, movilizarse y demostrar que tenían una presencia y una afectación en su territorio. Entonces, nos toca estar alertas y tratar de activar todos nuestros derechos que tenemos como comunidad, aunque se nos desconozca como nativos del territorio.

En el cabildo ya se inició un proceso de demanda para reclamar nuestros derechos como comunidad y tratar de evitar esa intervención de la reserva por parte de la Alcaldía. Para eso también hemos invitado a otros sectores, para que se sumen a esta lucha, porque la defensa de la Thomas van der Hammen no es un tema propio de nuestra comunidad. Nosotros estamos pensando una solución de la ciudad que queremos y que necesitamos habitar y construir todos. En Bogotá no solo habitamos el pueblo muisca, somos 8 millones de habitantes y todos somos responsables de cómo nos pensamos esta ciudad para un futuro. A eso le apunta esta defensa de la reserva: a repensar cómo queremos a futuro esta ciudad y cómo la estamos planteando.

¿Son frecuentes esas diferencias con el Gobierno en relación con sus territorios ancestrales?

En Suba, como en muchas partes de Colombia, el problema es que no somos reconocidos. Solo somos reconocidos cuando le conviene a la Alcaldía, tanto la local la mayor. Para ciertos eventos, donde somos exóticos y nos necesitan mostrar, entonces nos llaman. Ellos participan del ritual y somos presentados ante la comunidad, pero cuando llegamos a exigir nuestros derechos reales, entonces inmediatamente aparecen, por ejemplo, esas declaraciones del Ministerio del Interior,

que nos dio una personería jurídica pero la reconoce solo cuando le conviene. Nosotros hemos estado en resistencia por más de 500 años y hoy estamos aquí y seguimos.

¿Y hoy por qué resisten?

Resistimos contra el avasallamiento de las políticas que consideran a Bogotá como la urbe del corazón de Colombia, pero no se respeta toda la ancestralidad de esto que formó ese corazón. Están en riesgo los sagrados abuelos páramos, que son productores del agua y de la armonía. Hoy se quiere hacer una reestructuración de políticas ambientales y convertir los páramos en lugares para el turismo o la explotación minera. Es exactamente el mismo saqueo del conquistador cuando vino buscando tesoros, pero ahora buscarán otros minerales y riquezas en sitios sagrados, donde surge el agua y la vida misma.

¿Cuáles son esos sitios ancestrales muiscas que hay en Suba?

Para nosotros, el mundo está dividido en tres mundos: el mundo de lo seco, que es el de los humanos, las plantas y los animales; el mundo de los cielos, y el mundo del agua, que le pertenece a los espíritus. Por eso, para nosotros, no hay lugar más sagrado que los páramos, porque ahí es donde nace el agua, y sin agua no hay vida.

Cuando los abuelos hablan de los caminos del agua, de los espíritus, de los encantos, no son solo historias bonitas, sino reflexiones de cómo se organiza el territorio. Nosotros somos hijos de la madre agua, entonces el agua y la tierra están profundamente conectados con nosotros y todos esos espacios donde el agua y la tierra están en armonía son sitios sagrados. Defendemos territorios como los humedales porque son los sitios de nuestras historias y los sitios de nuestras deidades. Entonces, en la geografía actual, para que sumercé me entienda, serían los humedales de Córdoba, de la Conejera, de Guaymaral e incluso Chorrillos, que aunque no esté reconocido, es una zona de humedal.

El parque Mirador de los Nevados, ubicado en la zona centro de Suba, se construyó en homenaje a los muiscas. ¿Allí había otro lugar ancestral?

Sí, el Mirador era uno de los antiguos cementerios de los muiscas. Después, pasó a ser una cantera durante unos 80 años y luego en parque. Pero no es un parque cualquiera. Es un parque que se

pensó como un espacio de historia y tradición. Entonces, ahí también está la memoria de nuestros ancestros.

Hace unos meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les solicitó al rey de España y al Papa que pidan perdón por los abusos cometidos en la Conquista. ¿Ustedes, como comunidad indígena, consideran que ese perdón debería extenderse para toda la región?

Yo admiro profundamente la cultura mexicana. Me parece que López Obrador está actuando correctamente, que es una justa reivindicación de nosotros como dueños de los territorios de lo que hoy llaman América. Lo mínimo que se pediría es que se reconozca el avasallamiento y todas las arbitrariedades que se cometieron, porque no todo es tan maravilloso como lo ha pintado la historia. El tener yo que hablarle a sumercé en español hoy no fue producto de la más maravillosa armonía entre los pueblos, sino fue impuesto, a la fuerza y a punta de sufrimiento y dolor.

Ellos escribieron la historia y contaron lo que les convenía. Hablar nuestras lenguas autóctonas era considerado como una especie de subversión y esto obligó a que muchos las hablaran a escondidas porque todo era castigado. Eso, en parte, generó que, en siglos siguientes y por mucho tiempo, hubiera mucha vergüenza y estigma en reconocerse como nativo. Aquí en Colombia fue hasta la Constitución del 91 que nosotros pudimos empezar a decir: 'Bueno, nosotros somos los de acá'.

¿Pero estigmas sociales sobre los pueblos indígenas todavía existen?

Sumercé, que nos desconozcan como nativos del territorio es producto de la estereotipación que se mantiene, porque para "ser indígena" han creado un concepto. Entonces, el indígena, no solo es peyorativamente tratado, también debe haber un atuendo y un 'tocado'. Si yo ya no tengo ese 'tocado', ya no soy indígena. Si no hablo la lengua original, no soy indígena. Si fui a estudiar donde fueron a estudiar todos los demás, en los centros académicos de los demás, entonces ya no soy indígena. Y eso no es así. Es un arraigo de siglos atrás que nos han transmitido de múltiples generaciones hasta llegar a nosotros, pero que nos hace seguir siendo raizales, así sea que hayamos tenido que adaptarnos a vivir en este territorio en este momento de la historia. Esa es otra manera de resistir.

¿Cómo se aborda esa estigmatización al interior de la comunidad?

Nosotros hacemos actividades públicas para mostramos como los nativos originarios del territorio, pero en el interior de las familias el cuento es otro porque todavía hay tristeza y dolor. Hay familias que prefieren que uno no diga en otros espacios que es raizal porque todavía hay una carga de dolor por la estigmatización que sufrieron nuestros padres y abuelos. Muchos tuvieron que educarse en contextos donde a todos se les homogeniza y deben aprender lo mismo. Eso fue muy violento para los anteriores, porque fue un poco perder nuestra identidad. Entonces, ellos dicen que no quieren eso para las siguientes generaciones. Sin embargo, esos temas se hablan en comunidad y nosotros ahora trabajamos por reivindicar todo eso.

En esta discusión sobre esa imposición cultural, y así lo hizo ver López Obrador, no se puede dejar de lado a la Iglesia Católica. ¿Cómo se maneja en la comunidad muisca esa relación entre las tradiciones propias del catolicismo y sus rituales ancestrales?

Eso es una sincronía, diría yo. Aquí sí debo hablar desde una perspectiva mía y no a nivel de comunidad. En nuestro pueblo hay profundos arraigos de las concepciones judeocristianas y católicas, porque fue un sincronismo que se generó ahí y muchos de nosotros practican los rituales de la Iglesia Católica. Sin embargo, yo encuentro mi espiritualidad junto a las cascadas y las grandes rocas que llamamos 'las abuelas'. Cuando estoy en esos espacios, siento que hay una espiritualidad que me conecta con la tierra, y eso lo que a mí me vibra. Pero yo respeto las otras tradiciones. Es más, a veces me invitan a rituales católicos y yo voy porque no me voy a abstraer de compartir con mi comunidad.

Mencionaba usted el leguaje, ¿qué están haciendo como comunidad para reivindicar la lengua muisca?

Ahí sí hace falta mucho camino, a pesar de que ya hay cartillas, aplicaciones en los celulares e investigaciones. Hace falta un plan decenal más largo y Bogotá tiene que financiar esos proyectos porque necesitamos fortalecer la investigación, la divulgación, materiales pedagógicos de lengua. Se necesita un proyecto grande. Y no es un invento, porque el hebreo que se habla hoy en día, por ejemplo, es una lengua revitalizada.

Pero la lengua sí es una investigación reciente que se empezó a dar cuando vimos que ya era hora de reactivarla. Y no es que seamos hablantes de la lengua. Nosotros la empezamos a trasladar desde los documentos que dejaron los cronistas, entonces las pronunciaciones, las declinaciones,

las acentuaciones pueden ser muy variantes desde lo que está en el escrito a lo que nosotros lleguemos a reproducir con la voz en este momento, porque nuestro aparato fonador ya está adaptado a la lengua española, que es la que manejamos como primera lengua. Sin embargo, sí es un reivindicación política de que nosotros somos originarios y, por eso, seguimos en este trabajo investigativo por recuperar la mayor cantidad posible de la lengua.

¿Pero es sencillo? Porque los historiadores dicen que no hay un consenso sobre la existencia de una lengua común en el altiplano y que, incluso, muchas palabras que se conocen hoy como propias de los muiscas fueron extraídas de fuentes españolas de la Colonia o de estudios modernos.

Nosotros sabemos que no vamos a llegar a hablarla en un 100%, al menos no esta generación, porque hay muchas palabras que, como sumercé dice, ahora están y que en la época en la que la lengua desapareció no estaban. Algunas palabras pudieron ser traídas por los mismos españoles y se adaptaron como muisquismos. Por eso, en esa línea es muy importante lo que hace, por ejemplo, el grupo 'Muysccubun' de la Universidad Nacional, que es un proyecto de investigación para recuperar la lengua música.

¿Ese grupo de investigación ha trabajado directamente con ustedes?

Sí, 'muysccubun' significa 'la lengua de la gente'. Ese proyecto se hace en alianza con las autoridades y, sobre todo, con nosotros los miembros de la comunidad muisca de Suba. Nos apoyamos desde la sociología, la antropología, la arqueología, que nos llevan a un proceso de memoria y de diálogos sobre cómo éramos y qué fue lo que nos quitaron. Hay palabras que queremos reactivar en ese idioma porque son palabras claves para poder utilizar en nuestros cantos y para decir: 'Madre tierra, aquí estamos y aquí seguimos'.

En redes sociales circulan todo el tiempo palabras que, según algunos, son herencia de la lengua muisca. ¿Han trabajado en la verificación de esas creencias populares?

Sí (risas), hay muchas palabras así. Una común es 'chicha'. Muchos creen que traduce 'diarrea' porque dicen que los españoles se enfermaban cuando la tomaban, pero eso no es cierto. Nuestra bebida ancestral es la facua, que es la bebida del maíz fermentado.

¿Cómo manejan esa labor reivindicativa con las nuevas generaciones?

Con los niños se trabaja constantemente el tema de la lengua. Tenemos, incluso, un jardín infantil, que es el jardín 'Kihisaia Muisca Güe Atíquíb Los Pinos'. Ahí los niños y niñas aprenden saberes propios de nuestra cultura, pero sin dejar de lado lo que hay que enseñarles sobre la vida urbana en la que estamos inmersos. Entonces, ahí aprenden sobre la lengua muisca, agricultura, danza y respeto por el territorio.

Ahora también se está trabajando una guardia indígena con los jóvenes. Ahí lo que se busca es hacer salidas a los territorios, como los humedales, por ejemplo. Entonces, los jóvenes van con los abuelos y ellos les cuentan las historias de nuestros territorios. Con los más niños también se está haciendo eso. Se llaman 'Semillitas de guardia' y se llevan a los niños a caminar a los cerros para empezar un diálogo con ellos, porque esa generación necesita crecer sin pena de sus raíces, sin sentir discriminación, sin sentir todo eso que vivieron los abuelos.

¿Y qué pasa cuando los menores salen del jardín infantil? Es decir, ¿cómo garantizan ese acceso a educación primaria, secundaria e incluso a educación superior?

Hay unas garantías, sí. Los cabildos crean con ayuda de la Secretaría de Educación espacios en los que no se les deja de inculcar toda es tradición a los niños y niñas. Con la universidad cambia, pero igual los jóvenes se pueden presentar a la universidad sin pagar la inscripción. Ese es un beneficio que se tiene por ser parte del cabildo.

Algunas universidades ofrecen descuentos y otras dan cupos especiales. Y también hay acceso a becas y programas especiales. La beca Álvaro Ulcué, por ejemplo, busca que los jóvenes indígenas hagan trabajos comunitarios con sus pueblos. Entonces, si al final el joven demostró ser juicioso, cumplió con los requisitos y hace un buen proyecto, el Icetex le da el dinero, porque fue un trabajo colectivo.

¿Y sobre el acceso a la salud, que es un derecho básico?

Se viene trabajando en proyectos para que la medicina tradicional ancestral, que es la de los abuelos muiscas, sea tenida en cuenta en la medicina occidental. En 2010 se hizo un primer intento con el Hospital de Suba y fue bien recibido por la población. Nosotros creemos que el conocimiento de nuestras abuelas, que son parteras, curanderas y sobanderas, puede ser un gran aporte para la medicina actual.

Ha mencionado usted varias veces a los abuelos en esta conversación. ¿Qué importancia tienen ellos en la cultura muisca?

Hay un Consejo de ancianos que actualmente lo conforman cerca de 30 miembros activos y exgobernadores del cabildo. Ellos son los que primero nos traen la memoria y la tradición. Se han presentado algunas rupturas porque unos ya son mayores y se quedan en sus casas donde hay que ir a visitarlos. Incluso, hay casos como el de una abuela de apellido Caviativa que empezó a perder la memoria. Sin embargo, ellos están aquí y los respetamos.

Para muchos habitantes de Bogotá, y en este caso sobre todo de Suba, puede resultar extraño escuchar que cohabitan con indígenas nativos. ¿Cómo comunicar la importancia de preservar esa memoria y esa tradición en medio de tanto cemento y urbanidad?

Esto es lo que nos da sentido de ser a las comunidades raizales. Entonces, a los demás habitantes decirles que, en algún momento, nos vamos a compaginar porque encontraremos particularidades comunes en nuestras creencias. Eso, de alguna manera, nos une y es importante fortalecer esos vínculos: empezar a sentir el sufrimiento del otro o entender que yo necesito de los demás. Todos le aportamos a la sociedad y reconocer las raíces y las identidades de esa sociedad nos da la oportunidad de proyectarnos a un futuro, que estoy seguro todos queremos sea mejor de lo que nos ha tocado vivir en los últimos 200 años.

Reivindicar al campo colombiano

Por William Moreno Hernández

Desde niño, Guillermo Mosquera acompañó a su papá a reuniones de organizaciones sociales. En esos espacios, cuenta, se despertó su consciencia social. Las preocupaciones y los reclamos de quienes asistían a esos encuentros, poco a poco, le permitieron entender cómo funcionan las dinámicas del despojo de tierras, el extractivismo y los negocios que menoscaban el bienestar del campesinado en Colombia.

Guillermo nació en el seno de una familia de tradición campesina en el corregimiento La Belleza, en Argelia, Cauca, en pleno piedemonte de la cordillera occidental. De sus padres, líderes comunitarios y sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, heredó la vocación del liderazgo y el interés por su entorno.

Motivado por trabajar por su comunidad, decidió prepararse y, en 2002, logró entrar a la Universidad del Cauca para estudiar ingeniera ambiental. Esa oportunidad, admite, fue un privilegio. "De cada 100 campesinos más o menos unos 50 se gradúan como bachilleres y de cada 100 bachilleres solo uno accede a la universidad. Yo fui ese uno", dice.

En la universidad, Guillermo fue líder estudiantil. Fundó el comité estudiantil de la facultad de ciencias agropecuarias y se enfrentó a la persecución que sufrió ese movimiento a inicios de este nuevo siglo. Poco antes de graduarse, encaminó su liderazgo. Un conocido le recomendó aprovechar sus habilidades y tomar un curso que acercaba a los estudiantes a la enseñanza. Guillermo accedió. Cuando finalizó la universidad, a mediados de 2008, además de su título profesional, en sus manos tenía un certificado de docencia.

Aunque su vida se volcó a las aulas de clase, Guillermo no dejó de lado su trabajo por los caucanos del campo. Hoy, a sus 35 años, vive en su natal Argelia. Es rector de la Institución

Educativa Sinaí e integrante de varias organizaciones sociales, como la Asociación de Campesinos para la Gestión y Desarrollo Comunitario (ASPROGES), la Asociación Campesina de trabajadores de Argelia (ASCAMTA) y la Coordinadora de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (COCCAM) de Argelia.

Su trabajo como líder comunitario —explica Guillermo— se divide en dos frentes: la educación y la capacitación. En la institución educativa que lidera trabaja por preservar la identidad campesina, mientras que en las organizaciones en las que colabora recibe denuncias de vulneración de derechos. En cualquier caso, asegura, trabaja "por la reivindicación del campesino como sujeto de derechos".

Con ese propósito, en los últimos años, Guillermo se ha vinculado a la organización de comités cocaleros de Argelia, el segundo municipio con más cultivos de coca en Cauca, con 1.956 hectáreas, después de El Tambo, que tiene 6.661. Esta labor, dice, no ha sido sencilla. Y no es para menos. Argelia hace parte de la ruta del narcotráfico que desemboca por el municipio López de Micay en el Pacífico y, a diferencia de otros pueblos cocaleros, el negocio hoy está en manos de los campesinos, que tienen, además, una suerte de Estado paralelo instalado en su territorio.

Guillermo atiende esta conversión vía telefónica un sábado en la mañana desde Argelia, Cauca, donde, dice, trabaja por vivir en paz el resto de su vida.

Uno de los mayores triunfos del movimiento campesino, y así lo señalan algunas organizaciones, ha sido el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos en la Constitución del 91. Usted, precisamente, dice trabajar por reivindicar al campesino como sujeto de derechos. ¿En qué consiste esa reivindicación?

Ese es un proyecto que no es solo mío, sino de los más de 16 millones de campesinos colombianos. Queremos que el gobierno, de verdad, nos reconozca como personas que tienen unos derechos, que tenemos nuestra identidad propia y que tenemos unas dinámicas económicas que sostienen este país.

¿Y cómo trabajan por esa reivindicación?

Mi principal frente de trabajo es ser rector de la Institución Educativa Sinaí, en Argelia. Ahí adelantamos un proyecto educativo que se llama 'La Granja de La Paz' y lo que estamos haciendo es recuperar la identidad campesina con los niños y niñas que estudian en el colegio. ¿Cómo? A través del trabajo agropecuario y de movilización social. Buscamos que el estudiante recupere las costumbres ancestrales, que aprenda sobre la paz y que aprenda de conceptos políticos y sobre por qué el campesino también tiene que tener sus derechos.

¿Cómo surgió 'La Granja de La Paz'?

Nació en 2014, después de analizar todas las problemáticas que tiene esta región, como la siembra de cultivos ilícitos, el conflicto social y armado y el abandono gubernamental. Con este proyecto queremos recuperar nuestra cultura campesina y construir paz local generando alternativas a la economía cocalera.

En ese sentido, ¿el proyecto busca que los niños y jóvenes se queden en el campo si así lo desean?

Sí, también busca combatir ese modelo de 'educación para el desarraigo', que dice que el éxito para los niños campesinos está en ir a la ciudad y abandonar sus territorios. Buscamos promover el trabajo campesino para que el estudiante adquiera las experiencias básicas para quedarse en el campo y valore el campesinado como un proyecto de vida válido.

Quizá es muy pronto para ver resultados concretos, pero ¿qué les ha dejado esa iniciativa hasta este punto?

Hemos familiarizado a más de 300 estudiantes con la producción campesina como algo más que la producción cocalera, porque en la granja usted encuentra porcicultura, gallinas criollas, pollos de engorde, conejos, lombricultura. También hay huertas con cebolla, cilantro, plátano, yuca, maíz... lo más bonito es que los niños salen de la granja y llevan ese conocimiento a sus fincas, entonces en muchas de ellas ya han comenzado a ver rentables otros cultivos aparte de la coca.

Otro 'hijo' de 'La Granja de La Paz' es un manual de convivencia comunitario. Con la salida de las Farc del territorio, todo se despelotó porque las Farc eran todo. Ellos eran el único gobierno. Después de que ellos salieron, la gente empezó, literalmente, a matarse unos a otros y empezó a haber muchos conflictos entre personas. Entonces, vimos que en el colegio teníamos un manual

de convivencia que siempre involucraba al estudiante en la resolución de conflictos y dijimos: 'Bueno, ¿por qué no hacemos eso mismo pero en todo el corregimiento?'.

¿Cómo definieron lo que estipula ese manual comunitario?

Nos sentamos cuadra por cuadra en el caserío y vereda por vereda para discutir entre toda la comunidad qué acciones podríamos considerar como faltas y por qué afectaban la convivencia. Luego, nos sentamos a pensar cómo podíamos solucionar o corregir esas faltas.

¿Qué acciones identificaron como 'faltas'?

Quizá lo más importante es que la gente planteó que no quería la presencia de ningún grupo armado, y lo hemos hecho cumplir. En Argelia hemos vivido la violencia por muchos años. La hemos padecido en carne propia y por generaciones: el abuelo, el tatarabuelo, el hijo, el nieto. Yo tengo tíos desaparecidos y primos muertos y, en calidad de rector, he tenido que esconderme en medio de bombardeos. Entonces, lo único que queremos es vivir en paz.

Ese manual de convivencia supone, de alguna manera, una especie de 'Estado paralelo', ¿no le parece?

Yo lo llamaría una ley popular. Este manual se aplica en tres corregimientos de Argelia: en Sinaí, que fue donde se creó, y en La Belleza y El Mango. Esos tres corregimientos decidieron acogerse voluntariamente. El manual está basado en la solidaridad, la confianza y el valor de la palabra. Hay, además, un comité de convivencia que va y habla con la comunidad cuando es necesario. Entonces, el manual siempre está buscando armonizar los conflictos y crear acuerdos entre las personas.

¿Qué otras 'faltas' encontró la comunidad?

Encontramos que la comunidad no solo rechaza faltas como los robos y la violencia, también había una preocupación importante por el medioambiente. Hubo consenso en no permitir la minería ni tampoco la contaminación del medioambiente. Tampoco echar basura al río o talar árboles en los ojos de agua.

Ante estas 'faltas', ¿cuáles son las penas?

Para cada falta acordamos una sanción. Hay algunas faltas que tienen una sanción en dinero, otras tienen trabajo comunitario. Pero hay otras que sí se conectan con el sistema judicial colombiano. En el caso de homicidios, por ejemplo, el manual dice que la comunidad captura al implicado para entregarlo a las autoridades. Ahí no intervenimos.

Con el manual la comunidad dejó en claro que no quería más guerra, ¿pero esa ley popular, como usted la llama, no les ha traído inconvenientes con la fuerza pública o con grupos armados?

Con este sistema nos ha ido bien porque estamos construyendo la paz, pero, sí, en un momento el ELN, por ejemplo, se quiso tomar la zona y hablamos con ellos. Les explicamos que no queríamos guerra en nuestro territorio.

¿Y cómo fue ese encuentro?, ¿El ELN cómo tomó su petición?

Fue después de la firma del Acuerdo de Paz. Se convocó una reunión en plaza pública. Asistieron unas dos mil personas. Se les dijo que no queríamos más guerra, que ya habíamos tenido un grupo guerrillero aquí y que ese grupo, que era las Farc, ya había entregado sus armas. Les mostramos que muchos de los excombatientes ya eran parte de nuestra comunidad en calidad de desmovilizados y que muchos de ellos trabajan hoy en el campo o ayudándole a la comunidad.

¿Su apuesta es la reconciliación?

Aquí en Argelia la reconciliación ha sido muy importante. La reconciliación no es solo que 'Timochenko' estreche la mano con Santos. La reconciliación es recuperar el tejido social y empieza desde cómo pensamos nuestro 'sistema penal', que más que punitivo es pedagógico. La gente debe comprender que si comete una falta, debe ayudar a solucionar la situación.

En este momento, si bien no hay una disputa armada en Argelia, distintas entidades advierte que varios grupos están cercando el municipio.

Sí, todos los días aparecen grupos y, la verdad, nosotros no entendemos cómo en Argelia, que tiene un batallón con más de 1.500 soldados, todos los verracos aparezcan grupos o seamos amenazados por esos grupos que se quieren meter aquí. Es como repetir que las Fuerzas Armadas de Colombia se alían con grupos para cumplir con su objetivo. Por eso, nosotros muchas veces hemos retirado a la Policía del territorio.

¿No se sienten seguros con la presencia de militares en su territorio?

¿Usted se sentiría protegido por un grupo de Fuerzas Armadas que, cuando viene, mata y desaparece campesinos? Argelia también ha sido víctima de los 'falsos positivos'. Acá han cogido a personas en condiciones especiales para ponerles las botas al revés. En 2015, el Ejército vino y nos mató dos campesinos, ¿Qué comunidad se va a sentir protegida en esas condiciones?

En Argelia, Cauca, los campesinos que cultivan coca están asociados, en su mayoría, a la organización de juntas de acción comunal, ASOCOMUNAL, y a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, ASCAMTA. En este municipio, después del desarme de las Farc, la economía de la coca, a diferencia del café o la caña de azúcar, se convirtió en un estilo de vida rentable.

Guillermo explica que la pasta de coca se trabaja en laboratorios. Por lo general, la compran campesinos de la región para llevarla a los 'cristalizaderos', que están escondidos y en donde sí hay grupos armados. Allí, por último, se hacen otros procedimientos químicos para obtener la droga.

La coca, sin embargo, es un regalo envenenado, dice Guillermo. Las organizaciones campesinas consideran que se trata de un "cultivo de resistencia" porque fortalece la figura del campesinado como modelo viable, pero también lamentan que el paquete cocalero llegue a sus territorios con monocultivos y fumigación.

Por esto, por la amenaza latente de grupos armados en el municipio y por un inestable proceso de sustitución de cultivos, Argelia es claro ejemplo de la cuesta arriba que tiene el Gobierno en la lucha contra la coca.

Ante este complejo panorama, Guillermo y los otros campesinos organizados en ASCAMTA han asumido el compromiso de empezar a diversificar la producción, volviendo a sembrar pancoger —maíz, fríjol, yuca y plátano— y así recobrar la tradición campesina.

Usted ha trabajado organizando comités cocaleros. ¿Cómo avanza la sustitución de cultivos de uso ilícito en Argelia?

Nosotros organizamos a los cocaleros con el objetivo de negociar con el gobierno todo el tema de sustitución voluntaria y concertada de cultivos que se acordó en el marco del proceso de paz de La Habana. Si el gobierno tiene 200 millones para fumigar una hectárea de coca, ¿Por qué no mejor toma esa plata y la invierte en el abandono? Porque Argelia es uno de los municipios más abandonados de Colombia.

Cada vez que hay intentos de erradicar, pues es lógico que usted va a defender lo que le da la comida a su familia. Es que en Argelia en este momento no hay otra opción económica. Con la infraestructura que tenemos, no hay otra opción.

¿Fue necesario organizar a los cocaleros para negociar?

La cuestión de la coca en Argelia, así como en cualquier otra parte del país, debe ser entendida en el marco de una crisis permanente de la economía campesina. Nosotros organizamos los comités con el objeto de negociar en bloque con el Estado. La organización tiene como objeto mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Hemos intentado con proyectos económicos alternos, como producción de huevos y producción de pescado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el proyecto de una hidroeléctrica. Todo, para mostrarle al gobierno que existen rutas, pero parece que al Estado colombiano solo interesa pelear con el campesino y no solucionarle los problemas.

Históricamente, ha habido muchos proyectos que han buscado sustituir la coca y la gente siempre ha estado receptiva, pero todos fracasan. El único cambio que hay ahora es que la gente está organizada y está negociando en bloque, y eso no le gusta al Gobierno.

¿Por qué creen ustedes que no le gusta al Gobierno?

Porque logramos más cosas. En medio de este proceso, hemos logrado que el campesino pare de sembrar coca. Les pedimos que no amplíen la frontera agrícola para que no sigan aumentando los cultivos. Nuestra consigna es impedir que la gente amplíe sus cultivos de coca, que mantenga la misma cantidad. El problema es que, al parecer, al gobierno no le interesa. Vea usted, no están cumplimiento el punto de los acuerdo de La Habana que contempla todo el sistema de sustitución voluntaria y consultada. No le han invertido un peso.

Y ahora hay interés en reiniciar las aspersiones de glifosato sobre los cultivos ilícitos.

Vea, yo he sido víctima de ocho fumigaciones aéreas. A quienes están de acuerdo con que fumiguen que porque 'hay mucha coca', me gustaría ver qué harían si les fumigan el patio de la casa. Conozco lo desgarrador que puede ser que una avioneta bombardee con químicos para erradicar dos hectáreas de coca.

Además, el daño ambiental es enorme. No solo fumigan las dos hectáreas, también fumigan potreros, ojos de agua, la selva: el ambiente se vuelve invivible. La fumigación es una estrategia de desplazamiento, parece que al estado no le interesa erradicar la coca, sino desplazar a quienes la producen. Eso sin contar los daños en la salud a largo plazo.

Sobre ese frente ambiental, entiendo que usted también ha trabajado en comités en contra de la gran minería.

Los mismos comités cocaleros son comités contra la gran minería y uno de nuestros objetivos en común es la defensa del territorio. Nosotros sabemos que el subsuelo llama a la minería. Lo hemos investigado. Yo mismo adelanto ahora una investigación acerca de la explotación minera y nos hemos dado cuenta de que Argelia tiene 19 mil hectáreas en solicitud de intervención minera.

La mayor amenaza a la identidad campesina viene en forma de locomotora extractivista. Cada vez hay más multinacionales mineras que están obteniendo concesiones mineras en territorios poblados por miles de pequeños campesinos que subsisten en sus pequeñas fincas gracias a la economía cocalera y que hoy buscan diversificar esa producción.

Cerro Matoso, por ejemplo, tiene una concesión de título minero de casi 15 mil hectáreas para la explotación de níquel y otros minerales en la región de Timbiquí, Argelia y El Tambo. Pero estos megaproyectos encuentran su piedra en el zapato en la oposición organizada de las comunidades.

¿Qué están haciendo para resistir ante ese panorama?

Intentamos una alianza amplia para defender el territorio con consulta popular. Desde ASCAMTA lideramos un llamado a realizar una consulta en todo el municipio sobre la megaminería, pero ahora pretenden que los proyectos de gran minería no sean consultados con las comunidades ni campesinas ni indígenas ni afros que habitan ese territorio.

Las organizaciones están trabajando por un reconocimiento como Zona de Reserva Campesina para Argelia, ¿por qué?

Buscamos ser autónomos del desarrollo en nuestro territorio, pero, como todo: tenemos la organización, pero falta voluntad del Estado. La excusa es que Argelia tiene coca y, por eso, no puede ser Zona de Reserva. Seguramente, será la movilización social la que defina este asunto.

Para cientos de colombianos defender de esta manera sus territorios significa ser blanco de amenazas y persecución, ¿es también ese su caso?

La verdad, sí. He recibido amenazas de muerte y extorsiones. Es una pregunta bastante compleja. Algunos líderes aceptamos la medida de protección, pero otros no porque también es una cuestión riesgo. Yo apenas cuento con protección desde este año. Es que someterse a eso es exponerse y a veces solo basta exponerse para que lo maten a uno. Pero de cualquier forma, es incomprensible que lo amenacen a uno por ayudar a que su gente tenga un bienestar, ¿En qué cabeza cabe eso?

¿Qué debería hacer el Estado frente a ese problema?

Las organizaciones hemos planteado varias cosas: que haya énfasis en no estigmatizar la labor de los líderes y que se ponga atención en las personas que generan esta estigmatización. Pero la solución va mucho más allá. Es un tema integral: de garantizar los derechos del campesinado y tener presencia estatal en las regiones abandonadas. ¿Cómo? con conectividad, infraestructura, proyectos productivos que sirvan, con educación y salud, porque así se le hace frente a las economías ilegales que son el combustible de la guerra en los territorios.

¿Quiénes generan, según ustedes, esa estigmatización?

Eso hace parte de la guerra, le digo. En Colombia el conflicto no ha sido solo armado, también social. Los medios de comunicación están al servicio de quienes está en el poder y, desde ahí, se estigmatiza.

¿En qué se aferra para seguir con su labor?

Es un asunto de resiliencia, de esperanza en que todo va a cambiar. La lucha es inmensa, por el campesino, por ser sujetos de derechos y por el bienestar, pero hay que seguir. Mi familia a veces me dice que no me complique más la vida por estos temas, ¿pero qué hago si esa es mi forma de vida? Es como si le dijeran al futbolista que no juegue más fútbol o al periodista, como usted, que no haga más periodismo.

La constructora de paz del oriente antiqueño

Por William Moreno Hernández

En Granada, Antioquia, los lugareños dicen que hubo un tiempo en el que sus tierras se volvieron improductivas porque estaban manchadas de la sangre y la tristeza que provocó el conflicto armado. En este municipio cafetero y panelero, conocido como la despensa del oriente antioqueño y ubicado a 75 kilómetros de Medellín, la confrontación armada empezó a lacerar el tejido social desde 1987, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la extinta guerrilla de las Farc se asentaron en la región.

Así lo cuenta el informe 'Granada. Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción', publicado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Según esa investigación, las Farc entablaron una relación "autoritaria y cruel" con la población civil, como quedó demostrado en la primera toma guerrillera en Granada el 11 de junio de 1988. En este ataque, alrededor de 80 hombres que hacían parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar saquearon la Caja Agraria, la Oficina de Rentas Departamentales, una cooperativa campesina y una agencia de compra de café.

Las guerrillas, con el paso de los años, dejaron una estela de dolor marcada por asesinatos selectivos, secuestros, enfrentamientos con la Policía, desplazamiento forzado y extorsiones. Esa situación se intensificó en el 2000, cuando el Ejército entró a Granada para acabar con esos grupos armados sin ningún cuidado. La violencia aumentó gradualmente, pues al mismo tiempo se advertía la presencia de grupos paramilitares con la llegada de los bloques Metro y Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En el 2000, dos hechos marcaron la memoria colectiva del municipio. Primero, una masacre militar el 3 de noviembre, en la que 19 personas fueron asesinadas. Y poco después, el 6

de diciembre, en plena incursión de los frentes 9, 34 y 47 de las Farc, la detonación de un carro con 400 kilogramos de dinamita que dio paso a un combate ininterrumpido de 18 horas en medio de la población civil. Ese día Granada quedó en ruinas y con un saldo de 23 civiles y 5 policías muertos.

"Fue lo más negro que hubo. Yo era madre comunitaria y me tocó pasar la noche con los niños. Uno pensaba que no amanecía", recuerda Gloria Elsy Ramírez, integrante de la Asociación de Víctimas Unidas del Municipio de Granada (Asovida).

Gloria nació y creció en Granada. Su historia, como la de cada habitante de este municipio, está atravesada por el conflicto. A los 17 años se casó y decidió iniciar una nueva vida en Bogotá a mediados de los años noventa. Pero no resultó como esperaba. En medio de risas, confiesa que la ciudad la aburrió.

Al regresar a Granada, compró con su esposo una finca cerca al corregimiento de Santa Ana y allí, asegura, vio pasar varias veces hombres uniformados y armados. "No decíamos nada para no meternos en problemas, porque desde niños entendíamos cómo era todo", cuenta.

Un día llegó una citación a la finca de Gloria y su esposo. Grupos paramilitares habían organizado una reunión en la escuela de la vereda y la asistencia era obligatoria. "La propuesta era que les colaboráramos, pero a nosotros no nos pareció correcto —cuenta Gloria— la situación se puso difícil y con varios vecinos tomamos la decisión de desplazarnos en el 2001. Fue muy duro dejar nuestra finca".

Gloria fue una de tantos, de miles. El Registro Único de Víctimas (RUV) da cuenta de 15.759 acciones violentas y un censo de 8.889 víctimas del conflicto tan solo en Granada. Los registros del CNMH, por su parte, documentan 460 casos de víctimas de asesinato selectivo, 2.992 de desaparición forzada, 59 muertos en 10 masacres, 98 víctimas de secuestro y 50 de violencia sexual en el municipio.

Sin embargo, hoy el escenario es distinto. Gloria recuerda la violencia, pero también la resistencia de los granadinos, que desde bien pronto, dice, se unieron para acabar con el terror. En 2005, esta mujer, convencida de la paz, regresó al municipio y junto a otros lugareños creó la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida). Ahora, dice, no está dispuesta a dejar entorpecer la vida digna de este municipio.

¿Cómo fue el proceso organizativo de víctimas en Granada?

Fue muy charro (risas) porque formamos una organización cuando yo no iba con ese fin. Yo escuché un día una propaganda en radio que decía que un grupo de víctimas se estaba reuniendo para mirar a ver cómo salían adelante. Yo estaba en un momento económico difícil, entonces me imaginé que en ese grupo de víctimas iba a haber apoyo económico y yo le dije a mi familia: 'Pues yo voy a asistir a esa reunión a ver cuál es el proceso".

Cuando llegué, empezaron a decir que la idea era unirse como organización para poder hacer el proceso del rescate de derechos. Yo no entendía nada, pero me parecía agradable lo que escuchaba. Comenzamos a asistir a reuniones mensuales y, de un momento a otro, dijeron que nos íbamos a organizar legalmente, pero yo seguía sin entender.

Lo que hice fue hacerme parte del proceso y, como toda persona inquieta, preguntaba mucho. En ese espacio había gente que nos estaba dando información interesante, entonces yo preguntaba y preguntaba. Por ser tan preguntona llegué a ser parte de la junta de Asovida, pero me parecía extraño porque yo no tenía ni idea de esto. Yo no sabía nada de acción comunal.

¿Y cómo llegó a liderar la asociación?

Por votación. Cuando nos montamos en ese barco, empezamos a decidir liderazgos. Hicimos una votación y yo quedé de segunda, pero la compañera que sacó primera votación se iba a lanzar como concejala, entonces me tocó ser presidenta a mí en una organización donde no entendía nada. Pero en 14 años que llevamos trabajando con esto, creo que ninguna universidad del mundo hubiera podido darme la capacitación y el conocimiento que puedo tener hoy, que no es muchísimo, pero que me alcanza para muchas cosas. Aprendí, como dicen por ahí, 'a los guarapazos'.

¿A qué se dedica la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida)?

Somos un proyecto para trabajar en pro de la memoria de las víctimas del conflicto. En el 2007 nos dieron la personería jurídica y hoy somos más de 300 personas afiliadas.

Ustedes crearon una iniciativa de memoria llamada el 'Salón del Nunca Más', ¿de qué se trata?

El 'Salón del Nunca Más' es un espacio, primero que todo, de paz, reconciliación, perdón y amor. Es un espacio que permite sensibilizar a las personas sobre lo que vivimos en Granada durante el conflicto. Pero no es solamente el espacio, el sitio, sino que es el punto donde usted encuentra la memoria, donde usted encuentra la historia de las víctimas del conflicto armado, donde la gente se ubica, donde la gente siente que ahí está su familiar.

A nosotros no nos interesa la guerra. Para nosotros no es un beneficio, entonces este espacio tiene en cuenta también los procesos de resistencia que hemos realizado: jornadas de la luz, marchas por la vida y nuestros encuentros, foros y talleres en los que explicamos lo que significa la memoria. Obviamente, también contamos eventos como el del carro bomba, las masacres y el contexto de la guerra.

¿Por qué lo llaman el 'cementerio simbólico de Granada'?

Porque no hay lápidas, sino fotos. En el Salón están las fotografías de más o menos 300 víctimas. Con todo lo que vivimos, debería haber unas tres mil, pero esto es voluntario. No podemos obligar a nadie a que lleve las fotos. Cada quien, si lo quiere hacer, a medida de que va pasando el tiempo, siempre es bienvenido con mucho cariño. Si no, también lo respetamos, porque el dolor hay que respetarlo siempre.

Cada fotografía tiene una bitácora y cada bitácora habla de lo que era esa persona en vida, de lo que significaba para su familia. Por ejemplo, para los que tienen familiares desaparecidos es muy importante esa bitácora porque no se pierde ese lazo de afecto con esa persona que no está y, como no hay un cementerio adonde les puedan llevar flores ni encontrarlo, el Salón se ha convertido en un lugar focal para hacer duelo, así sea por medio de libros. Es una manera de decirles a los nuestros que no los hemos olvidado, que vamos a encontrar sus restos, que la sangre que pusieron es para que nosotros nos fortalezcamos como comunidad. Este espacio es para que la gente entienda lo que es la guerra en este país.

¿Y cómo nació la iniciativa?

Nosotros hacíamos asambleas mensuales con la gente para tratar de empoderarla, y de paso a nosotros. Era muy interesante. En esos encuentros había gente interesada en el tema de memoria. Nos hacían propuestas, que por qué no trabajar con espacios de memoria o que por qué no hacer

actos para recordar lo que pasó. Entonces, nos pareció bonito eso. Dijimos: 'Qué bacano ver que hay gente que le interesa no olvidar'. Pero no teníamos recursos.

La gente nos insistía que dejáramos el miedo, que las cosas se iban a ir dando paso a paso. Entonces, nos montamos en ese bus. Le mandamos la propuesta a la administración municipal para un presupuesto de 54 millones, que era para tratar de iniciar el proceso de memoria. Pero la administración nos dijo que no, que estábamos trabajando con lo que no es, que cómo iban a meter ese montón de plata si había gente con tantas necesidades en el municipio.

¿Qué hicieron entonces?

Buscamos otra entidad que sí aceptara el proyecto. Encontramos el apoyo del Programa por la Paz –Cinep, que nos asesoró y nos dio carta abierta para hacerlo. También nos apoyaron el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Personería Municipal.

Una vez con ese apoyo, ¿cómo fue poner en pie el proyecto? Porque, después de todo, se trata de un proceso de recordar.

Fue muy impresionante y muy duro. Cuando empezamos a juntar las fotos, no podíamos creer que entre nosotros había tanta gente muerta, que nosotros creíamos que estaban por ahí paseando o que se habían ido del pueblo. Nos dimos cuenta de que ni siquiera nosotros habíamos terminado de entender el conflicto que vivimos. Pero también fue muy hermoso porque pudimos enseñarle a la comunidad el valor de la verdad y la memoria. A la comunidad y a quienes vienen, porque, mal contadas, unas 50 mil personas han pasado por este espacio.

Hace unos meses trascendió que el 'Salón del Nunca Más' estaba enfrentando unos problemas de infraestructura, ¿cuál es el estado actual?

El Salón queda en una parte del sótano de la Casa de Cultura y ahí hay mucha humedad. Entonces, ha habido problemas con las paredes, el piso y el techo. También hay fotos y archivos que se están dañando. Pero hicimos un llamado, incluso una petición por Internet, y mucha gente nos apoyó. Recogimos cuatro millones setecientos mil pesos.

En estos días iniciamos el trabajo con un oficial para poner unas paredes falsas y quitar un poco la humedad. Mejor dicho, hacer el resane correcto para que quede todo bien organizado y poder pintarlo y adecuarlo, porque, además, tenemos que poner otras fotos y cosas que nos han traído.

Con esos cuatro millones que recogimos escasamente pagaremos el oficial, pero para nosotros es el valor más significativo que gente del común haya puesto su plata para sostener el Salón. Vale más que cualquier otro recurso.

Sumado a eso, la alcaldía municipal nos va a donar 30 millones de pesos para aportarle mucho más al espacio. El alcalde nos decía que tratáramos de embellecer el Salón al máximo, que se viera bonito y presentable para que la gente que llegue lo vea bien. Pero también, como nos van a donar otro espacio, hicimos una alianza con otra organización que se llama Tejipaz, que tiene que ver con el tema productivo y está apoyando a los campesinos que sacan café orgánico.

Con ellos vamos a instalar 'El café de la memoria'. ¿Qué significa? Que salimos del Salón después de la guía, pasamos por el pasillo donde están las muestras de lo que hemos hecho como organización y, paso seguido, está 'El café de la memoria', un salón donde usted encuentra un cuarto lleno de libros, de archivos que le han donado a la organización y ahí va a poder ver en unas pantallas historias y procesos de memoria. Y de paso se toma un café y apoya a Tejipaz.

Con todos estos proyectos, ¿cuál diría usted que es la importancia de mantener en pie estos espacios?

Imagínese usted un pueblo que sufrió una victimización tan cruel de más de 3 mil víctimas, con más de 600 desaparecidos, 97% de la zona rural desplazada y 73% de la zona urbana. Y si esto no lo conocen nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿A futuro qué esperanzas podemos tener? Creo que con esto de contar la historia para no volver a repetirla ya tenemos un porcentaje bastante alto de importancia de por qué estos espacios no pueden morir en el tiempo.

A propósito de memoria histórica, en febrero de este año se renovó la dirección del Cetro Nacional de Memoria Histórica. ¿Ustedes, como víctimas y como organización, cómo recibieron ese cambio? Se lo pregunto porque sé que ustedes adelantaron varios proyectos bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, incluso el Centro les entregó el sitio web del Salón del Nunca Más.

Es muy complejo porque es como cuando usted mueve fichas de ajedrez, pues yo lo comparo así más o menos. Los peones que quedan ahí, ¿al fin y al cabo qué? Ellos están protegiendo algo para que la reina y el rey no pierdan. Entonces, estamos muy en desacuerdo porque obviamente Gonzalo Sánchez para nosotros era el padre de la memoria, porque ese señor nos brindó un apoyo

impresionante con este tema. Entonces decir que estamos de acuerdo con esto, no lo estamos, pero obviamente nada podemos hacer si hay un gobierno que tampoco se interesa por estos temas.

Nosotros hemos sabido tener paciencia por más de 50 años para que las cosas mejoren y para que la guerra se acabe. Hemos tratado de ir al paso con eso para no dejarnos afectar demasiado, entonces yo creo que es seguir teniendo paciencia hasta que llegue un gobierno que realmente nos represente y nos quiera dar oportunidades de cambio. Eso y pedirle a Dios que nos siga protegiendo, porque no es fácil. Nosotros seguiremos trabajando la memoria en el territorio. Estamos en proceso de retirar nuestros archivos del Centro, porque no estamos de acuerdo con el proceso. Y por dignidad, hay que hacerlo.

En este momento hay varias preocupaciones alrededor de la paz. Una de ellas son las trabas a la implementación del Acuerdo y las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, que recientemente el presidente Duque tuvo que firmar por orden de la Corte Constitucional. ¿Ustedes, como víctimas, creen que hay una voluntad real para sostener la paz?

A ver cómo le respondo esa pregunta (risas). Sería tapar el sol con un dedo creer que están de acuerdo con esto. Nosotros sentimos que no. Pero como le digo, nosotros vamos a seguir construyendo desde nuestro territorio. Vamos a seguir trabajando por la paz, que es lo que nos convoca y nos mantiene juntos.

Nosotros queremos un territorio en paz. A nadie estamos ofendiendo y a nadie le estamos quitando nada. Nosotros estamos siendo imparciales. No estamos diciendo que aquí nos afectó solo un actor armado. No, aquí nos afectaron todos y a todos les hemos hecho el reclamo. Yo creo que la palabra juzgar no está en nuestro entorno, pero sabemos que no hay un apoyo real ni una convicción real de parte de quien nos está representando en este momento a nivel nacional. Pero bueno, es seguir unidos y tratar de hacer lo mejor posible. Estamos haciendo un proceso y estamos trabajando por eso. Eso es lo que nos convoca: trabajar unidos para dar un territorio diferente a nuestras familias.

En estos catorce años de trabajo con Asovida, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles?

Ha habido muchos, pero me parece muy duro ver que todo lo que nosotros hacemos construyendo en lo local parece que a nivel de país no se valora. Por ejemplo, cuando se dieron los resultados del plebiscito fue un bajón muy duro. Yo sé que somos diversos, pero la mayoría de gente que

votó en contra de los acuerdos lo hizo por ignorancia. Si fuera por conocimiento, no lo hubieran hecho. Esos son bajones muy bravos.

¿En medio de ese bajón, llegó a considerar retirarse?

¡Ay, Diosito santo! A ver cómo le explico. Lo que pasa es que uno tiene que entender que estamos en un territorio donde se defienden otros intereses particulares menos entender un poco por qué la paz es necesaria. En lo del plebiscito sí me dolió mucho que nuestra gente le haya dicho no a la paz así como de carrera, pero también hay que entender que no lo hicieron con todo el conocimiento. Si alguien o nosotros nos hubiéramos sentado a explicarles punto por punto a las personas, yo creo que hubiera sido diferente.

Pero era muy difícil con los medios de comunicación. La gente obra de buena fe con lo que le dicen los medios y el tema del periodismo, para mí, no es netamente profesional en el país. Falta mostrar esas realidades que todo el país debe conocer, pero que son ocultadas por varios motivos e intereses. La gente no votó que no por mala, sino por desinformada.

El otro gran problema que enfrenta la paz en este momento, y quizás el más alarmante, es la persecución y el asesinato de líderes sociales. Usted, como líder comunitaria, ¿a qué cree que se debe esa represión?

A ver, en lo poco que yo puedo entender, es porque estamos defendiendo nuestros territorios y denunciando casos de atropello. Incluso, algunos no se quedan callados y están hablando de los malos manejos administrativos de las alcaldías y de corrupción. Y esas denuncias, aunque no son tomadas en cuenta, molestan como cuando usted tiene una piedra en el zapato. Entonces, lo que hacen es quitarse la piedra del zapato y sacarla del camino.

Hay muchos a los que les conviene que la paz no llegue a los territorios porque viven de la guerra o ven que es un negocio. Y si se acaba, se les termina su cuarto de hora.

Decía usted hace un momento que parece que a nivel nacional no se valora el trabajo de las organizaciones de víctimas, ¿por qué?

Uno sí siente ese abandono de parte de muchas instituciones, ¿Pero qué puede hacer uno en ese sentido? Uno tiene que seguir trabajando así uno no siente ese apoyo. De todas maneras aquí en el

territorio, en Granada, muchísimas persona estamos trabajando por lo mismo. Entonces, nos dedicamos a nuestro trabajo.

Personalmente, yo no me identifico como líder. Yo no puedo decir que lo manejo todo, no. Sería muy injusto de mi parte porque aquí cada vez que hacemos un trabajo, lo hacemos en comunidad unas 20 o 30 personas. Y eso es lo que permite que las cosas avancen. Si dependiera solo de mí, no hubiéramos llegado a ningún lado, en parte por mi desconocimiento. Pero he aprendido de las personas que me acompañan y del proceso.

Por eso, yo siempre digo que, más que liderazgo personal, es un liderazgo colectivo. Sí es muy duro ver el abandono y la falta de justicia con esto, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y pensar que trabajaremos hasta que Dios nos lo permita.

¿Qué debería hacer el Estado frente a eso?

El Estado debería estar poniéndole la mente, el cuerpo y el alma a dar empleo, a ayudar con el tema de la paz, a ponerle sentido al agro colombiano, a trabajar por el país. Eso lo ve hasta un ciego con toda la ceguera que pueda tener. Pero no se está haciendo por muchos interés particulares. De parte de nosotros no hay nada más que decir, solo seguir trabajando. Nada más.

Gloria, ¿usted ha recibido amenazas por su labor en Granada?

En el presente, no. Gracias a Dios no porque nosotros, como le digo, estamos haciendo un trabajo muy sincero, muy tranquilo, muy relajado. Nosotros no estamos juzgando a nadie. Estamos tratando de mostrar unidos que vivimos una situación compleja, que nos afectó, que nos dolió, que nos dejó muchas insatisfacciones y tristezas, pero que hemos tratado de coger este rompecabezas al que le faltan unas fichas para poder completarlo y tener un territorio en paz. Es lo único que hemos estado haciendo.

¿Y alguien de Asovida ha recibido amenazas?

No.

Granada fue uno de los municipios del país más golpeados por el conflicto. ¿Cuál es la situación actual en relación a presencia de grupos armados?

El parte de seguridad que da el Ejército y la Policía es de tranquilidad. En lo que ellos informan, no hay actores armados en nuestro territorio y en las veredas tampoco se escuchan rumores. Hay cositas particulares de robo, de consumo de sustancias psicoactivas y cosas así, pero decir actores concretos no.

Recientemente usted recibió de manos de la Gobernación de Antioquia el premio Antioqueña de Oro en la categoría de 'constructora de paz'. ¿Para usted qué significa ser constructora de paz en un territorio como el oriente antioqueño?

Lo primero que tengo que decir es que yo ese premio lo recibo a nivel de comunidad. Es decir, no lo siento solamente mío, porque tuve muchas personas acompañándome en el proceso. Este es un reconocimiento para toda la comunidad de Granada, que ha sido muy resiliente y luchadora para salir de todas las dificultades que le impuso la guerra. Yo soy solamente un eslabón de ese proceso.

Para mí fue muy bonito el reconocimiento, pero también aclaro que no es lo que uno anda buscando en esto. O sea, que lo reconozcan a uno como constructora de paz me parece bonito, que le digan a uno que está construyendo paz tiene su significado muy importante, pero eso tiene que verse plasmado en el territorio. Se está cumpliendo, pero no lo reconozco solo en mí, sino también en muchos compañeros y, sobre todo, en la comunidad.

¿Qué sigue para Asovida y para Granada?

Seguir trabajando por la paz, ese es nuestro deber. Pero la paz no se logra solo nombrándola, clamándola. La paz se logra teniendo derechos de por medio: la verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, la no repetición. Que podamos seguir viviendo acá, como estamos. Que no venga nadie a entorpecer nuestra vida digna. Entonces acá seguimos, contando lo que pasó y compartiendo lo que hacemos para construir memoria, porque la memoria nos lleva a una construcción de paz, a una construcción de territorio y a trabajar por la reconciliación.

La carimba contemporánea

Por: María Camila Rincón Moreno

Juan de Dios Mosquera nació en Santa Cecilia, Risaralda en un caserío en la selva. Siempre

quiso estudiar, y cuando pudo se fue a Pereira, donde realizó sus estudios como educador en

ciencias sociales, para luego hacer una maestría en sociología latinoamericana. En 1976 se

convirtió en un activista por los derechos de la población afrocolombiana. Hoy es el director

nacional del Movimiento Nacional por los derechos humanos afrocolombianos Cimarrón, fue uno

de sus fundadores y su principal ideólogo.

Su nombre completo, dice, es Juan de Dios Mosquera Mosquera Mosquera Torres, así, con

cuatro apellidos. Eso significa que sus ancestros fueron propiedad de las familias Mosquera y

Torres de Popayán, quienes les colocaban la carimba, la marca de la familia. Se les marcaba en un

hombro, en un pómulo, en la frente o en una nalga como símbolo de su propiedad, al rojo vivo

como las vacas. Juan dice que él lleva una carimba simbólica, por sus apellidos, la carimba de los

amos de sus ancestros, de los Valencia, los Caicedo, los Holguín, los Díaz, los Granados que

heredaron la riqueza y el poder que generó la institución de la esclavitud y el colonialismo.

En 1746 la corona española prohibió la carimba y los afrodescendientes siguieron con esos

apellidos ya por tradición. Hubo algunos ancestros que huyeron a los montes y pudieron conservar

los nombres africanos como Arará, Bendel, Lucumí, Congo, Angola, Ocoró, Dajomé, Banguera,

Chará. Todos esos apellidos indican de qué culturas africanas fueron secuestrados los esclavos.

Hoy Juan lucha para reconocer a estas comunidades que perdieron su identidad cultural y étnica,

y sean conocedores de su propia historia.

En 1982 fundó el Movimiento Nacional Cimarrón, junto con el círculo de estudios de la

problemática de las comunidades afrocolombianas Soweto. El Soweto fue fundado en Pereira en

1976 por un grupo de jóvenes afros de diferentes regiones del país preocupados porque no sabían

49

nada sobre la historia, la problemática y la importancia de los pueblos africanos en la construcción de Colombia y del mundo. Juan de Dios Mosquera y otros compañeros se reunían todos los sábados de 6pm a 10 pm con un plan de conferencias y de charlas. Fue en esas reuniones en donde comenzaron a construir los conceptos sobre la realidad afrocolombiana que permitieron fundar el movimiento.

El conocimiento de los conceptos los indujo a que había que crear una organización para llevarle a las comunidades afro del país todo lo que habían aprendido como la conciencia cimarrona, para promover la misma organización entre las comunidades, la exigencia de sus derechos y la reivindicación de su identidad étnica y la lucha en general por la justicia.

El nombre Cimarrón evoca la heroica hazaña protagonizada en América por los pueblos africanos, en su lucha por los derechos a la libertad, la dignidad e identidad cultural, y en rebeldía contra el colonialismo europeo. En América, fueron llamados Cimarrones los africanos esclavizados que se refugiaron en las selvas para conquistar la libertad y desarrollar una nueva sociedad, libre de esclavitud, en sus territorios y poblados llamados Palenques. La misión del movimiento es que todo cimarrón y toda cimarrona debe pensar y actuar para organizar, concientizar, construir identidad cultural y movilización ciudadana y política para las comunidades.

¿Cómo llevan la misión del Movimiento Nacional Cimarrón a unos objetivos concretos?

El primer gran objetivo es promover el ejercicio real de los derechos humanos por parte de las comunidades afrocolombianas. Ojo, no es protección, porque nuestras comunidades no ejercen sus derechos, porque se les siguen vulnerando. El segundo objetivo es promover, impulsar la construcción y el fortalecimiento de organización nacional afrocolombiana, no de esa cantidad de fundaciones de papel, es crear poder organizativo. El tercero es formar el liderazgo afrocolombiano, entregarle los principios, los valores y el pensamiento cimarrón a las comunidades. El cuarto objetivo es desarrollar la incidencia política en pro de políticas públicas con el enfoque étnico y defender en esa incidencia los derechos de nuestra población vulnerados por muchas leyes. Por ejemplo, que planeación nacional no incluye un artículo especial reconociendo a la población afrocolombiana sus derechos étnicos. Hay que pelear para que lo

hagan como si no fuéramos colombianos. Y el último es promover el desarrollo humano integral de la población afrocolombiana. Nuestras comunidades siguen sufriendo las consecuencias de la institución española de la esclavitud.

¿Cómo fue el proceso para la liberación de los esclavos en la colonia?

El 21 de mayo se conmemoran 167 años de la promulgación de una ley que se llamó Ley sobre la Libertad de los esclavos. No fue una ley sobre la abolición de la esclavitud de las personas africanas en Colombia. Es la ley sobre la libertad de los esclavos, un esclavo es una propiedad, no es un sujeto de derechos y la libertad es un derecho fundamental que solo lo ejercen los ciudadanos. Un esclavo no era un ciudadano, por tanto, no nos reconoció como gente, como personas. Por eso no nos concedieron derechos. Ni siquiera nos reconocieron con el concepto colonial de negro. Lo que se abolió fue el modo de trabajar y producir con esclavos. No fue el derecho a la libertad de unas personas, sino de esclavos.

No nos consideraban como miembros del estado de la ciudadanía, de la nación. A partir de esa ley nos invisibilizaron por completo en Colombia. Esa ley nos llamó esclavos y después nunca nos volvieron a mencionar, ninguna constitución, ni ley nos reconoció, ni nos nombró siquiera. Quedamos totalmente ignorados dentro de la nación colombiana y dentro del Estado hasta 1991.

¿Cuáles son esas consecuencias que se ven en la sociedad de hoy?

Hay muchos que dicen "Eso ya no hay problema, la esclavitud se acabó hace mucho", incluso nuestra propia gente utiliza ese argumento todavía, porque no quieren saber nada de esos tiempos. La esclavización duró cerca de 400 años, creando un sujeto llamado negro, que significaba esclavo y animal, no personas de piel negra. Era un sujeto creado por los europeos. La pobreza crítica, la marginalidad social, el atraso educativo, porque era prohibido enseñarle a leer y escribir a un esclavizado, y el racismo son consecuencias de los 400 años de esclavitud de los afrocolombianos. Hoy hay discriminación racial, negación de las oportunidades, segregación, no inversión, no política pública diferenciada, desorganización social, etc. Violencias contra la mujer. Por un segundo imagínate que tú eras una niña de 10 años esclava, propiedad de un español. Si hoy hay la violencia que hay contra las mujeres, te imaginas como era con sus vacas, ¿con sus propiedades?

Bueno, las consecuencias son un montón. Quedaron sumergidas en el conjunto de las relaciones sociales de la sociedad de los países donde hubo esclavitud. La esclavización generó brechas

profundas de injusticia y desigualdad entre la población africana descendiente colombiana y los españoles y mestizos de piel blanca, que sobreviven hasta el día de hoy.

¿Cómo definiría el racismo de hoy en día?

Acá el racismo hay que entenderlo siempre junto a la discriminación racial. El racismo es la mentalidad de prejuicios racistas coloniales esclavistas, ósea ese conjunto de fijaciones, de imágenes, de estigmas que se generaron, o que se inventó el español, en contra de las personas afrocolombianas esclavizadas, en contra de su humanidad. Se niega la condición humana, y se inventa el estereotipo para reafirmas la condición de animal, de salvaje. Entonces racializan a la persona africana y colocan su color de piel como una seña para mostrar la condición de negro, eso es racismo.

¿Cuáles son esos prejuicios racistas que se ven en Colombia?

Que el negro es sinónimo de pobre. Bob Marley en una de sus canciones nos dice "debemos liberar a nuestro pueblo de la esclavitud mental" Todo está en la mente, tanto esos prejuicios como el endo-racismo. Esas creencias que se tienen frente a los afrocolombianos como que todos son ladrones, embusteros, sucios, incapaces, brutos, violentos, perezosos (imagínate, el que trabajaba era el esclavo, pero el español le decía perezoso). Son prejuicios que se mantienen hasta el día de hoy, porque de parte del Estado y de la sociedad no hubo una acción de comunicación, no hubo una acción educativa para eliminar todas esas consecuencias que generó la esclavitud, materiales y espirituales.

¿En Colombia las poblaciones afrodescendientes sufrieron el racismo diferente al de Estados Unidos o Sudáfrica?

El racismo que hubo en esos países te induce a pensar que acá en Colombia no había un racismo igual, porque en Sudáfrica y en Estados Unidos tuvo como expresión fundamental la segregación violenta e institucionalizada. La ley primero definió quién era el sujeto negro: "negro es quien tenga una gota de sangre africana en su piel" Eso lo dijeron los racistas en Estados Unidos, ex esclavistas que impusieron normas, leyes que institucionalizaban la segregación y crearon organizaciones paramilitares racistas para mantener esa segregación y la supuesta inferioridad de la gente de piel negra. Entonces si tú comparas eso con América Latina entonces uno piensa "acá no hubo eso, acá vivíamos muy sabroso, acá no había racismo ni discriminación, acá vivimos en

una democracia racial, todos juntos" [Se ríe] No había una segregación violenta ni institucionalizada, ni grupos racistas que trataran de imponer la distancia a la gente afro.

Pero acá fue peor, se convirtió en cultura. Allá esos actos generan una permanente acción y reacción de las víctimas, una lucha constante, pues los estaban agrediendo todos los días. Que no se podían casar con una mujer de piel blanca, que no se podían sentar en la misma silla donde se siente una persona blanca, que no se podían hospedar en un hotel donde se queda gente blanca, entonces eso lleva a que las poblaciones afrodescendientes mantengan una rabia, una resistencia, una rebeldía constante contra eso y generar una lucha. Acá la situación fue diferente, acá se decía que quién tenga una gota de sangre europea es considerado como blanco, entonces el deseo de todo el mundo es querer blanquearse, cosa que se llama Endo-racismo. Todo el mundo despreciando lo negro, lo más oscuro de la piel y privilegiando la gota de claridad en la piel para mostrar ascenso social.

En el censo de 2005 hubo muchos problemas con la población afrocolombiana, porque en muchas ocasiones no llegaban hasta todos los territorios y por ende no estaban incluidos en el censo. ¿Qué pasó con el censo de 2018?

El censo debe dar la población total que tiene la nación y que el Estado debe atender a través de las políticas públicas. Es la medida oficial para invertir el presupuesto de acuerdo con el número de población que tenga cada municipio El censo de 2018 fue un fracaso para la nación en su conjunto, pero más para las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Primero, el operativo censal no fue correctamente ejecutado, no se sensibilizó ni capacitó a los censistas para la pregunta étnica, especialmente para la población afrocolombiana. Segundo, no se planificó llegar a todos los territorios con censistas de los mismos territorios que conocieran el terreno. Tercero, las comunidades afro, buena parte de los territorios, están todavía siendo víctimas del conflicto armado y los grupos armados impedían el trabajo de los censistas. El otro tema es que se hizo coincidir las elecciones con el censo. Eso fue un fracaso total porque los políticos de todo el país no estaban comprometidos con el censo sino con las elecciones.

Entonces por eso disminuyeron las poblaciones de departamentos como Nariño, Valle, Cauca y Chocó, de ciudades emblemáticas para el pueblo afrocolombiano. Nuevamente perdimos la oportunidad de haber realizado un conteo correcto de la población afrocolombiana. Yo pienso que el estado colombiano, así como no nos incluye en el plan de desarrollo de una manera normal y

generosa, teniendo presente la grave situación de nuestras comunidades, de la misma manera no quiere conocer que la población afrocolombiana es una gran mayoría en el país, que puede ser incluso más de la mitad de la población. Genéticamente somos la población dominante. La población afrodescendiente en Colombia tiene muchos colores, unos de piel negra, otros de piel clara por el afro mestizaje y esa población afrodescendiente de piel clara que, sí se auto reconoce afrocolombiana, junto con la afrodescendiente, constituye junto con la población de piel negra, la mayoría de la población del país.

¿Cómo fue la representación de los afrocolombianos en el proceso de paz?

Dentro de todo el proceso, aceptaron que un grupo de activistas afrocolombianos fuesen a La Habana a exponer las demandas que la población afro hacía. A mi me invitaron, pero no quise aceptar la invitación porque, si bien era importante plantearle a la mesa la realidad afrocolombiana, realmente si no salía de la misma mesa de una manera sincera el reconocimiento de los derechos de la población afrocolombiana por parte del Estado y las Farc, o al menos un compromiso por cumplirlo como parte del pacto, eso no iba a significar nada.

Y lo que pasó fue justo eso. La gente expuso sus problemas y al final dijeron que iban a elaborar unas cláusulas finales y la gente salió diciendo que se había hecho un acuerdo étnico. Pero no, fueron unas salvaguardias finales, pero no fue un acuerdo entre las Farc y el Estado, sino que fue digamos un anexo final donde se compromete el Estado y las Farc a respetar los derechos de nuestras comunidades y sus territorios. Pero no como acuerdo, porque no quedó en los acuerdos oficiales. Por eso hasta ahora ni se ha mencionado más. Algo parecido a lo que ha pasado con los decretos de ley diferenciados para víctimas afrocolombianas indígenas que salieron de la ley de víctimas que, para atender a las poblaciones étnicas se elaboraron diferenciado por fuera de la Ley de Víctimas y no se han cumplido.

¿Por qué cree que pasan ese tipo de cosas?

Pues por demagogia. Porque aquí siempre la elite española descendiente colombiana trata de solucionar los problemas a través de una ley y gana tiempo para no cumplir nada.

¿Cuáles han sido los mayores retos de las comunidades en el posconflicto?

Lo primero que hay que tener presente es que, en la inmensa mayoría de nuestras comunidades, especialmente en el Pacífico, en algunas zonas de Antioquia y en el Cauca, no tenemos posconflicto, la guerra continúa. En el pacífico sigue y tu ahí escuchas que se desmovilizaron las Farc, pero ahí quedaron algunos grupos y el ELN, más los grupos de los narcotraficantes que tienen sus cultivos y sus negocios. Entonces nosotros no tenemos posconflicto. Los programas, proyectos y planes de acción de los acuerdos de paz no le están llegando a esas comunidades que siguen siendo víctimas del conflicto. En el Caribe, especialmente en los montes de María, se le han venido reconociendo a varias comunidades la restitución de sus tierras, lo mismo en Urabá. Pero esas comunidades están siendo hostigadas, amenazadas. Sus líderes son asesinados por parte de grupos que todavía existen de desmovilizados, de los paramilitares y los testaferros que eran dueños de esas tierras.

¿Qué pasa con los líderes sociales?

Es una problemática que se ve cada vez más. Tú ves que el país, que el partido Centro Democrático encabezado por el expresidente Uribe tiene al país polarizado. Con actitudes de odio y de venganza, con convocatorias de eliminación del contrario. Eso genera las conductas de grupos para eliminar a los líderes sociales en las comunidades que se parecen un poco a ese enemigo frente al cual nos han radicalizado. Entonces un líder de una junta de acción comunal, un líder de un consejo comunitario, un líder de una organización étnica o un líder ambiental es en enemigo de los políticamente radicalizados. Tanto de izquierda como de la derecha o de los narcos. Ese es el problema, nos siguen matando y si el líder hoy no se auto protege y sale de la comunidad lo matan. Él no puede quedarse allá porque está indefenso.

Uno de los más grandes problemas es la falta de atención que tienen estas comunidades. ¿Cómo llamar la atención del gobierno y de los medios de comunicación sobre esta problemática?

Hemos estado luchando, pero debemos adoptar y asumir el ejemplo de los pueblos indígenas del Cauca. Son poderosas organizaciones, con identidad cultural y política. O sea, la visión de Cimarrón se tiene que trabajar más y más, porque nuestro pueblo sigue con la esclavitud en la cabeza, estamos desorganizados y un pueblo solo puede conquistar sus derechos si se empodera a través de la organización, la movilización y la política. Nuestras comunidades están en manos de la politiquería, de la corrupción. Nosotros elegimos nuestros alcaldes que, aunque sean de las

propias comunidades, no representan a los afrocolombianos. Representan a sus bolsillos y a sus amigos políticos.

¿Cómo ha sido la representación política de los afrocolombianos?

Nosotros nunca hemos tenido representación política como pueblo en este país. A un pueblo lo representan sus organizaciones sociales, políticas y sus partidos. Nosotros no hemos tenido partidos populares surgidos con el pueblo, no hemos tenido una participación política colectiva como pueblo. Tenemos personas de piel negra en el congreso, en los concejos, en la asamblea, pero ellos no representan sus partidos, representan los de los amos. No simbolizan los movimientos de los pueblos afro, ni asumen tampoco esa representación. ¿Tu escuchas políticos en el país asumiendo vocería, denunciando, luchando por nuestras comunidades? No. Ahora que estamos en la discusión del plan de desarrollo, ni el gobernador del Chocó, ni el alcalde de Buenaventura o el de Tumaco ponen en la agenda los temas de los afrocolombianos. Entonces esas se convirtieron en las tareas de Cimarrón. Ese es el activismo que hacemos en la organización y el que yo he hecho toda mi vida y seguiré haciendo hasta el resto de mis días. Y cuando me muera ahí quedarán mis libros. Todo lo que yo pienso lo escribo para que nuestro pueblo pueda desarrollar conciencia política.

¿Qué necesitan las organizaciones afrocolombianas para poder cumplir todos sus objetivos?

Esta lucha, la reivindicación y la organización es un trabajo social que necesita recursos, comida, vestidos, costal para ir a mercar a la plaza. Necesita recursos para desarrollar los programas y los proyectos de la organización. Porque ni el Estado ni las empresas privadas apoyan nuestras organizaciones. No nos apoyan, entonces en esas circunstancias hay que hacer un gran sacrificio todos los días. En nuestro país no hay la tradición gringa de donar. Uno va a los Estados Unidos, va a conferencias y la gente siempre se me acerca al final y me dice: ¿Cómo puedo donarle a Cimarrón 100 dólares? Aquí en el país es al revés. La gente cree que las organizaciones están llenas de dinero y van es a pedir. Ahora estamos en la semana internacional de la solidaridad con las víctimas del racismo y la discriminación establecida por la ONU ya hace bastante tiempo. El 25 de marzo estamos conmemorando el día del recuerdo de la trata esclavista. Mira lo importante que es esto para la democracia colombiana, no solo para los pueblos afro. Pero esto ¿quién lo asume? ¿el Estado? ¿la sociedad colombiana? ¿las universidades? No, no les importa. Entonces la

lucha es muy dura y necesitamos el apoyo, la solidaridad y la donación de la gente solidaria con nuestra causa.

Por ejemplo, sostener la oficina, con un equipo en el centro de Bogotá es tremendo. Para nosotros el activismo significa conciencia, convicción, sacrifico, disciplina, constancia y mucha resistencia, de lo contrario no se puede movilizar a otros activistas para que sean agentes de cambio de la realidad, de esa injusticia y desigualdad que vive el pueblo afrocolombiano.

¿Cómo concientizar a los colombianos sobre la problemática?

Esa es la tarea de los activistas. Lo primero que tenemos que tener claro los activistas es el pensamiento, la conciencia crítica frente a la realidad que queremos transformar y cambiar. Esa conciencia debemos transmitirla al pueblo colombiano y en especial al afrocolombiano, a las víctimas. ¿Cómo? A través de la palabra, de programas de educación de la población como las escuelas de liderazgo. A través de las estrategias de comunicación, los libros, los escritos y la movilización social. Nosotros el 21 de marzo, que comienza la semana de la solidaridad, convocamos una marcha contra la discriminación racial y el racismo. En los últimos dos años no hemos podido hacerla. Tú no sabes el dolor que yo tengo porque no hemos podido hacerla. Porque no le podemos quitar el día de la comida a nuestra gente y ellos todavía no tienen la conciencia para decir: voy a dejar de comer hoy y voy a ir a la marcha. Entonces no hemos tenido los recursos, porque necesitamos como 30 buses para sacar a las personas de sus hogares. Antes de la marcha tenemos que ir a los barrios a sensibilizar a los jóvenes sobre los motivos de la marcha.

Los líderes fantasmas

Por María Camila Rincón Moreno

Desde pequeño, Camilo Quintero Giraldo creció junto a la naturaleza. Nació en un municipio llamado Granada en Antioquia, en un pueblo pequeño. Creció rodeado de ríos y montañas. Pasaba sus días con su abuelo, quien era campesino, y le enseñaba muchas de las labores del campo y de la importancia de la convivencia entre el humano y la naturaleza. Siempre estuvo conectado con el ambiente, pues dedicó su profesión a la defensa del mismo.

Estudió derecho en la Universidad de Antioquia y comenzó a considerarse activista cuando entró a la clínica jurídica en la universidad, una instrucción del derecho que rompe con la enseñanza tradicional, memorística, enciclopédica y vertical. Lo que busca es lograr sensibilizar a los estudiantes en algunos temas puntuales, pues hay clínicas de todos los temas, pero Camilo se enfocó en el ambiente. Fue entonces su primer acercamiento con la vida de activista, ya que se comenzó a involucrar con varios grupos en Medellín. Al graduarse de la universidad, comenzó en el colectivo Túnel Verde, un movimiento que lucha por la protección de la naturaleza y del ambiente en Medellín, que busca lograr que la construcción de la ciudad fuera participativa, que tuviera acceso a la información y a la participación.

Después de trabajar con varias universidades y en proyectos como la Mesa ciudadana por la calidad del aire de Bogotá, recibió una llamada del Ministerio de ambiente. En 2015 fue Líder estratégico de la Unidad de Gobierno abierto del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Todo lo que hizo durante su tiempo en el gobierno fue trabajar para el reconocimiento de la labor de los defensores ambientales y lograr que las políticas públicas que se hicieran fueran adecuadamente informadas para la protección de estos líderes. "Yo me describía como un activista dentro del gobierno", dice Camilo. Su prioridad era abrirle las puertas a los diferentes sectores para

que se pudiera generar confianza con las comunidades y así que el ministerio tomara las mejores decisiones con base a las necesidades del ambiente.

En 2018 salió del ministerio a trabajar como director de la Clínica jurídica por la Defensa de los Derechos al Ambiente Sano de la Universidad de los Andes, donde, desde la investigación y la educación, trabaja temas ambientales para la incidencia en diferentes políticas públicas, especialmente para la protección de líderes ambientales. Según Global Witness, organización inglesa especializada en temas de Derechos Humanos, corrupción y delitos medioambientales, Colombia es el segundo país en el mundo con más activistas medioambientales asesinados, con 37 homicidios registrados en 2017, alcanzando así un máximo histórico en el país. En 2014, 25 defensores fueron asesinados, y en 2016, 26. La estadística va en ascenso. Por eso en el momento están trabajando en un informe para establecer cuáles son las cifras exactas de la violencia contra los defensores en el país y con esto proponer acciones, tanto pedagógicas como de protección y de normativa, para que haya una protección integral a los activistas ambientales.

Camilo Quintero lleva toda su vida trabajando por y para el medio ambiente y dice que ha sido la labor más reconfortante de su vida. "Afortunadamente en los últimos años hemos tenido mucho apoyo y los problemas ambientales que solo tratábamos unos pocos ahora son preocupaciones de muchas personas".

¿Cómo ve el activismo ambiental en Colombia?

Yo veo el activismo ambiental muy fuerte hoy en día. Creemos que ha sido gracias a diferentes movimientos, acciones y personas que han traído el activismo ambiental a la agenda pública. También, las redes sociales han servido mucho para visibilizar los problemas ambientales y para que más personas se sumen al activismo ambiental y que sean consciente de las diferentes problemáticas que hay en el país.

Se han hecho esfuerzos grandes para unir a los diferentes movimientos ambientales para que no haya como una división de los movimientos, sino para que haya una unión de fuerzas para lograr acciones más concretas y más efectivas. El proceso de paz ha servido mucho, antes siempre se hablaba de Farc y guerra, ahora la agenda pública se ha diversificado mucho. No hay día en que no se hable de temas ambientales, si no es calidad de aire, es deforestación, es el problema de los

plásticos, es cualquier otro problema ambiental que se esté presentando y creo que eso es muy importante, para fortalecer la democracia ambiental en el país.

¿Cuál es el papel que deberían tomar los medios de comunicación en la situación?

Es clave que los medios de comunicación den difusión a las diferentes actividades e investigaciones que hacen tanto la academia como los activistas. Tienen que ser unos aliados importantes. Conocemos que los medios de comunicación tienen unos intereses y unas líneas particulares, pero creo que todos deberíamos estar comprometidos en temas de mejorar la calidad del ambiente en el país. Un problema puntual es que los periodistas, por ese día a día y por la rapidez de las noticias, no se permiten investigar a fondo sobre los verdaderos problemas. Hemos notado que falta mayor rigor técnico a la hora de exponer los diferentes problemas socioambientales. Es importante tener una capacitación permanente con los periodistas y los que son del área ambiental, deberían tener un conocimiento de los temas que manejen. Digamos el tema de la calidad del aire no se hubiera visibilizado si no fuera por los periodistas.

¿Desde cuándo el problema de la calidad del aire persiste?

El problema de la calidad del aire viene desde hace muchos años en el país. Particularmente siempre se ha hablado mucho de los temas ambientales en los últimos años. Se volvió muy mediático, es un tema de moda en donde ya todo el mundo está interesado. Fue gracias al trabajo de los propios activistas ambientales, acompañados también de la academia, los que dijeron que el tema era muy grave y que se necesitaban medidas más estructurales ya que las alcaldías no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Como que la academia y los activistas hablaban mucho, pero las administraciones públicas no tomaban decisiones fuertes frente al problema. Además, porque el tema no era muy sensible en los medios y la gente como no sabía no hacía tanta presión al gobierno para que hiciera cambios.

Gracias al trabajo que han hecho los activistas y algunas organizaciones el tema se ha posicionado en la agenda pública del país, eso ha hecho que el tema sea más visible, pero este existe desde hace mucho tiempo. Muchos años, diría yo, pero la situación se agravó más que todo a partir del 2000.

¿Qué agravó el problema?

Es la forma en la que estamos construyendo las ciudades, la dependencia al Diesel y al vehículo particular. Las industrias contaminan dentro de las ciudades y no hay cabios, no hay transiciones a una movilidad más amigable con el ambiente. Las acciones tomadas no son suficientes y ni son estructurales para lograr un cambio en la problemática del aire. Las acciones tomadas son pañitos de agua tibia y no logran cambiar ese paradigma.

Aunque el problema lleva casi 20 años, ¿por qué se visibilizó hasta hace poco?

Por la apertura de datos. Hay una transparencia de la información pública, eso es fundamental. Como los mapas que pone el IDEAM en internet que ayuda a visibilizar a las personas en qué estado está la calidad del aire en la ciudad. También ayudó a que la calidad del aire entrara en la agenda de los medios, todas las campañas que han hecho los activistas han ayudado mucho. Pero a pesar de eso, cada ciudad debería tener una red de monitoreo de la calidad del aire. La de Bogotá es muy regular y no es tan confiable como otras. Hay una muy buena que es la de Antioquia, la del Valle de Aburrá. Allá sí se ofrece información precisa y ayudó mucho porque apenas salieron los datos los activistas presionaron y se visibilizó el problema. Ahí fue cuando la gente se dio cuenta de la situación. También ayudaron las cifras en temas de estudio de enfermedades causadas por la contaminación. Las cifras del Instituto Nacional de Salud determinan que 15mil personas al año se mueren por enfermedades ocasionadas por la contaminación del aire. Hoy las clínicas están llenas de personas que tienen problemas respiratorios asociados a la contaminación del aire. Los más afectados son los niños menores de 5 años y las personas de la tercera edad. Es un tema bastante grave y que requiere medidas estructurales en todos los sectores.

¿Qué medidas debería tomar el gobierno para cambiar la situación que den resultados a largo plazo?

Lo primero a aclarar es que el pico y placa sirve como medida pedagógica, mas no una medida que ataque el problema de calidad del aire, porque la fuente que está atacando, que es la de los carros particulares, no es realmente la fuente de la contaminación grave en la ciudad. Sin embargo, sí ha tenido un efecto, no en el pico y placa dirigido a automóviles, sino en el que es dirigido a vehículos de más de dos toneladas que usan Diesel y que se transportan por vías centrales. Digamos que eso si se ha podido evidenciar como una buena medida que ha reducido un poco a contaminación.

Para solucionar el problema el distrito debe tomar medidas estructurales y preventivas, y no solo medidas reactivas, que es un poco lo que se ha hecho este año. El distrito responde rápido a las crisis de la calidad del aire, pero no responde atacando la fuente. Las medidas preventivas deberían estar más dirigidas a la reconversión del uso de combustibles en fuentes fijas. Todavía hay una industria que utiliza carbón, aceite y leña, que deberían hacer como una reconversión a otro tipo de combustibles de menos emisiones. Lo mismo debe suceder con fuentes móviles como el transporte público y de carga. Estas son acciones a largo plazo. También, en el caso de situaciones de emergencia ambiental, como el caso de incendios y demás, debería haber un plan de acción mucho más claro y contundente, uno no tan improvisado como el que hubo este año.

¿Por qué Enrique Peñalosa rechazó el plan de buses eléctricos del gobierno de Gustavo Petro?

La motivación real de Peñalosa no sabemos cuál es, pero sí claramente el cambio en la implementación del Plan Nacional de Descontaminación parece que fue más un tema de voluntad política. Ahí lo que pasó era que una de las medidas más efectivas para la mejora de la calidad del aire era la implementación de filtros para los motores de los vehículos Diesel, los filtros capturan aproximadamente el 95% de las partículas, entonces ahí ya se estarían reduciendo las emisiones un montón. El argumento del decreto de Peñalosa que tumbó esa medida fue porque la sostenibilidad fiscal no daba, porque al implementar los filtros estos se rompían muy rápido, eran costosísimos y se dañaban los motores porque se taponaban. La verdad, son un montón de excusas. La medida quedó hasta ahí, después de todo se volcó la licitación de la línea 1 y 2 de Transmilenio que iba a traer una nueva flota y lo de los filtros se dejó un poco de lado. Esta licitación sí trae un avance en el uso de combustibles más limpios, pues los buses que vienen son motores de construcción más limpia. Pero todavía falta como seguirle empujando a este tipo de estrategias para mejorar la calidad del aire en la ciudad.

¿Cuál sería la estrategia ideal para mejorar la calidad del aire?

Lo ideal sería toda una flota de transporte eléctrica, cero emisiones de todo.

Con La Mesa también hicieron una campaña para mejorar la calidad del aire, en Medellín y Bogotá, ¿sí les han servido estas campañas para la concientización de los ciudadanos?

Sí, yo creo que han dado un resultado muy positivo. Hemos logrado que la gente se concientice mucho más y que por lo menos se enteren del tema de la calidad del aire. A su vez ha llamado la atención de muchos medios de comunicación que siguen replicando el tema en otros espacios. Inclusive la misma ciudadanía también incentiva la discusión. De esa manera fuimos los que sembramos la semilla y ahora ha sido como una bola de nieve que ha crecido y se han replicado los procesos en otros espacios. Era muy importante que estos temas estuvieran en la agenda pública, porque el problema de la contaminación, como ya dije, no es un tema nuevo, es de hace varios años, y desde la academia y el activismo se venía advirtiendo (de una manera bastante insistente este problema) y ni los medios ni las personas ponían la atención necesaria.

Por medio de estas actividades hicimos un llamado a la comunidad en donde demostramos que es un problema muy grave y que realmente hay que tomar acciones prontas. No solo acciones coyunturales sino estratégicas, que abarquen los diferentes problemas que hay frente a la contaminación del aire. Mira que no hay día en donde no se hable del tema. Eventos hay por todos lados y precisamente esos eran los objetivos de esas actividades de activismo y de sensibilización de la opinión pública y los medios de comunicación.

Metiéndonos un poco en el tema del glifosato, los expertos dicen que es malo para la salud, pero el gobierno dice que es igual de dañino al café o al azúcar. ¿A quién le debería creer el ciudadano?

El Centro de Estudios ODS que está aquí en los Andes ha presentado diferentes investigaciones a la corte constitucional, demostrando el daño que da el glifosato a las personas que están cerca de las aspersiones. Hace unos años hubo una solución amistosa que se dio entre Colombia y Ecuador, precisamente por la contaminación que se da por glifosato en la frontera con Ecuador. Colombia tuvo que pagar 10 millones de dólares por los daños ocasionados al ambiente y a las comunidades en ese entorno. Por eso nos parece ilógico que esa posición del gobierno contraríe todos los estudios ambientales y académicos que se han hecho en torno al daño que hace el glifosato en las comunidades.

Está comprobado el daño que ocasiona, e incluso es un tema de costos. En la audiencia pública que convocó la corte constitucional se determinó que una hectárea de glifosato costaba entre 72 y 100 millones de pesos, pero el gobierno en una audiencia pública dijo que iba a costar entre 4 y 6 millones. Entonces mira que ahí el gobierno está incurriendo en mentiras para justificar esa política

de volver a la fumigación con glifosato. Lo bueno es que la corte constitucional tiene suspendido el tema y pues estamos a la espera que su decisión sea favorable al medio ambiente y a las comunidades.

El conflicto armado en cierta medida ayudaba a detener la deforestación porque algunas regiones las tenían ocupadas las Farc, se podría decir que las Farc ayudaba a detener la deforestación.

Sí. Primero puntos importantes, nosotros respaldamos y nos parece muy valioso el ejercicio que se hizo en el proceso de paz. Ha traído más ventajas que desventajas, sin embargo, hay que ser conscientes que el gobierno desconoció cierta literatura especializada que había advertido sobre la importancia de ocupar esos espacios que los grupos armados ocupaban en los territorios. Hace poco salió una investigación, difundida por El Tiempo, sobre qué había pasado y cuáles eran los conflictos ambientales que se dieron en otros procesos de paz. Era muy importante que el gobierno tuviera una estrategia muy importante para que esos conflictos no se estuvieran agudizando como los están haciendo en este momento. Por se han agravado los diferentes factores que aumentan la deforestación, como la ampliación de la frontera agrícola, el tema de los cultivos ilícitos y la minería.

Creemos que el gobierno tiene actuar de manera sistemática y articulada para poder disminuir las cifras de deforestación y un llamado que se tiene que hacer por parte de las personas y los activistas tiene que ver con el actual índice de deforestación que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Es un indicador realmente lamentable y no da solución al problema. Lo que hace el gobierno es conformarse con la deforestación ya existente. Hace 4 años el gobierno cumplía la meta, solo se deforestaba 90mil hectáreas aproximadamente, eso es casi 7 veces Bogotá, pero no hacía nada para acabar con el problema. No es una responsabilidad exclusiva del ministerio de ambiente, claro es uno de los actores importantes y debe hacer algo al respecto, pero esto es un problema de todo el Estado colombiano. El que tiene que liderar ahí es la presidencia de la república, el ministerio apenas es un actor adicional, no es el único, y creo que esa articulación existente en temas de deforestación no se ha dado.

¿Ha habido algún tipo de compensación por parte del gobierno?

Que yo sepa, no. Frente a la deforestación de la Amazonía no. Existe una iniciativa muy importante que es apoyada por el gobierno de Noruega, que es la Alianza en Contra de la Deforestación. La Revista Semana y varias organizaciones nos invitaron a hacer parte de esa alianza y pues ahí tuvimos la oportunidad de conocer todas las cifras y son alarmantes. En vez de aumentar la protección a los bosques, ha aumentado considerablemente la deforestación y se estima que en 2018 la cifra va a estar en 220 mil hectáreas. Eso es un aumento considerable. De 2010 a 2014 había una cifra, que no me acuerdo exactamente cuál era, y para el 2014 al 2018 se aumentó la deforestación casi en un 100%, precisamente por la salida de las Farc de esos territorios y que el gobierno no ocupó esos espacios de manera adecuada.

Una de las problemáticas más agravantes de los últimos años ha sido el problema de la contaminación por la cantidad del plástico que se produce y se bota. ¿Cómo ve a Colombia en esta problemática?

Ese es uno de los temas que más trabajamos aquí en la clínica jurídica. Ha tenido cierta repercusión mediática por los diferentes ejercicios que se han hecho. Vamos a ingresar a la Mesa Nacional de Plásticos, que es la que coordina el ministerio de ambiente con sectores privados y con organizaciones. Lo que hacemos es precisamente un diálogo sectorial en donde se proponen soluciones al tema del uso del plástico. Paralelo a eso hay una campaña desde hace un tiempo con Greenpeace para la concientización de la gente y de las entidades públicas para que tomen decisiones más fuertes en el tema de la eliminación del plástico. La acción está enfocada específicamente para los plásticos de un solo uso.

En Colombia se han hecho bastantes campañas mediáticas y Greenpeace ha sido la organización que más ha tratado el tema. Nuestro rol es el componente académico de investigación, brindar herramientas y proveer la información a Greenpeace, que ya lo vuelve más mediático en su forma. Ahora lo que se está haciendo con el ministerio y con la Mesa Nacional de Plásticos es buscar la posibilidad de hacer un poco más de tema de difusión del tema a través de foros, eventos y pedagogía.

¿Qué se quiere lograr con esas acciones?

Lo que precisamente queremos lograr son cambios culturales. Mira tan interesante el cambio de las bolsas plásticas. Más que la prohibición del uso fue crear una pequeña retribución, de 50 y 30

pesos, y eso generó un cambio cultural en la gente. Se analiza mucho los cambios comportamentales de las personas, si la prohibición realmente logra cambiar esa cotidianidad. Nos han invitado a esas discusiones y nos hemos reunido con Greenpeace y con todo el gremio de plásticos en el país y lo que buscamos precisamente es que tengan unos cambios en sus dinámicas empresariales. Estamos buscando la posibilidad de que hagan ejercicios y productos que sean más sostenibles con el ambiente sin afectar su negocio y su economía, porque las empresas también son parte de la Mesa Nacional de Plásticos. La idea es incidir ahí desde adentro para lograr esos cambios y la innovación para no llegar a la prohibición, porque nadie quiere la prohibición, sino que sea más de cambio cultural donde realmente la gente sí pueda cambiar de cero sus comportamientos y que no solo sea de la norma.

¿Cómo vencer la indiferencia de las personas?

Es importante realizar ejercicios de educación ambiental completos, no es solamente el mensaje y ya. Sino que la educación ambiental haga un ejercicio de explicarles a las personas el porqué de esta situación y de que exista un diálogo con los diferentes sectores para poder construir esos cambios. A esto me refiero precisamente a escuchar conocimientos ancestrales, comunitarios, campesinos y ciudadanos que muchas veces se han desconocido y que tiene mucho para aportar a la discusión sobre los cambios culturales en el país. Otra cosa muy importante es que, si bien el ministerio tiene una dirección de educación y participación, les faltan todavía muchas cosas. Están en la tarea de actualizar esa política de educación donde realmente haya un cambio sustancial y que la educación sea transversal a todos los componentes ambientales, hablo de recursos hídricos, bosques, temas urbanos, en general ambientales.

El conocimiento es lo que empodera a las personas. Eso es lo que los motiva a actuar, cuando conocen, entienden la problemática, se preocupan. También ahí es importante el tema del lenguaje sencillo y claro, con eso la gente puede asimilar los temas. Ese fue uno de los retos que se hizo con el tema de calidad del aire, porque, claro, ese tema es súper técnico y la gente no entendía cuando le hablaban de pm 2.5 y de pm 10. Las personas ahora conocen más de esos temas gracias a la academia, a los trabajos que han hecho los activistas y los periodistas que también han bajado ese lenguaje han permitido que las personas entiendan más y puedan comenzar a ayudar a hacer estos cambios para lograr un ambiente más sano en el país.

¿Cómo hacer para que el gobierno escuche más a los ambientalistas?

Personalmente considero que uno siempre tiene que tener, como activista, como académico y como integrante de la clínica jurídica, una postura de generar confianzas con los diferentes sectores. Tiene que haber una apertura al diálogo. Desde la academia hacemos recomendaciones al sector público para que los fallos que están teniendo puedan mejorar, pero más como una construcción colectiva. No desde la crítica, desde un lenguaje más constructivo, donde se reconozca el trabajo de las personas. Desde que uno reconozca y sepa que detrás de una entidad pública hay personas, que tienen sentimientos, que sufren, que les duele la crítica, que trabajan, ahí pueden tener mayor incidencia a la hora de hacer esas recomendaciones o esas investigaciones que nosotros hacemos. Por lo menos la academia ya tiene una cierta credibilidad desde las entidades públicas, pero sigue habiendo una brecha muy amplia entre estas dos. Que se va cerrando cuando hay apertura de los dos lados.

Tiene que ser de parte y parte, tanto los gobiernos que entiendan que nosotros como academias podemos aportar y que la academia esté dispuesta a hacer investigación con incidencia y no solo hacer investigaciones por publicar. La academia tiene un rol importante al acercarse al gobierno, inclusive puede abrirle las puertas a la ciudadanía. Como clínica jurídica queremos mezclar esa posibilidad de dejar documentado el trabajo que hace la clínica, pero paralelamente que ese trabajo tenga una incidencia en los cambios de las comunidades y de las políticas públicas. Eso es lo que queremos hacer, investigación mezclada con incidencia con activismo.

¿Por qué una causa tan importante como es la protección del ambiente cuesta tantas vidas?

Precisamente en la clínica jurídica estamos haciendo un informe sobre ese tema. Lastimosamente el ejercicio de la defensa del ambiente ha sido estigmatizado, incluso en el lenguaje, nos dicen opositores al desarrollo. Eso ya estigmatiza a las personas. Para lograr un cambio de estas actitudes o la situación de los defensores ambientales en el país es cambiar el lenguaje y reconocer el trabajo que ellos hacen en los territorios. Eso sirve más que el chaleco antibalas, que una camioneta blindada, que escoltas. Cuando se reconocen a los líderes y lideresas que trabajan estos temas se les está protegiendo. Es importante aclarar que, si bien existe un informe de Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales en el mundo, Colombia siempre está en el segundo y tercer puesto en los líderes ambientales asesinados. Lo que hace ahí ese informe es una mezcla entre los defensores de tierras y defensores ambientales. Porque una cosa es la defensa de la tierra

y la propiedad y otra la defensa del ambiente. Eso no quiere decir que se está desconociendo la realidad.

También pasa que en Colombia no existe la categoría de defensor ambiental, no sabemos cuáles son las cifras de defensores ambientales amenazados o asesinados porque también son defensores de múltiples causas. Es clave la definición de defensor ambiental, de crear la categoría. El gobierno ha hecho mucho, pero faltan bastantes acciones para que se visibilicen bien los defensores ambientales.

La doctora que salva vida animal

Por María Camila Rincón

Martha Ciro Aguirre creció en una casa en donde siempre hubo animales. Su padre tenía un refrán que decía "si uno tiene animales, hay que tenerlos bien tenidos". En su casa nunca se maltrató a ningún animal, incluso los animales de trabajo de su finca, los caballos y los burros, tenían días de descanso porque según su padre ellos también necesitaban descansar, como los seres humanos. Ese pensamiento de generación de respeto desde su niñez llevó a que ella criara a su hija de la misma manera.

Es una mujer que se siente afortunada, pues fue parte de una generación de mujeres que lograron terminar su bachillerato, ser profesionales y tener educación posgradual, por eso dedica su vida a ayudar a los seres más desfavorecidos, para devolver un poco de lo que ella tiene. Estudió medicina y se especializó en neurología, trabajó con niños con retardo mental en el Centro Mya, una institución que se dedica a cuidar niños con estas condiciones. También ha podido trabajar con personas de la tercera edad en estado de abandono. Pero todo cambió cuando su hija comenzó a hacer su servicio social en ADA, la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente, y fue ahí cuando encontró su verdadera vocación, pues se dio cuenta de que los animales son el grupo más desfavorecido, porque no tienen voz, no tienen quién los defienda. Se comenzó a involucrar más con la fundación, comenzó a trabajar dentro del activismo animal directamente con ADA. Hoy, lleva 8 años como la representante legal y presidenta por elección sucesiva de los socios de la junta directiva.

La Asociación Defensora de Animales y del Ambiente se fundó en 1964, cuando un grupo de personas, que consideraban que ser amigables con la tierra era fundamental y que los animales tienen derecho a compartirla en armonía con los seres humanos, se unen y forman una entidad sin ánimo de lucro, que hoy en día es como la madre de casi todas las fundaciones de Bogotá. Tuvieron

varias sedes, pero en 2016 tuvieron que cerrarla permanentemente, por la cantidad de costos que esta significaba. Además de prestar servicio veterinario y de adopción, ADA prestaba servicio gratuito de atención a los animales callejeros.

Por los costos que representaba la sede administrativa, donde llegaron a pagar hasta 6 millones de pesos de impuesto predial en 2016, el abandono continuo de animales y la falta de espacio para recibirlos, fueron las principales motivaciones para cerrar la sede. Martha y los socios tomaron la decisión de trasladarla hacia la zona campestre, que no estuviera abierta al público y continuar el trabajo desde allá.

ADA ha sido una organización fundamental para el activismo animal, fueron los responsables de la eliminación de las zorras en Bogotá en 2014 y hoy luchan para la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos, y participan activamente en los comités de protección de los derechos de los animales de laboratorio e investigación. Han asesorado al gobierno en toda la normativa para convertir a los animales en sujetos de derechos. Hoy lo que más les interesa es educar a las personas, especialmente a los jóvenes, para que haya un cambio cultural y el respeto por lo animales se convierta en un valor universal.

El número de animales en la calle se ha aumentado porque hay muchas personas que al primer problema que les presenta la mascota la sacan a la calle. ¿Cómo ha sido el manejo de esta problemática desde ADA?

Lamentablemente es un problema muy grande. Aunque sí puedo decir que en los 8 años de activismo al frente de ADA sí hay cosas que han cambiado, la actitud frente a los animales, especialmente de la mayoría de las personas jóvenes, es mejor. Ahora hay una conciencia mayor del ciudadano frente los animales, de respeto, de no maltrato. Lastimosamente todavía persiste, en un volumen muy alto, una serie de paradigmas frente a ellos. No todos ven que cuando uno adopta una mascota y lo lleva a su casa, comienza a formar parte de la familia, pues en ese caso a la familia no se le ocurriría botar a su hijo a la calle al primer problema.

Si el animal se enferma toca tener en cuenta que requiere asistencia veterinaria, medicamentos, comida, cuidados, etc. Esas personas que adoptan por impulso emocional no tienen en cuenta esto y cuando se presentan problemas ven que lo más fácil es sacar a la mascota de la casa. Eso sigue

siendo un problema enorme a pesar de las múltiples campañas que se hacen en los medios de comunicación para evitar que pase.

Últimamente ha estado muy arraigado la cultura del Adopta no Compres. ¿Cómo ha sido esto?

Ha crecido mucho. El volumen de animales que se están adoptando tanto en el Inviva, que es el Instituto de Bienestar y Protección Animal, como en las diferentes fundaciones ha aumentado con una serie de cambios. Hoy en día en Bogotá la gente adopta más gatos que perros. ¿Por qué? Porque el gato es un animal de compañía que requiere menos cuidados. El gato es un animal muy tranquilo que no ladra, entonces no genera molestias con los vecinos.

Cada día las personas han perdido una serie de temores absurdos que había frente a los gatos, ahora son animales de compañía. La campaña del Adopta no Compres sí ha tenido un impacto, no tanto como uno quisiera, pero sí lo ha tenido. Hoy vemos más animales criollos en las casas que antes, la gente está buscando un poco más los animales criollos. Aunque todavía hay muchas personas que siguen comprando animales de raza, especialmente de razas pequeñas. Eso es otra cultura que ha cambiado. Por el tamaño de las unidades de habitación no adopta animales medianos ni grandes, sino que buscan de razas pequeñas porque también son más fáciles de cuidar y de mantener en la casa.

Han hecho muchas jornadas de esterilización, ¿sí han ayudado para la disminución de animales en la calle?

Sí, es uno de los planes bandera de todas las fundaciones del Instituto de Bienestar y Protección Animal. La idea es generar cultura. La secretaría de salud tiene contratos en las diferentes localidades para hacer jornadas de esterilización para invitar a la gente, sobre todo de escasos recursos, a que esterilicen sus animales. En todas partes se habla de esterilización porque por un gato o perro que se esterilice son, mínimo, 12 o 10 crías que no van a estar expuestas a ser lanzadas a la calle. Entonces sí se promueve, especialmente en los perros, porque para ellos la castración modifica una serie de conductas que son a veces inadecuadas. Entonces se motiva desde varios puntos de vista.

Sin embargo, hay un pensamiento que nosotros en nuestros modelos educativos erradicamos y aclaramos en las comunidades, y es la humanización de los animales. Humanizar a los animales

no es ponerles vestidos ni pintarles las uñas, eso es otro aspecto, humanizarlos es pensar que el animal se siente infeliz por que no ha tenido una cría, o pensar que no disfrutan de las relaciones sexuales. Los animales no se manejan de esa manera. La conducta de ellos es diferente. Para los animales la cópula simplemente es procreación, tan es así que las hembras tienen celo, las humanas no tenemos celo. Las hembras animales sí, porque solo durante ese periodo se dejan montar por lo machos, porque solo es para procrear. Es una conducta que definitivamente hay que erradicar, porque eso expone a las crías a que las boten en la calle.

¿Cómo ha sido el tema de las corridas de toros? Porque el año pasado volvieron las temporadas a Bogotá después de varios años de sin corridas.

Lamentablemente es un tema que no es claro para la mayoría de las personas. Las corridas nunca se han prohibido. El primer fallo que hizo la Corte Constitucional al respecto estableció que no se podían crear plazas de toros nuevas, y eso está vigente, y que se tenían que mantener las plazas de toros que ya existen en las ciuades que tienen tradición taurina como Cartagena, Manizales, Bogotá, Cali y Medellín. Esas plazas no se pueden tumbar, pero no se pueden crear nuevas.

¿Qué fue lo que pasó en Bogotá? La plaza de Santamaría es de la alcaldía y esta se la alquila a los empresarios taurinos. Entonces lo que hizo Petro en su gobierno no fue prohibir las corridas, fue dejar de alquilarle las plazas a los taurinos y por eso no hubo temporadas. Pero el problema yace en que los taurinos también tienen abogados, también conocen de leyes y pues hicieron que las leyes se respetaran. Entonces ante eso qué pasa, el nuevo alcalde, por una serie de normas y demandas que se instauraron, cuyos fallos fueron positivos, tuvo que acatar las leyes y volver a alquilar la plaza de toros para las temporadas taurinas.

¿Cuál es el camino que hay que seguir para prohibir las corridas?

Que en el congreso de la república se tiene que dejar de proteger estas actividades por ser tradiciones culturales, que son las corridas de toros y las peleas de gallos. El estatuto de protección animal tiene esas dos excepciones. Por ejemplo, están prohibidas las peleas de perros, porque no son culturalmente visibles en Colombia.

¿Cuál es el mejor camino para acabar con eso?

Primero, informar muy bien a la ciudadanía. Segundo, desmotivar a las personas jóvenes el gusto por ese tipo de tradiciones, con eventos informativos donde se explique a la gente que los animales sí sufren y mucho, y que el sufrimiento no puede hacer parte de nuestra cultura. Una vez logremos eso, llevar un proyecto al congreso para que se vuelva una ley. Uno de los objetivos de Juan Carlos Losada, representante a la cámara por el Partido Verde, es sacar una ley que tumbe las leyes que apoyan a las corridas de toros. Pero eso no es fácil, porque los taurinos también tienen congresistas y también son poderosos. La familia Vargas Lleras ha administrado la plaza de toros durante muchos años. Tu mira nada más una fotografía de las temporadas taurinas y mira quienes están sentados ahí. También el tema de las corralejas, los cantantes de vallenato son los primeros allá metidos, entonces el público que los adora no va a votar en contra de eso.

Es un trabajo de relojero, que toca cada día ir generando esa cultura y esa consciencia, especialmente en los jóvenes para que haya un cambio cultural y que las corridas de toros y peleas de gallos dejen de ser una tradición cultural.

¿Qué papel ha tomado ADA en el activismo político?

Por un lado, nosotros hemos sido siempre invitados por las entidades del Estado, porque somos las personas que conocemos sobre estos temas. Nos han invitado a todas las mesas de trabajo para dar nuestras opiniones para asesorar a quienes presentan las leyes. Revisamos estas leyes, asistimos a los debates y nutrimos de toda la información que se consigue desde la ética, la bioética, las normas de derecho que hay en otros países, los tratados internacionales que Colombia ha firmado para la protección de los animales. Todas esas normativas que existen a nivel internacional y nacional han sido asesoradas por ADA.

Hoy en día, ADA participa de manera activa con un representante en los comités de protección de los derechos de los animales de laboratorio e investigación, en donde se vela por su bienestar y que se cumpla la normativa que hay frente a las 3R. 1. Reducir al máximo esos animales que se utilizan, 2. Que esos experimentos conduzcan a resultados que beneficien tanto a los humanos como a los animales y 3. Que el sufrimiento de estos animales sea mínimo, reducido.

Por otro lado, hemos estado participando en la dirección nacional de planeación, en el concejo de Bogotá. Tampoco hay que olvidar que ADA fue protagonista en la erradicación de las zorras de la capital. En ese trabajo participamos de manera muy activa y asesoramos al distrito en todo lo que

fue el proceso en la erradicación de los vehículos de tracción animal, desde la parte jurídica hasta la parte de implementación de esa normativa.

¿Cómo ha sido la relación con el gobierno?

A diferencia de muchos otros activismos, yo creo que el gobierno sí nos ha escuchado. Lo que pasa es que tenemos que ser sensatos, los cambios no se dan de un día para otro y personalmente yo creo que los cambios empiezan por uno. Si el cambio no empieza desde la ciudadanía no se va a dar. Siempre nosotros nos estamos preguntando ¿Qué hace el gobierno por nosotros? Y nunca nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros. Vivimos criticando el gobierno y nunca nos preguntamos nosotros como ciudadanía cual es el ejemplo que estamos dando. Yo creo que el gobierno sí nos escucha, obviamente hay gobiernos en donde se nos hace una invitación más grande y donde nuestras propuestas tienen más cabida.

Hemos tenido eco, claro nos gustaría que fuera mayor. Hemos logrado cambios significativos. El tema de la agenda animal ahora sí es prioritario en la política, antes no. Si miramos hace 10, 15 años, no pasaba nada con los animales. Hoy tenemos una ley que penaliza el maltrato animal. Logramos cambiar unas multas ridículas que tenía el estatuto de protección animal, por multas realmente significativas que tocan algo que a la gente le molesta mucho, el bolsillo.

¿Entonces, cuál es la mejor manera en que los ciudadanos pueden apoyar la causa?

A veces hay personas que dicen ser animalistas y yo los veo y lo único que veo es que son fanáticos, cosa que no sirve en ningún sitio. El fanatismo no es bueno ni en la política, ni en la religión ni en nada. Tenemos que ser sensatos y tener un diálogo en donde nuestra participación sea vista desde lo técnico más que desde lo emocional, porque emocionalmente se quieren hacer muchas cosas que no se pueden lograr por la normativa que hay. Hay muchas veces que nos encontramos con barreras de leyes que ya están establecidas. En ese punto, mi invitación para las personas que están en el activismo animal es que nos movamos en la política. ¿Cómo? Apoyando a aquellas personas que están en los cargos políticos y que de verdad han hecho cosas por los animales.

Aunque cada vez hay más vegetarianos y veganos, la población colombiana sigue siendo primordialmente carnívora. ¿Cómo se puede consumir carne responsablemente?

Generando un poco más de información y conciencia. ¿Por qué se dan estos abusos? Porque la presión de consumo de los animales es muy alta. A mi realmente me da mucha tristeza cuando veo que se bota a la basura la carne, el pollo. ¿Cuántos seres habrán dado su vida y su cuerpo para que terminen en la basura? La presión del consumo es la que genera eso. Si nosotros logramos que las personas entiendan como es el proceso de producción y que no se compren productos de industrias en donde se sabe que maltratan a los animales, podríamos lograr un cambio. Es la mejor manera. Por ejemplo, si tú le compras a Natura, que tiene como lema que no testea en animales, pero no le inviertes ni a Vogue ni a Loreal, que son empresas que si testean en animales, finalmente ellos van a tener que cambiar. ¿Por qué que va a pasar? Su producción no se la van a comprar y van a empezar a generar pérdidas. La mejor manera es atacando a la parte económica de las empresas que lo único que representan es sufrimiento en los animales.

Yo soy médico y sé que hay personas que nunca van a dejar de comer carne y pollo, por cuestiones de salud. Pero la idea es que el consumo sea responsable y que no genere tanta presión. Ya por lo menos sabemos que criar ganado genera más contaminación ambiental, entonces tenemos que escoger, o nos asfixiamos con los gases tóxicos o comemos carne. Aunque tampoco es una razón por la cual la gente vaya a dejar de consumir carne. Tampoco se va a lograr con una prohibición. Se tiene que presionar a las personas desde el bolsillo, de pronto cobrar mucho más por el consumo de carne. Desde la educación, hay personas que son muy sensibles, que ven la manera como se maltratan a los animales en las granjas y en los mataderos y eso les produce rechazo, entonces dejan de comer carne porque entienden el dolor. Lastimosamente hay gente que eso no le importa entonces ¿a esa persona cómo la manejas? Con la parte financiera, no hay otra manera de hacerlo.

A comienzos de este año, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres autorizó que los huevos y piel de caimán aguja vuelvan a ser comercializados en la bahía de Cispatá en Córdoba después de varios años de prohibición. ¿Qué piensa de esta problemática?

Yo creo que ahí hay un equilibrio, son poblaciones que se pueden controlar, claro como tu lo dijiste solo está autorizado en la Bahía de Cispatá, no en otras partes del país. Respetando a los animales se pueden hacer este tipo de comercios. Se motiva a que las personas continúen con una actividad cuando no hay posibilidad de cambio a otra, pero con el compromiso que se constituyan como

guardianes de esa población. Pues imagínate tu que los caimanes proliferen hasta tal punto que comiencen a comerse a las personas. Debe haber un equilibrio.

En la ley 1774 de 2016 se castiga el maltrato y el abuso animal. ¿Cómo ha sido ese trayecto para convertirlos en sujetos de derechos?

Ha sido un camino largo, porque el maltrato es muchas cosas, es no darles de comer, es castigarlos físicamente, es no darles atención veterinaria. Obviamente estamos en contra de estas cosas y hemos promovido dentro de toda la jurisprudencia que tiene el país, en donde ADA participa de una manera activa, el cuidado y el respeto hacia los animales. La organización ha estado presente en los comités en donde se han generado estas normas y ha promovido tanto al concejo de Bogotá como al congreso de la república estas leyes que castigan a estas personas que maltratan a los animales. Eso, por un lado, y por otro, con la educación hacia las personas, contándoles que el maltrato existe y que no debería suceder.

Que hay sobre el abuso sexual hacia los animales. ¿Es una conducta que se ve mucho en el país?

Lastimosamente si se ve bastante. Es una conducta que es abominable y detestable. Una relación sexual sana es la que se entiende entre dos sujetos, donde los dos consienten esa relación. Por eso la pederastía, la relación sexual con niños, o el bestialismo, la relación sexual con animales, es una conducta enferma. Es una conducta anormal y abusiva, porque el otro sujeto no da su consentimiento, es un sujeto pasivo y en muchos de estos casos le causa una lesión física irreparable. Esas personas son criminales. Nosotros hacemos un activismo muy fuerte hacia este tipo de actos, de abuso sexual especialmente. Hay que perseguir y restringir en las redes sociales esta pornografía, donde se publican videos y noticias que hablan a favor de este tipo de conductas. Es bien sabido en las zonas de tolerancia, como en el barrio Santafé, así como hay casas de prostitución, hay sitios donde venden animales y los usan para que la gente haga este tipo de cosas. Son negocios que buscamos erradicar completamente.

¿Cuáles han sido los mayores retos hoy para la protección animal?

Yo he estado muchas veces en el congreso en discusiones de leyes que protegen a los animales y hay dos grandes problemas 1. Las corridas de toros y las peleas de fallos y 2. Los animales de producción, que son animales que se les olvidan a las personas y sufren muchísimo. Los pollos y

el ganado son los que más sufren, pero detrás de esto hay gremios muy poderosos que no quieren modificar su manera de ver y de tratar a los animales. Luchar contra eso no ha sido fácil, ni lo va a ser en un futuro, porque es ir en contra de un poder económico y político muy poderoso. El cambio no se va a dar de un día para otro, yo creo que a futuro se tendrá que dar porque si no cambiamos nos vamos a extinguir.

¿Cuál ha sido la clave?

Enseñarle a la gente e informar a las personas mediante los medios de comunicación ha sido un arma fundamental. Nadie pensaba hace 5 años que no hubiese zorras en Bogotá, los caballos y su dolor eran invisibles. ¿Cuándo se volvió visible? Cuando los medios de comunicación empezaron a mostrarlo. Los medios se aliaron con nosotros, porque ADA era la única institución que atendía los caballos en la calle. Apenas se caía un caballo al piso nosotros llamábamos a City Tv y a los otros noticieros. El dolor de estos animales empezó a ser visible y la gente se empezó a dar cuenta de que esto había que terminarlo. Los políticos también se dieron cuando y los caballos se hicieron visibles y logramos derrotar una política de año donde se permitía el abuso contra estos animales. Lo que siempre nos alegaban era que se le iba a quitar la fuente de trabajo a los carreteros y hoy tu los ves y ellos están trabajando en otras cosas y siguen sobreviviendo sin los caballos. Solo se logró cuando los medios nos visibilizaron. Hoy la agenda animal está mucho más presente en los medios. En Caracol Televisión los sábados en la mañana hay un programa de ambiente y de animales, en El Tiempo, hay una página en donde se pública todo sobre animales, aunque también tiene otra página en donde publica las corridas de toros. Entonces es lo que necesitamos que se visibilice a los animales y su dolor y con esto que se genere una cultura de respeto.

La abuela del feminismo en Colombia

Por María Camila Rincón Moreno

Florence Thomas vivió el empoderamiento de la mujer desde su raíz en Francia cuando estudiaba psicología en la Universidad de París. Considerada como una de las voces más influyentes e importantes del movimiento por los derechos de la mujer en Colombia, pasó de vivir las semillas del mayo del 68, donde se había comenzado a hablar del cuerpo de las mujeres, de su derecho a la sexualidad, de las píldoras anticonceptivas, del derechos al aborto, a llegar a Colombia y encontrar no mujeres, sino madres calladas. Una identidad femenina asociada por naturaleza al hogar, la maternidad y al ámbito doméstico.

Se casó con un colombiano y se mudó al país en 1967. Florence cuenta que su primer choque con la cultura patriarcal fue un día que los amigos de su esposo les hicieron una invitación para conocerla. La extrañó mucho ver que los hombres solo hablaban entre ellos y las mujeres entre ellas, no había intercambio. Las mujeres hablaban de la niñera, de los problemas familiares y los hombres sobre el manejo del mundo, la política y el fútbol.

Luego de entrar como profesora a la Universidad Nacional el impacto fue mayor. Aunque había profesoras, no había decanas y las estudiantes eran una minoría. Florence fundó el Grupo Mujer y Sociedad junto con otras profesoras, con el objetivo de conocer la historia de la mujer en el país, porque para entonces no se sabía nada al respecto. Apenas en 1954, bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinillas, se les había concedido el derecho al voto, pero las mujeres en ese entonces no eran ciudadanas, no ejercían sus derechos ni hacían respetar sus deberes.

Inicialmente el grupo partió de conversaciones sistemáticas entre Florence, Yolanda Puyana, María Himelda Ramírez, Guiomar Dueñas y María Eugenia Martínez. Contribuyeron en darle la palabra a la academia en la Universidad Nacional sobre los estudios de género con una

visión renovadora: una perspectiva multidisciplinaria que permitiera captar la cuestión femenina en su naturaleza multidimensional. Fue entonces cuando se empezó a hablar de acoso sexual, violencia de género, términos que para la época no tenían significado alguno. El grupo Mujer y Sociedad fue el que comenzó a poner a la mujer en la agenda política y social de los colombianos. En los años 80 el grupo se institucionaliza como la unidad académica que administra posgrados con énfasis en el género.

En 1977 se separó de su esposo, pero nunca consideró devolverse a Francia, siempre se preguntó qué significaba ser mujer en una sociedad tan machista como Colombia. Desde entonces ha escrito varias libros sobre la mujer y el feminismo como Conversaciones con Violeta, Conversaciones con un hombre ausente, El macho y la hembra reconstruidos y Había que decirlo. En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2011 recibió la ciudadanía colombiana y en 2017 fue condecorada por el gobierno francés con la Orden Nacional de la Legión de Honor en el grado de Caballero. Actualmente es columnista de El Tiempo.

Cuando llegó a Colombia, ¿qué fue lo que más le impactó ver en la sociedad colombiana?

Muchas cosas, el paisaje, la comida, la calidez de la gente, pero lo que más me impactó fue la falta de mujeres. No había mujeres, había era mamás. Fue difícil, las mujeres todavía no eran completamente sujetos de derechos. Acababan de tener el voto hacía muy poco, entonces no entendían todavía lo que significaba ser ciudadana. Pero si tú me preguntas lo que más me impactó de la sociedad colombiana es el hecho de que las mujeres no tenían voz. Estaban absolutamente subvaloradas. Eran valoradas solamente en cuanto a roles tradicionales, de madre, de estar en la casa cuidando a los hijos.

Cuando se fue de Francia, la situación era muy distinta a la de acá.

Claro, había vivido los años 60 en París, que eran la preparación de Mayo del 68, donde estaban los grandes filósofos del momento, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, Michelle Foucault. Ya había desfiles en las calles donde las mujeres gritaban "mi cuerpo es mío" ya se había comenzado a hablar del aborto. Ahí nació el feminismo. Fue donde estuvieron las grandes feministas exigiendo sus derechos y yo tuve la oportunidad de vivir eso. Y claro, llego aquí y lo que encuentro son mujeres calladas, mejor dicho, madres calladas. Yo entro a la Universidad Nacional, la vanguardia

revolucionaria del país y veo que las mujeres no tenían voz. No había ni una sola decana, era una universidad supremamente patriarcal (aunque lo sigue siendo, - ¿no?). Eso es porque el saber se construye patriarcalmente, los hombres son los que han escrito la historia. Por eso se habla muy poco de las mujeres luchadoras, porque el feminismo es justamente hacer memoria, como sobre Esmeralda Arboleda que luchó con 20 compañeras para que se pudiera votar. El 8 de marzo para mí es un día emblemático, no para regalar flores y chocolates, es para hacer memoria sobre lo que han vivido sus bisabuelas y sus abuelas, que no podían votar, que no eran nadie, que no podían tomar una pastilla anticonceptiva, que tenían que tener los hijos que Dios manda.

Y la que no tenía hijos fracasaba como mujer.

Sí claro, para entonces era súper trasgresor. Las que decían que no querían ser madres se quedaban solteras y les tocaba muy difícil. Entonces yo creo que eso es lo que más ha marcado el siglo XX. A partir de los años 60 empiezan a haber cambios en Colombia. Las mujeres hoy en día tienen menos miedo de hablar, hay más denuncias (también gracias al #Metoo que se dio en 2016), gracias a la liberación de la palabra, gracias a que las mujeres se sienten más apoyadas.

Eso es lo que se llama hoy en día, una palabra muy bonita, la sororidad. Ya no nos gusta la palabra fraternidad, porque es la amistad entre hombres. Fraternidad es hermano. Sororidad es hermana. Y es muy bello el hecho de que las mujeres empiezan a entender que es muy importante andar juntas y solidarizarse unas con otras. Porque uno no cambia el mundo sola. Por eso construí un grupo en la Universidad Nacional llamado Mujer y Sociedad, porque entendí muy rápidamente que todo lo que veía, que me chocaba mucho, no lo podía cambiar sola.

¿Cómo fue ese proceso?

Fui a buscar una socióloga y una trabajadora social para que nos uniéramos. Primero empezamos a leer los grandes textos del feminismo europeo, que ya estaban llegando tímidamente a Colombia. Comenzamos a trabajar, a escribir, a producir, a introducir el concepto de género en nuestras cátedras, a mostrarles a nuestros estudiantes que todo era patriarcal, el descubrimiento del acoso sexual. Un tema que hace 20 años no se hablaba en lo absoluto. Entonces yo creo que hay que recordar eso. Estamos en un momento en donde parecería que nadie nos va a parar, inclusive nos llamamos las imparables. -Es muy bonito, ¿no? Nadie nos va a parar, ni esta coyuntura política, que no es muy favorable, ni la coyuntura mundial. Pero parecería que las mujeres van a seguir

avanzando. En el tiempo del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, que hizo todo lo posible para hacernos retroceder en la sentencia del aborto y no pudo. No retrocedimos ni un milímetro.

Afortunadamente tenemos derechos constitucionales adquiridos y eso es muy difícil tocarlos. Sin embargo, toca estar alerta, porque nos pueden poner un golpe en el Congreso sin que nos demos cuenta. Por eso ahora tenemos compañeras que sé que están ahí, vigilando el Congreso y eso es un trabajo fuerte, de mujeres que no tienen miedo de seguir hablando.

¿Qué la llevó a crear el grupo?

Me comencé a dar cuenta que, en las asambleas estudiantiles, que eran políticamente fuertes en La Nacional, en los 80 y 90, había 10 hombres sentados en la mesa y una mujer en la esquina, a la cual difícilmente le daban la palabra. También yo sabía que hay muchas más entradas de hombres que de mujeres a la universidad, y las pocas que entraban se iban a enfermería, psicología y trabajo social. Pero, en las ciencias no había mujeres. Ni en matemática, ni física, en ingeniería había muy poquitas, incluso en derecho eran muy pocas. Entonces cuando yo empiezo a ver eso me digo "no Florence, hay que hacer algo", pero no lo puedo hacer sola. Comencé a ir a los departamentos de trabajo social y empiezo a hablar con unas amigas, que eran profesoras. Les decía "Mujeres, ¿a ustedes no les preocupa que nadie habla de mujer aquí? No sabemos nada sobre nosotras". Entonces hicimos un grupo, les dije que vinieran todos los jueves de 12 a 2, con un pan francés y una colombiana y comenzamos a hablar mujeres. Rápidamente mi oficina se llamó el aquelarre.

¿Cómo fue la relación con las otras mujeres? ¿Qué tan abiertas estaban al cambio?

Me relacioné con mujeres de trabajo social, de historia y antropología y fue muy extraño, porque el departamento de historia y antropología fueron los más sensibles a la cuestión femenina. Porque finalmente la antropología es el culturalismo, entonces es haberse dado cuenta que no era lo mismo ser una mujer en el Pacífico que en la capital. En el departamento de historia, yo y las pocas profesoras que había, nos dimos cuenta de que no se sabe nada sobre las mujeres en la colonia. Entonces es extraño que eso se quedó ciego durante tanto tiempo, incluso la historia del voto femenino. Eso no se enseña y eso que la historia del voto es muy bella, el discurso que hace Esmeralda Arboleda en el Congreso, tratando de convencer a los hombres y estos no sabían qué hacer. Al final se obtiene el voto en una dictadura militar, con Rojas Pinilla. Entonces eso es lo

que yo empiezo a hablar con ellas, diciéndoles que deberíamos empezar a saber qué pasa con las mujeres en la historia, porque en realidad fue escrita por los hombres.

¿Cómo ha sido la lucha con la iglesia estando en un país tan católico?

Ha sido muy dura, porque no es solamente contra la iglesia católica, es contra las iglesias. El partido Mira es un partido cristiano que está presente en el Congreso, aun cuando la Ley Ciudad, que es reconocida en 1991, reconoce que Colombia es una nación social laica, de derechos sociales y laicos. Es un gran problema, la tradición judía y cristiana no ha querido mucho a las mujeres. Pero actualmente te diría que es un buen momento porque están todas las denuncias de todos los pedófilos. Como que se sienten un poquito menos confortables frente a las mujeres. Sin embargo, están todas las confesiones religiosas, no solamente católicos. Porque a veces es más fácil hablar con católicos inteligentes. Hay cristianos y mormones que están invadiendo América Latina y eso sí que es peligroso para las mujeres. Llegan hablando de la familia, la familia de papá, mamá e hijitos. Están en contra del enfoque de género. En los acuerdos de paz, si bien se logró que haya un enfoque de género en algunas partes, se borró todo lo que es LGBTI, entonces son un peligro grande en este país. Y eso dificulta un poco la tarea, lo que significa que tenemos que estar más alertas que nunca. Además, creo que tenemos más solidaridad de la nueva generación de hombres, que no sé si pueden ser feministas, pero pueden entrar en el campo.

¿Los hombres pueden ser feministas?

Creo que los hombres actualmente son solidarios con las mujeres. Pueden ir a marchar con nosotras, se pueden informar sobre las cifras de los feminicidios y ser solidarios con la causa. Un hombre no tiene la historia del cuerpo de las mujeres, que fueron violadas, maltratadas, que fueron mutiladas genitalmente, es decir, hay un montón de cosas que son diferentes para los hombres.

Aunque sí me parece muy chévere que los hombres de las nuevas generaciones, sin importar que se llamen feministas o no, nos apoyan en muchas causas. Lo chévere es que los hombres también conozcan la historia de las mujeres, lo que ha significado nacer mujer en la cultura patriarcal, lo que ha significado la vida que tuvieron sus tatarabuelas, lo que ha significado la vida de las mujeres que tenían 11 hijos porque no había nada más que hacer, las mujeres que no vivían por un aborto mal hecho. Entonces ser feminista o ser solidario es estar consciente de que la lucha sigue, que las

mujeres estamos avanzando y que no vamos a parar. Todo esto, conocer esta historia, saber que en Colombia hay mil feminicidios al año. Feminicidios, no homicidios.

¿Cuál es la diferencia?

Feminicidios es una mujer que es asesinada por un exnovio, por el exmarido. Un crimen de odio por excelencia. La matan solamente porque es mujer, porque bailó con otro o porque tiene una falda muy corta.

He seguido su carrera durante mucho tiempo y nos ha llamado mucho la atención que usted dice que se volvió feminista aquí en Colombia. ¿Por qué acá y no allá? ¿Cómo fue ese proceso?

Porque vivía en una situación de confort en Francia. Era muy joven y no tenía esa consciencia. Empecé a despertar esa consciencia en París, cuando estaba estudiando la maestría ya comenzaban a haber marchas de mujeres con las grandes feministas como Simone de Beauvoir. Me leí su libro Segundo Sexo y empecé a entender un poco sobre el feminismo. Pero es realmente cuando llego aquí y encuentro un contraste enorme con lo que estaba viviendo en Francia. Claro, yo allá estaba estudiando, me enamoré de un colombiano en París, pero realmente no tuve tiempo de pensar en eso. Tenía que terminar la carrera, no sabía si me iba a ir a vivir a Colombia o no. Tenía muchos problemas existenciales. Realmente tomé consciencia cuando vi la distancia de lo que había conocido en Francia y las primeras marchas. Entonces empiezo a entender que sola no voy a poder hacer nada. Afortunadamente estaba en la Universidad Nacional. Tuve la suerte porque estaba rodeada de los mejores académicos. Estaban los violentólogos que empezaban a explicar la violencia, pero la violencia política, nunca se hablaba de violencia contra las mujeres, nunca. Es una cosa que se empieza a hablar en la década de los 70 y 80, y es en ese momento cuando fundé el grupo de Mujer y Sociedad.

Hábleme un poco de la relación con su mamá. Por lo general, esa relación madre e hija es complicada.

Mi pobre madre solo tuvo una hija, y se fue a vivir a 10 mil kilómetros. Tuve una relación difícil con mi mamá, pero creo que era bastante corriente para la época. Si habláramos en términos psicoanalíticos, la relación hija-madre es difícil, mucho más difícil que madres-hijos. En el tiempo de mi madre, era un problema que hubiera una mujer inteligente que quisiera ser profesional. Ella

quería ser médica y su papá no la dejó, al final le pagó dos años de enfermería y ya. Entonces tenía una especie de frustración interior que de alguna manera botó sobre mí. Me tuvo a mí y yo tenía que hacer todo lo que ella no pudo. Y con eso me estaba ahogando. Mi mamá estaba pasando todos los deseos frustrados sobre su hija. Entonces por eso decidí irme, me enamoré de un colombiano que vivía muy lejos y me fui.

Es una historia bastante común. A veces las hijas sienten que hay que poner una distancia con las madres, porque para las madres es difícil tener una hija de 18 años. Es una niña que está entrando en el deseo de los hombres mientras que ella está saliendo, está en la menopausia. Entonces es duro para una madre tener hijas, pero hijos no, ellos tienen el mundo al frente. Las madres son conscientes que una hija puede perder mucho más en el mundo que un hombre. Siempre estará durante mucho tiempo como sub. Porque siempre somos sub en algo, en el fútbol, hubo una subcomisión de víctimas que se fue a La Habana, hay una subpresidenta de la República, la literatura femenina es el subgénero. Somos subinteligentes pareciera.

He visto en las redes sociales que hay muchas mujeres que no se identifican con el feminismo. ¿Qué les diría a esas mujeres que no se dan cuenta de todo lo que nos ha dado el feminismo?

En redes sociales están circulando cadenas en donde dicen "si tú puedes votar, agradécele a una feminista", es eso lo que hay que responderles a veces. Hay muchas mujeres populares, sobre todo líderes populares, que tienen una práctica de vida súper feminista y no les gusta que les llamen feministas. Hay muchas mujeres que no les gusta ese término, porque las meten en un grupo de transgresoras. No hay que preocuparse mucho si les gusta que les llamen feminista o no. Pero sí hay que responderles así "tú puedes decidir sobre tu cuerpo cuántos hijos quieres tener, te puedes casar con la persona que amas, agradéceles a las feministas". En 2016, cuando fue el 'Me too', fue el año en donde la palabra feminista más circuló en las redes, fue la palabra del año. Fue cuando descubrieron que no éramos brujas insoportables que comíamos vivos a los hombres.

Como decía en algunos momentos usted es colombiana y ha podido ver cómo ha revolucionado el movimiento. Porque hace 20 años llamarse feminista era casi imposible.

¡Pero lo logramos! Tuve mucha suerte. Yo, de pronto por tener un acento, me dejaban decir todo lo que las colombianas no podían decir. Por eso pude hablar muy rápidamente del aborto en los medios, de los gays, que todavía no se llamaban LGTBI. Aunque no era tan fácil, teníamos muchas

críticas. También tuve la suerte que el feminismo naciera en una universidad como La Nacional, donde era muy difícil criticar, porque incluso hombres muy machistas y patriarcales nos defendían. Decían "están en la universidad, son mujeres que tienen maestrías y doctorados, si quieren argumentar háganlo, pero con argumentos válidos".

Abrimos un curso en la universidad que se llamaba Curso de Contextos, que era obligatorio de todas las carreras, y hubo uno que se abrió llamado Cuestión Femenina. Yo lo dicté al principio y fue muy chistoso porque al principio un grupo de hombres jóvenes vinieron a verme y me decían "nos inscribimos en el curso para defender el machismo" y les dije "muy bien, si lo logran al final del curso, pasan". Evidentemente poco a poco se desbarataron. Pero es eso, en La Nacional existieron esas posibilidades y este curso fue muy chévere porque se inscribían muchos hombres. Creo que hoy en día no es tan confortable ser hombre, creo que es mucho menos confortable que en la época de tu abuelo, porque sienten que tienen que tener cuidado con lo que dicen cuando están con mujeres inteligentes. Sienten que el mundo ya no les pertenece como antes.

Se sienten muy atacados por todo el movimiento.

Claro, los hombres se sienten atacados en las artes, en la escritura. Sin embargo, pueden seguir nombrando cuántas mujeres han ganado premios nobel y ahora cuenten cuántos hombres se lo han ganado. Ni siquiera el 10% de las mujeres, seguimos siendo menos.

¿Alguna vez tuvo amenazas de muerte?

Realmente tuve mucha suerte, no recibí nunca una amenaza. Aunque a veces si me decían '¿Quién la dejó entrar a este país?' o 'La vamos a decir al DAS que la echen' (risas) o cosas así. Pero realmente nunca recibí una amenaza.

¿Cómo está el feminismo en Colombia actualmente?

Bastante fragmentado, desafortunadamente, pero a la vez muy vivo. Hay múltiples feminismos, feminismo popular, feminismo artesanal, feminismo radical, etc. Son movimientos muy nuevos de niñas muy jóvenes y pues a mí no me preocupa el hecho de que vayan a explicar el mundo de una manera diferente que nosotras, pero espero que sigan luchando por el derrumbe del patriarcado.

El conflicto armado nos ha fragmentado bastante, porque fuimos metidos de lleno en muchos grupos, en el desplazamiento forzoso, en la violencia sexual, etc. Se conformaron muchos grupos

de ONG que recibían financiación de la comunidad europea y por eso comenzó a haber mucho antagonismo entre varios grupos de feministas. Recibíamos críticas de las otras, que porque habían presentado un proyecto con la Cooperación Internacional y La Casa de la Mujer presentaba el mismo y solo se lo podía ganar una. Entonces eso nos tiene bastante divididas y eso que hoy en día hay menos financiación internacional. Pero lo que te digo, creo que es el conflicto armado que nos ha separado bastante.

¿Cómo ha visto a los jóvenes en la causa?

Hay algo que está pasando en los colegios, muchos muchachos de la edad de ustedes me vienen a entrevistar, lo que no pasaba hace 20 años. Los que me entrevistaban eran los medios, los periodistas, los filósofos. Hoy muchos de los jóvenes están conscientes de lo que está pasando, entonces eso me parece una buena noticia.

¿Cómo cree que es la mejor forma de hacer el feminismo?

Crear un pequeño grupo. Formar un grupo sobre literatura, puede ser para empezar a hablar de la escritura de las mujeres, entonces se toma desde Simone de Beauvoir hasta Piedad Bonnet, o un grupo que trabaja sobre derechos, un grupo que trabaja sobre realmente comunicación social y feminismo, o comunicación social y lenguaje. En colectivo se logra todo mejor.

¿Cómo ve el tema del feminismo en los medios?

Creo que están progresando, porque mira El Espectador el 8 de marzo, era totalmente concentrado a las mujeres, no había ni una sola página que no era de mujeres. Creo que los medios están más sensibles, tienen más información, saben hablar del feminicidio. Están empezando a informar mejor, no siempre como quisiéramos, pero mejor. Es un tema importante para los periodistas. En relación a lo que conocí, ha cambiado enormemente. Es un tema que no pueden evadir todo el tiempo. Inclusive en El Tiempo, prácticamente cada semana hay una página de cifras y de información. Hay algunas mujeres muy valientes, muy buenas como Laura Gil y Yolanda Reyes. Aunque todavía falta mucho.

Por la diversidad, ni un paso atrás

Por William Moreno Hernández

Los últimos veinte años de la historia del movimiento por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y población trans (LGBT) en Colombia son, de alguna manera, una parte de la historia de vida de Elizabeth Castillo, una abogada manizalita de 48 años que hace parte de una generación de activistas que, desde finales del siglo XX, se interesó por combatir la homofobia y trabajar en pro de la igualdad.

Elizabeth y su expareja —se divorciaron hace poco más de un año— le dieron rostro al matrimonio igualitario en Colombia. Fueron una de las primeras parejas que formalizaron una solicitud para que se reconociera legalmente su unión y, en 2013, pasaron a la historia como la primera pareja de mujeres en hacer efectivo su matrimonio en el país.

Pero su labor como activista no inicia ahí. Elizabeth hizo parte de Planeta Paz, un proyecto del proceso de paz del Caguán en el que, ni más ni menos, nació el entonces difuso 'sector LGBT'. Fundó en 2003 el Grupo de Mamás Lesbianas para ayudar a otras mujeres a desentrañar ese enredo que puede significar ser mamá y lesbiana en una sociedad como la nuestra y, en 2005, llegó a ser vocera de la Mesa LGBT de Bogotá, en la que trabajó hasta 2007, cuando pasó a ser parte de la Junta Directiva del Centro Comunitario LGBT, el primero en América Latina y el cual dirigió desde 2008 hasta entregarlo a la Alcaldía de Bogotá un año después.

Su causa, cuenta, empezó en 1997, cuando decidió organizar una Semana del Orgullo Gay en Manizales. Estaba contagiada del entusiasmo de unas mujeres que había conocido meses atrás en Bogotá y que se identificaban abiertamente como lesbianas. Pensó que había que hacer algo similar en su ciudad, así que presentó la propuesta. Sin embargo, tres días antes de que iniciara el

evento, la alcaldía local le informó que ningún escenario público podía ser usado para "un evento de esa naturaleza".

"Fue la primera vez que sentí y registré como tal un acto de discriminación por mi orientación sexual", recuerda Elizabeth. El evento finalmente vio la luz gracias a la facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, donde estudió. El decano, entusiasmado, adelantó los trámites para usar las instalaciones de la universidad y la experiencia resultó un éxito, pues fue la ocasión para que Elizabeth supiera que había decenas de personas trabajando por la misma causa en distintos lugares del país.

Pero la homofobia no le dio tregua y se la toparía de nuevo un par de años después. Había emigrado a Bogotá y trabajaba en una oficina de abogados. Ahí —cuenta Elizabeth— experimentó lo que significa la discriminación laboral por orientación sexual. Era un maltrato sutil, permanente, en el que nunca se hizo evidente la causa real, pero que siempre pretendía hacerla sentir distinta. Un día no lo soportó más. Renunció y se convenció de volcar su vida por sus derechos y los derechos de quienes eran como ella. "Cuando salí de esa oficina prometí que nunca más en la vida volvería a estar en un espacio en el que no quedara claro desde el principio que yo era lesbiana. No estaba dispuesta a que eso fuera un inconveniente en mi vida".

Usted acostumbra utilizar una lista para describirse: Mujer, lesbiana, mamá, abogada, feminista y activista LGBT. Siempre en ese orden. ¿Por qué?

Todos usamos etiquetas para identificarnos. La única diferencia es en qué escenarios y cómo nos identificamos. A veces uso la identidad de lesbiana porque políticamente da un mensaje, pero no soy solo eso: también soy mamá de un hombre, hija, católica practicante, abogada, baterista aficionada, activista LGBT, intento de comediante (risas) y un montón de cosas más.

En el año 2000, usted participó en Planeta Paz, un proyecto trascendental para el movimiento LGBT porque le empezó a dar cara a ese entonces difuso "sector LGBT" en Colombia. ¿Qué recuerda de esa experiencia?

Planeta Paz surgió en el marco de los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc. Era un proyecto que pretendía promover que los sectores sociales populares pudieran

participar con propuestas que aportaran a la negociación. Llamaron a los de siempre: afrocolombianos, sindicalistas, jóvenes, mujeres, etc. Y apareció uno completamente nuevo: LGBT, que estaba integrado por personas de distintos lados que nos dedicábamos a esto. Esa inclusión fue un punto de inflexión muy importante en la consolidación de la igualdad porque, si bien antes del 2000 ya había un proceso, lo cierto es que solo a través de Planeta Paz se consiguió que nos unificáramos alrededor de un discurso y de una situación indiscutible: éramos discriminados por no ser heterosexuales.

Ese espacio nos permitió dar las primeras discusiones como colectivo sobre cómo nos íbamos a llamar o sobre si el tema central debía ser el derecho a la salud o tratar el VIH, que en ese momento era una lucha álgida. En fin, fueron discusiones muy intensas, pero que nos ayudaron un montón porque nos dieron la posibilidad de trabajar en una agenda común. De hecho, todo el proceso de Planeta Paz fue lo que permitió consolidar años después las Mesas de Trabajo LGBT en el país.

Una de las fortalezas del movimiento LGBT es la capacidad de concertar acuerdos, porque, aunque representan un solo movimiento, son poblaciones muy distintas entre sí y con agendas diversas. ¿Esa fortaleza nació en Planeta Paz?

Llegamos al consenso porque no nos quedó de otra. Realmente eso fue lo que yo creo que pasó. No fue tanto una decisión política, convencida y dispuesta a ceder en unos principios y trabajar juntos. Es que en ese espacio nos enfrentamos a unos niveles de hostilidad tan altos que nos tocó cerrar filas y aclarar que teníamos que definir un discurso común. Recuerdo, incluso, que en varios encuentros nacionales tuvimos que hacer actos de visibilización para que nos respetaran como iguales porque lo cierto es que, para quienes llevaban años de trabajo en otros movimientos sociales como indígenas o afro, sí era "raro" que existiera un grupo con una propuesta que partía no desde el derecho al trabajo o a la tierra sino desde el derecho a respetar la sexualidad.

Pero eso ayudó un montón porque muy rápido surgieron alianzas. Por ejemplo, con las feministas, que sí fue natural, ahí casi que no hubo distancias. En Colombia, el movimiento LGBT se nutrió de dos fuentes grandes: por un lado, de los movimientos que venían luchando por los derechos relacionados con el VIH y, por el otro, de las mujeres que venían trabajando con el feminismo. Esos dos movimientos nutrieron de manera potente este proceso de construcción de identidad, de crear una sombrilla que nos abarcara a todos.

Años más tarde, a la par con los diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, la agenda LGBT amplió sus frentes a temas como las víctimas LGBT del conflicto armado. ¿Las discusiones de Planeta Paz dejaron un antecedente para identificar esas violencias?

Sí, el hecho de que las discusiones de Planeta Paz se dieran en el marco de un proceso de paz, en un país que llevaba décadas de conflicto, permitió identificar situaciones relacionadas con cómo la guerra causaba todo tipo de violencias contra personas LGBT y, sobre todo, cómo la masculinidad dominante, que se hizo evidente en el uso de la fuerza y las armas, causó exclusión y persecución contra los homosexuales o contra personas que eran consideradas homosexuales.

Pero aquí hay que tener claro que apenas en 2014 empezaron a conocerse los primeros reportes oficiales. Hoy sabemos que todos los actores armados del conflicto –guerrilla, paramilitares, fuerza pública y delincuencia común— ejercieron represión y violencia contra personas LGBT. Los ataques contra personas bisexuales o lesbianas son menos visibles, pero son dolorosamente frecuentes los casos de violencia contra personas transgeneristas y, principalmente, contra hombres gays.

Recientemente las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo le entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes sobre crímenes de persecución contra las personas LGBT en el marco del conflicto. ¿Por qué es importante dignificar esa memoria?

El reconocimiento de esta memoria tiene que partir de reconocer que la homofobia fue estructural. Es decir, no es propia ni de los paramilitares ni de la guerrilla ni del Ejército: es estructural. En ese sentido, lo que viene a hacer el conflicto es exacerbar esa homofobia estructural y el rechazo que ya existía hacia las personas LGBT. Esa violencia se agrava por el conflicto, pero no se genera por el conflicto. Y desde ese punto de partida es que, creo yo, se debe hablar. De lo contrario, estaríamos perdiendo de vista una información relevante para entender qué fue lo que sustentó esa violencia en el marco del conflicto.

En Colombia, en los últimos años se han dado avances significativos en materia de derechos de la población LGBT –matrimonio igualitario, adopción por parte de parejas del mismo sexo, reconocimiento de derechos patrimoniales—, pero también es cierto que esos logros

reciben ataques constantes desde varios frentes. Como activista, pero además como abogada, ¿usted cree que es posible que haya un retroceso?

Yo lo veo muy difícil mientras el sistema democrático se mantenga y no cambien 'articulitos'. No es que alguien salga a decir: 'A partir de mañana los homosexuales no tienen derechos en este país'. No, eso en una dictadura. Mientras se mantenga la división de poderes yo veo muy difícil que retrocedan los derechos. Que puedan ponernos obstáculos de toda índole, sí. Que pueden intentar muchas cosas y que pueden dejar sin recursos una política pública, sí. Pero ya hay un marco normativo. Ya corrimos la raya del marco de interpretación y no hay manera de echar para atrás eso en un sistema democrático.

Usted dice que no hay manera de echar para atrás, pero hace poco se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo sin contar con la población LGBT, por ejemplo. Se toma esa decisión en medio de ataques homofóbicos que no cesan. ¿Cómo resistir?

Con sentido de realidad. Yo me defino como una optimista repugnante. Estamos en un gobierno completamente adverso a cualquier tema de estos. Sabíamos que era un gobierno adverso y sabíamos que estaban aliados con partidos políticos que sistemáticamente se han opuesto a nuestros derechos. Los mismos que nos hicieron perder 21 idas al Congreso en 19 años para conseguir nuestros derechos son los que están gobernando hoy. Entonces, esto se supera con sentido de realidad. ¿Qué podíamos esperar de este gobierno? Nada. Simple. No había que hacerse ilusiones. ¿Qué nos toca hacer? No retroceder. Por eso, nuestra consigna debe ser siempre 'Ni un paso atrás' y seguir en esta tarea.

Yo llevo veinte años metida en esto. Entre activistas a veces hay mucho cansancio porque esto agota, pero ante ese cansancio mi respuesta siempre es: 'No nos dimos por vencidos cuando no había absolutamente nada, ¿Nos vamos a dar por vencidos hoy, cuando tenemos un marco normativo que ya, por lo menos, nos considera iguales? No'. Por eso, siempre abogo por el optimismo. Sigamos en la lucha, porque la otra apuesta es creer que todo es una mierda, que ya no hay nada que hacer. Esa pedagogía de la desesperanza les sirve solo a quienes tienen el poder y a quienes están en los espacios de representación.

En veinte años de activismo, ¿usted alguna vez no ha sentido ese agotamiento?

Sí, en la discusión sobre matrimonio igualitario en 2013, por ejemplo. Fue tremendamente agotador dar la cara con mi pareja porque es mi vida privada puesta en el espacio público. Con mi expareja habíamos resuelto casarnos, pero, como abogada y activista, yo tenía perfectamente claro que esa pelea podía representar años, entonces hicimos una ceremonia simbólica en mayo. Luego, en junio, con otra pareja de lesbianas, nos fuimos a la oficina de reparto de los juzgados municipales de Bogotá a radicar las primeras solicitudes matrimoniales. Las primeras en Colombia. Imagínate eso. El figurar como las primeras parejas solicitantes significó asumir una exposición mediática impresionante, que implicaba no solo un sacrificio a la intimidad, también de seguridad. Pero al final fue profundamente satisfactorio. Nos casamos el 25 de septiembre de 2013 y en 2016 la Corte Constitucional les dio validez a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

A propósito del matrimonio igualitario, tiende a creerse que ese logro y el de la adopción de parejas del mismo sexo eran la meta máxima de esta lucha. Es decir, para muchos, incluso personas LGBT, ya no hay nuevos derechos que alcanzar, ¿es así?

Los que piensan eso jamás se involucraron en las luchas ni tampoco las conocen. Pensar que hemos hecho todo lo que hemos hecho únicamente para casarnos y adoptar es absurdo. Hemos hecho todo esto para que nuestros derechos estén reconocidos igual que los del resto. Y hablo de los derechos que sean, para que no tengamos que interponer una demanda cada vez que vayamos a hacer un reclamo de cualquier cosa. Para eso fue que nos metimos en esta causa y esa tarea todavía demora mucho. Adopción y matrimonio, sin duda, fueron dos temas importantes, pero aquí falta mucho por hacer.

En 2018, cuando se despenalizó la homosexualidad en India, los activistas decían que celebraban ese avance en materia de derechos, pero no olvidaban que en las calles todavía hacía falta librar una batalla importante: transformar los imaginarios sociales. ¿Ese es el siguiente paso?

Sin duda. La igualdad normativa es muy importante, necesaria también, pero la igualdad en el día a día es lo fundamental. Y ese proceso tomará mucho más tiempo. Para conseguirla necesitamos que toda la gente se involucre, y no solo las personas LGBT. Este es un tema esencial de democracia y hay que involucrarse en esa tarea. La norma reconoce nuestras parejas, nuestras

familias y nuestro amor. ¿Qué sigue? Pues que nuestras familias extensas nos reconozcan y nos respeten. Y también nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros conocidos. La sociedad entera.

Necesitamos mucha gente que se interese en hacer la diferencia para asegurar ese cambio cultural. Es una tarea grande, sin duda, pero podemos empezar por lo básico: en nuestras casas, con nuestros cercanos.

Menciona usted la democracia. Estamos ad portas de elecciones regionales en Colombia y es el momento en el que aparecen personajes con propuestas que apuntan a menoscabar lo que se ha avanzado en derechos de personas LGBT. ¿Cómo tratar ese punto en las campañas políticas?

Yo creo que ni siquiera es que quieran menoscabar estos derechos. Esa presunción ya es demasiado generosa con esa gente que está en esta emisión permanente de discursos de odio y descalificadores. Yo creo que lo que hay ahí, si uno mira la regla general de quienes emiten o se aprovechan de los procesos electorales para posicionarse en sus intereses políticos, es que son personas que no tienen nada más que decir. Su desempeño legislativo o su desempeño en asambleas o concejos es vergonzoso y el único recurso que encuentran para destacar mediáticamente es atacar a la población LGBT. Y les funciona, porque desafortunadamente los medios de comunicación les hacen el juego.

En política dicen: 'Que hablen bien o mal, pero que hablen'. Ellos ya lo entendieron, entonces les importa un carajo. A ellos les parece buenísimo que los medios repliquen sus declaraciones porque se posicionan en su nicho, pero realmente no creo que sea un asunto sistemático y pensado para tumbar derechos, sino más bien únicamente con interés electorales.

¿Pero sí representan una amenaza para la población LGBT?

Sí, en la medida en la que alimentan los discursos de odio. Cuando alguien está todo el tiempo diciendo: 'Los homosexuales son muy peligrosos para los niños', 'Es que los homosexuales quieren acabar con la familia', 'Esta gente lo que quiere es destruir a la sociedad', 'Quieren imponer una dictadura y homosexualizar a todo el mundo'... Lo que están haciendo es enviar un mensaje de odio. ¿Por qué? Porque en algún punto alguna persona va a interpretar eso como si fuéramos un verdadero peligro y, entonces, no va a dudar en "eliminar a ese peligro", como lo hizo el hombre que asesinó hace unos años a 50 personas en un bar LGBT en Florida.

Esos discursos de odio ahora los intentan minimizar con un 'pero': 'No soy homofóbico, pero...', 'Respeto a los homosexuales, pero...'.

Detrás de ese 'pero' siempre está la homofobia. Eso no falla. La mayoría de las personas piensa que la homofobia solo se manifiesta con actos violentos, que únicamente quien asesina o golpea es homofóbico, y que denigrar, insultar o rechazar la posibilidad de que un grupo de la población tenga los mismos derechos que el resto no es un acto de discriminación, sino un elemento de la libertad de expresión. ¡Falso! También es homofobia. Incluso, muchos chistes y afirmaciones, que en apariencia son inocentes, son parte de esa violencia verbal que sufrimos.

Muchos de esos discursos de odio son alentados por personas que, de alguna manera, están relacionadas con una religión. ¿La diversidad y la religión están condenadas a 'ser enemigas', como algunos plantean?

Yo no creo que esto se reduzca a creyentes contra homosexuales o viceversa. Y siempre lo aclaro porque muchos homosexuales somos muy creyentes. Esa falsa dicotomía la quieren hacer ver quienes quieren mezclar política con religión porque necesitan generar un enemigo. ¿Y cuál es el enemigo más efectivo para decir que 'Se está atacando a los buenos creyentes y cristianos'? Los homosexuales. Por eso, me parece tan importante decir que es falso. Muchos homosexuales somos creyentes y, además, conozco muchos creyentes absolutamente convencidos de que hay que respetar los derechos de las personas LGBT y no son de este gremio.

Usted es católica y lesbiana, ¿cómo es su relación con la religión?

Ser católica y lesbiana no es una situación fácil, sobre todo porque es un reto seguir siendo católica cuando los mensajes de rechazo son tan frecuentes desde la misma Iglesia de la que hago parte. Pero yo siempre he tenido una relación tranquila con Dios y mi religiosidad. Por supuesto, cuando estaba en el proceso de salir del closet me atormenté pensando en mi relación con Dios, pero después la respuesta fue clara: A mí Dios me ama perfectamente como soy. Es decir, lesbiana y también mamá.

Además, he tenido la suerte de contar con un combo de sacerdotes, religiosas y gente muy chévere que me conoció en otros ámbitos. Yo trabajé muchos años en diferentes formas de pastoral de la Iglesia, hice parte de grupos juveniles católicos desde que tengo razón y estudié cinco años la Biblia. Pero yo entendí todo esto con mis papás. Si mis papás católicos, que rezan el rosario a

diario y van a misa todos los domingos, que son imperfectos y humanos me aceptan, Dios, que no es humano y es perfecto, ¿Por qué no lo va a hacer? Mi mamá se demoró trece años en aceptar que yo soy lesbiana, pero lo logró. Mi secreto es ese: si mi mamá pudo, cualquier puede.

Entonces, ¿qué hay detrás de esa exclusión al otro como para que tome tanto tiempo aceptarlo?

Hay miedo. Es la incapacidad de descifrar al otro, la sorpresa de que ya no sé qué voy a hacer con él. No lo entiendo, entonces lo pongo al margen. Pero cuando yo pongo al otro al margen y lo hago sentir diferente, yo debería reconocer que lo que me está motivando a excluir al otro es el miedo.

Entonces, lo primero que hay que desactivar es el miedo. Eso lo entendí cuando fui mamá, porque conozco la preocupación que puede sentir un padre o una madre al pensar que sus hijos van a estar expuestos a informaciones para las cuales no están preparados por su edad. Los papás, sin embargo, tienen ese choque fuerte cuando se enteran de que su hijo o hija es homosexual porque en el fondo hay miedo: 'Le van a hacer algo', 'Se va a morir', 'Le va a dar sida', 'Lo van a matar'... todo eso es miedo. ¿Por qué? Porque los papás ahí se dan cuenta de que han hecho parte del discurso que rechaza, hostiliza y discrimina.

Pero los hijos e hijas homosexuales, seguramente, también sienten miedo.

Claro, yo tuve miedo muchos años: miedo a la discriminación, miedo a la respuesta que recibiera cuando dijera que soy lesbiana. Salir del closet me liberó, sin duda, pero sigo teniendo claro que el miedo finalmente viene a ser la expresión de que sí hay una posibilidad latente de que me discriminen en cualquier momento. Pero lo que me mantiene con 'la pila recargada' es que estoy absolutamente convencida de que es más la gente que respeta e incluye que la gente que discrimina. Y eso me da esperanza, porque esas personas que incluyen y respetan están haciendo una diferencia enorme: están reconociendo a ese otro y, sobre todo, están partiendo del hecho de que no importa qué tan distinto sea ese otro, sigue siendo muy valioso.

Cuando les dije a mis papás que soy lesbiana, me funcionó decirles que yo era su hija de siempre, que era feliz y que amaba y me amaban, que iba a ser profesional y que era buena persona. Que soy lesbiana, sí, pero que todo lo demás estaba bien. Y ellos lo aceptaron. Por eso, yo no tengo otra manera de retribuir esa maravilla con la que cuento que trabajar por hacer mejor la vida de

otras personas. De eso se trata el activismo, que las posibilidades que encuentren las personas sean distintas a las que yo encontré cuando llegué a este planeta.

Hace poco lanzó su primer libro, 'No Somos Etcétera'. ¿Lo escribió pensando, justamente, en esa idea de hacer mejor la vida de otros?

En parte, sí. 'No somos etcétera' fue una tarea que me puso la vida, yo creo. Cuando le gente tenía preguntas en entrevistas, conversaciones o foros, yo siempre les echaba el cuento. Y luego, me preguntaban por qué toda esa información no estaba en algún lado. Y sí está, pero está en la academia y dispersa. No está integrada y, además, está en un lenguaje académico complejo, porque son investigaciones o tesis académicas poco accesibles. Entonces, empecé a pensar que había que escribir esta historia. Y así lo hice. El libro es el recuento de lo que ha ocurrido en los últimos veinte años en las luchas de la población LGBT en Colombia.

Cuando uno lee el libro, nota una intención clara de contar esa historia de manera práctica, lejos de ese lenguaje académico. ¿El activismo le debe apuntar a hacer un poco ese trabajo pedagógico?

Con el activismo yo he hecho casi de todo: he usado un lenguaje muy técnico, muy jurídico, muy formal para intervenciones en la Corte; he ido a la calle a gritar, con la camiseta puesta y la bandera en la mano; he tocado tambor; he hecho plantones; he ido a foros y debates de todo tipo. He hecho un montón de cosas y me he dado cuenta de que cada vez la apuesta debe ser distinta.

Hubo un momento en el que era oportuno, necesario y completamente conveniente utilizar ese tipo de lenguaje técnico y hablar de los derechos. Pero ahora que esos derechos están claros, una vez que la norma nos equipara, hay que buscar estrategias para un cambio cultural. Ya logramos el cambio legal, ahora hay que buscar el cultural, y ese cambio cultural no se consigue con un discurso jurídico.

Se consigue, según yo, a partir de la construcción de unos lenguajes que permitan establecer puentes, que ya no sea el discurso de: 'Usted me tiene que respetar a mí porque tal artículo dice tal cosa'. No, hay una cosa distinta y es: 'Oiga, es que yo necesito ser feliz, ¿Por qué no vivimos en paz y ya?'. Ese cambio cultural solo se logra a través de la construcción de un lenguaje más sencillo, bajándonos del tecnicismo y la formalidad y poniendo todo en términos que cualquier persona en una cafetería cualquiera pueda pescar para que reflexione. A eso le apunté con el libro.

Después del libro, vino 'A ver si nos entendemos', un montaje teatral. Usted ahí actuaba e incursionaba incluso en la comedia. ¿Eso también hace parte de esos 'nuevos lenguajes' del activismo?

Hiciste la tarea (risas). El libro y la obra fueron mi apuesta por un activismo creativo, que es en lo que trabajo ahora. Entonces, la obra le apuntaba a la ironía para evidenciar prejuicios y derribarlos. Era gracioso porque hablábamos del "plan homosexual" para conquistar el mundo y toda esa "conspiración gay" que los sectores más recalcitrantes del fundamentalismo religioso nos han inventado.

¿En qué consiste el activismo creativo?

Es una apuesta en la que llevo varios años. El activismo creativo, además de buscar esos nuevos lenguajes, parte del reconocimiento del otro y de la posibilidad de que el otro se transforme. Punto. Entonces, está profundamente conectado con la humanidad del otro, y eso significa que busca siempre su bienestar. Uno no hace activismo para joderle la vida a otra persona, sino para mejorar las condiciones inadecuadas de otras personas. Por eso, no debe recurrir a la violencia, ni siquiera la verbal.

¿Qué puede hacer, por ejemplo, una activista lesbiana y mamá –yo– si siente que la Iglesia a la cual hace parte la está discriminando? Fácil. Te cuento un ejemplo: En 2012, la Conferencia Episcopal, en medio de una crisis invernal tenaz, decidió que el tema para hablar el Domingo de Ramos en todas las iglesias del país era por qué los homosexuales no eran aptos para adoptar. Y como ya te dije, yo soy lesbiana, mamá y católica. Me sentí profundamente insultada. Entonces, con otras personas que eran papás y mamás, que eran católicas y por supuesto homosexuales, bisexuales o trans, fuimos a misa con una camiseta en la que por un lado se leía 'Soy homosexual. Tengo hijos. Soy Católico' y por el otro lado decía 'La homofobia no es cristiana'. ¿Qué hicimos? Solo fuimos a misa. No hubo consignas ni pancartas ni gritos. Nada. Solo estuvimos en misa. Fue un acto súper elocuente y tan efectivo que, al día siguiente, la Conferencia recordó la gravísima emergencia invernal que había en el país.

Entonces, ¿el activismo creativo le apunta a concentrarse en las formas?

Venimos al mundo para dejarlo mejor de cómo lo encontramos. Esa es la razón del activismo. Para hacerlo, debemos tener presente esa premisa de Gandhi que dice: 'Si la causa es justa, los medios

para defenderla también deben ser justos'. En esa medida, entonces sí, cuando estás convencido de lo justo de tu causa, la defiendes respetando las formas y el tono, porque descubres que esas formas son importantes. Por eso jamás he tirado una piedra o rayado una pared, porque estoy absolutamente convencida de que esta causa es profundamente justa y creo que vale toda la pena del mundo defenderla, pero defenderla como se debe.

Cada vez un mayor número de jóvenes busca a través de redes sociales, trabajando con organizaciones e incluso con el ejercicio periodístico, dedicarse al activismo y trabajar por sociedades más incluyentes. ¿El camino para esa 'nueva generación' es ese activismo creativo?

Sí, yo creo que ya no es el momento de gritar en la calle. Es decir, puede que sí haya que ir a hacer el plantón al Andino, pero ya no es el momento de quedarse ahí, en unas cosas que nos tocaron a nosotros hace 20 años. Es el momento de hacer cosas más interesantes y aprovechar ese poder de las redes sociales, por ejemplo, que generan un diálogo que a mi generación ya se nos perdió.

Entonces, mi consejo es que, primero, no se sientan el ombligo del mundo y no vengan con intención de inventar la rueda. Que estudien lo que hemos logrado y de dónde salimos para saber en qué puntos estamos y a partir de ahí avanzar. Segundo, entender que somos un eslabón de una cadena. Esto no inicia ni acaba conmigo. Somos un pedazo de historia y el trabajo es asumir lo que nos toca dentro de ese pedazo. Y, por último, que no olvidemos que el cambio comienza en la casa, en lo cotidiano, en la conversación con los cercanos.

Derechos en clave trans

Por William Moreno Hernández

Laura Weinstein tenía cinco años cuando descubrió que era 'ella' y no 'él'. No comparte la fecha de su nacimiento ni revela cuál era su nombre anterior. Su tránsito de hombre a mujer — su verdadera identidad— inició después de un viaje revelador a Israel para estudiar historia judía. En ese viaje, dice, volvió a nacer.

En 2010, con el propósito de que nadie tuviera que pasar por lo que ella había vivido —el rechazo de sus siete hermanos, la negligencia de decenas de psicólogos y el no reconocimiento de su identidad en todo tipo de entornos públicos—, Laura asumió la dirección del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), una fundación que trabaja por los derechos de la población trans en Bogotá.

Esta historiadora con estudios en Trabajo Social pronto comprendió la vulnerabilidad de las personas trans. Cientos de veces, asegura, ha sido testigo de las distintas violencias que se ejercen sobre esta población y las escasas garantías de seguridad con las que cuenta: discriminación en centros de salud, pedradas en las calles, linchamiento social y un extenso etcétera.

Su primera actividad como directora del GAAT la organizó con mujeres trans. Resolvió llevarlas al Museo de Arte del Banco de la República a ver 'Habeas corpus: que tengas [un] cuerpo [para exponer]', una exposición sobre el cuerpo humano. Laura quería que sus compañeras, como las llama, reflexionaran al respecto y salieran de sus rutinas. Ellas, entusiasmadas, accedieron. Para muchas, era la primera visita a un museo.

Una vez allí, durante el ingreso, los detectores de metal empezaron a pitar. Todas se miraban entre sí. Nadie entendía qué pasaba. Les pidieron abrir sus bolsos y el equipo de seguridad del museo encontró variedad de cuchillos y navajas. Ese día —cuenta Laura— dimensionó a lo

que se enfrentaba. "Ellas no salen sin eso para defenderse. Eso nos alarmó. Nos dimos cuenta de la necesidad de comenzar a trabajar en herramientas de denuncia con las que ellas entendieran que no se podía seguir así".

Y es que la población trans, por el prejuicio hacia su identidad de género, es especialmente vulnerable a ser discriminada. De acuerdo con el informe 'La discriminación, una guerra que no termina', publicado por Colombia Diversa, en 2017 se registraron en el país 96 violaciones de derechos a personas trans (85 dirigidas a mujeres y 11 a hombres) y se documentaron 38 casos de homicidios (35 de mujeres trans y tres de hombres trans). Eso, sin contar el subregistro que, según organizaciones como el GAAT, está relacionado con el temor a denunciar.

La apuesta de Laura es reducir esas cifras, pero no es tarea fácil. La discriminación a personas trans, sobre todo mujeres, es estructural y se traslada a otros ámbitos como la educación, el trabajo y la salud. Esas condiciones no son un asunto menor, insiste Laura. Y no es una exageración. Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que, en América Latina, el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años, pues el 80 por ciento de ellas mueren asesinadas antes de llegar a esa edad.

Hace poco en una charla sobre diversidad le escuché decir que, antes de activista, usted es 'parcera' de las personas trans, ¿qué quiere decir eso?

El GAAT va a cumplir once años trabajando por la reivindicación de los derechos de las personas trans. Yo llevo vinculada más o menos diez, pero hasta hace poco vine a darme cuenta de que lo que yo hacía se reconocía como activismo. Yo empecé en esto porque me di cuenta de que había muchas cosas que eran injustas en las vidas de nosotras las personas trans. Entonces, más allá de la figura de la activista, me gusta decir que soy la parcera porque me gusta sentarme y preguntarles por sus vidas, sus problemas, sus familias y, sobre todo, por sus sueños.

El proyecto más reciente del GAAT es trabajar con familias de niños y niñas trans, ¿por qué?

Fue una apuesta más personal, una reivindicación para decir que los niños y las niñas trans sí existen y que todas las personas trans merecen familias que las amen. Para mí no fue fácil la

infancia. Fue una época llena de dificultades, de mucha soledad. Ningún niño ni ninguna niña deben pasar por lo mismo que yo viví, entonces creí que había una deuda histórica con ese 'niño' que fue discriminado. Ese 'niño' que no solo es mi experiencia de vida sino seguramente la de muchas otras personas. Necesitamos, entonces, involucrar a las familias porque cuando una persona trans logra que su familia la acompañe en este proceso, que reconozca su tránsito y le brinden apoyo, su vida es otra; tiene el 90 por ciento de su vida asegurada porque no va a caer en entornos de violencia y criminalización.

¿En qué consiste ese trabajo con las familias?

Nosotros tenemos varios programas institucionales de encuentro y formación. Uno de ellos es el Grupo de Apoyo, en el que acompañamos los tránsitos y el proceso identitario de mujeres y hombres trans, pero también a las personas que las rodean, como familiares, amigos e incluso parejas. Por lo general, nos reunimos una vez cada semana. Tenemos un grupo para adultos y otro para niños y niñas trans y sus papás. Hacemos acompañamiento, construimos redes de solidaridad y compartimos vivencias que nos atraviesan cotidianamente.

¿Qué otras líneas de trabajo tiene la fundación?

Tenemos la 'Patrulla Trans', que se encarga de atender casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, hacemos seguimiento a casos de asesinatos, desplazamientos forzados, golpizas, expulsiones de colegios y de trabajos y todo tipo de barreras al momento de acceder al sistema de salud o para cambiar documentación. El problema es que a la fundación siempre llegan casos, pero no hay recursos para enfrentarlos.

Ahora nos interesa también capacitar y concientizar a las personas trans sobre sus derechos y empoderarlas, entonces hemos organizado talleres para resolver dudas o atender reclamos relacionados con sus derechos y ahí les mostramos opciones para mejorar su calidad de vida. Ese proyecto se llama 'Cinco derechos en clave trans' y nació en 2016.

¿Y por qué 'cinco derechos'?

Por los cinco derechos que consideramos más vulnerados en la comunidad trans: movilidad, educación, trabajo, vivienda y salud.

Las cifras de violencia en contra de la población LGBT en general son alarmantes, pero, según varios informes, las personas trans son especialmente vulnerables. ¿Por qué?

Aquí primero habría que decir que hay un problema inicial y es que se acostumbra a meternos a todas las personas LGBT en una misma bolsa, ignorando que cada grupo poblacional tiene unas necesidades específicas. En el caso de las personas trans, todo parte de una falta de reconocimiento. Si tú eres una persona homosexual o bisexual ni siquiera tienes que decirlo. Las personas trans, en cambio, vivimos en un partido que nos jugamos todos los días de nuestras vidas porque tenemos que ir por todos lados explicando quiénes somos, y encima de todo reafirmarlo. Eso es muy violento y puede llegar a generar discriminación.

También es cierto que muchas personas trans están inmersas en entornos violentos y de alta criminalización como la prostitución, entonces son más vulnerables a ataques por ser quienes son, por su identidad de género.

¿Y por qué llegan a esos entornos de alta criminalización?

La gran mayoría de las personas trans no tiene un trabajo formal. Eso, sumado a la falta de educación—que también ocurre por la discriminación—, lleva a que muchas, sobre todo las mujeres, acaben en entornos laborales que son absolutamente precarios y muy criminalizados. No es que ellas quieran estar en esos lugares sino que es lo que hay y tenemos que sobrevivir con eso. En el GAAT hemos calculado que cerca del 70 por ciento de las mujeres trans y el 50 por ciento de los hombres trans encuentran en el servicio sexual su principal actividad profesional.

El informe más reciente de Colombia Diversa sobre estos casos señala que los crímenes en contra de personas trans tienden a ser "justificados" por los atacantes, incluso por las mismas autoridades, porque se cree que las víctimas se dedicaban a robar o estaban vinculadas a redes de microtráfico.

Claro, hay una violación en el proceso de las diligencias porque, de entrada, se asume que las personas trans son delincuentes. Eso genera un estereotipo que limita el acceso a la justicia en casos de violaciones de derechos humanos.

Pero además esa estigmatización es estructural. La gente tiene unos imaginarios incorrectos sobre la realidad de las personas trans. Nos ven como personas peligrosas, escandalosas, conflictivas,

como personas con las que hay que tener cuidado. Por eso, cada espacio que logramos conquistar es un logro. Pero no es fácil. Muchas personas nos siguen viendo como si fuéramos un mito, negando que somos toda una realidad, que existimos.

Sobre el acceso a trabajo hay un marco jurídico. La Corte Constitucional, por ejemplo, se pronunció en 2007 sobre la discriminación de personas trans en ese ámbito. ¿Qué ocurre en ese caso?

Analicemos cuántas personas trans hay en Colombia en cargos decisorios de empresas o entidades. Ninguna. En la discriminación laboral ocurre algo particular y es que no solo se trata de que se ofrezca trabajo a las personas trans sino que, cuando tenemos acceso, nos obligan a trabajar más por ser personas trans. De alguna manera, nos obligan a demostrar que somos "buenos trabajadores" a pesar de lo que somos. A mí me pasó cuando trabajé en la institucionalidad. En algún momento me dijeron que yo era "una acción afirmativa", pero me di cuenta de que mis compañeros y compañeras ganaban más que yo, aun cuando yo trabaja igual o más que muchos de ellos. Esos espacios siguen siendo violentos. No estamos en igualdad.

Otro ámbito en el que se manifiesta con mucha frecuencia la discriminación hacia las personas trans es la salud, ¿qué pasa ahí?

El sistema de salud todavía no entiende las construcciones identitarias de las personas trans, entonces a veces es muy complejo. Muchas veces somos nosotras y nosotros quienes tenemos que decirle al médico qué se podría hacer porque ellos no tienen ni la mínima idea. Pero este problema va mucho más allá. El acceso a la salud es muy complicado para las personas trans porque a veces ni siquiera hay una forma de obtener una afiliación en salud.

Muchas veces las personas trans no tienen un documento que se ajuste a su identidad. Y no tienen ese documento por distintas razones, porque decidieron no sacarlo o porque, al perderlo, decidieron no lidiar de nuevo con el proceso, en fin. El problema es que para acceder al sistema de salud necesitas ese documento —la cédula—, que para cualquiera puede ser lo más común del mundo pero para las personas trans es todo un proceso.

Y ahí no termina la historia. Para acceder a salud, tenemos que estar afiliadas, pero también tenemos que encontrarnos al vigilante en la puerta, anunciarnos con la recepcionista y enfrentar un trato inapropiado por parte del médico en el consultorio. En todos esos espacios, por lo general,

no se reconoce nuestra identidad, entonces te tratan como hombre si eres mujer trans y viceversa. Es un sistema que continuamente es violento.

¿Cuál es el rol de la salud mental en todo este proceso? Se lo pregunto porque entiendo que para que una persona trans adelante su tránsito a través de tratamientos quirúrgicos u hormonales se exige un certificado de 'disforia de género'.

Sí, a ver, lo que pasa es que en Colombia no hay un protocolo para que a nivel institucional haya un trato adecuado hacia las personas trans en temas de salud. Sin esos lineamientos, pues cada caso queda en manos del médico tratante. Entonces, para adelantar el tránsito físico, por decirlo de alguna manera, las personas trans deben pasar primero por el consultorio de un psiquiatra o de un psicólogo clínico. El problema es que, muchas veces, el criterio médico está basado en prejuicios.

¿Y, en sentido estricto, qué es la 'disforia de género'?

El 'transexualismo' el año pasado dejó de considerarse como "trastorno de la identidad de género" y pasó a tratarse como una condición que está ligada a la salud sexual y que, por eso, requiere atención médica. Ese diagnóstico se conoce como 'disforia de género'. Fue un logro enorme porque demostró que las personas trans no somos personas que estamos enfermas, pero lo ideal sería que se nos trate sin ese enfoque patologizante.

¿Esas 'trabas' en el acceso a la salud ocurren únicamente cuando se quiere adelantar la transición o también se manifiestan en procedimientos comunes?

Ocurren todo el tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo cáncer —que esa es otra reivindicación por la que hoy trabajo— y me he sentido discriminada varias veces por ser una mujer trans. Me preguntan que qué soy, que por qué y, de hecho, cuando comencé a enfermarme, lo primero que me dijo el médico, sin haberme examinado, es que seguramente se trataba de una enfermedad venérea. La discriminación y la violencia son constantes. Este sistema de salud es perverso.

En estos informes sobre violencia hacia población LGBT se suele advertir sobe el número de casos que son cometidos por parte de integrante de la fuerza pública, ¿es la fuerza pública un actor discriminador?

Ahí pasa algo paradójico y es que, a pesar de que el nuevo Código de Policía incluye sanciones por discriminación hacia personas LGBT, son los mismos miembros de la Policía quienes violentan nuestros derechos. En el caso de las personas trans, las agresiones se producen en las zonas de trabajo sexual, que, como te digo, son lugares criminalizados.

En estos casos, lo que hay que hacer es comenzar a humanizar a los miembros de la Policía porque sensibilizar ya no funciona. El abuso policial es un problema que las personas trans enfrentamos a diario, pero nos quedamos en la charla, en el taller. No, hay que ir más allá y decir: 'Venga señor Policía y nos sentamos a conversar sobre nuestras realidades y lo que tenemos que soportar a diario'. Por ahí empieza la transformación.

En las cifras de discriminación hacia personas trans llama la atención que las mujeres son más vulnerables, ¿por qué?

Sí, la verdad es que las realidades de los hombres trans y las mujeres trans son completamente diferentes. Las mujeres trans somos más visibles y, aparte, los estereotipos que se nos imponen con relación a la feminidad son más fuertes. Un chico trans tiene una transición que muchas veces ni siquiera se nota, mientras que a las mujeres, ya sea por su contextura u otras cuestiones, se nos nota más, y ahí empieza la discriminación. Es más, uno podría hablar de una 'doble discriminación': una por ser mujer y otra por ser mujer trans.

A propósito de esa 'doble discriminación', hace unos meses, por primera vez en la historia, se tipificó el homicidio de una mujer trans como feminicidio. ¿Cómo recibieron ustedes esa decisión?

Ese fallo es histórico y muy importante porque, por primera vez, somos reconocidas como mujeres. Sin embargo, no creemos que sea prudente regularizar como feminicidio sino se va a quedar ahí, en feminicidio. Es decir, nuestra preocupación es que los asesinatos de mujeres trans sumen a las estadísticas de feminicidio sin la claridad de que fueron cometidos contra una mujer trans. En nuestro caso, los asesinatos no solo son por el hecho de ser mujer sino también por nuestras construcciones identitarias. En ese campo sí creemos que le hace falta mucho al sistema judicial.

¿Y las mujeres no encuentran garantías en el sistema judicial?

No, por lo general, cuando vas a ir a denunciar te preguntan si estás diciendo la verdad. Sin contar que todos los casos quedan en la impunidad. Yo, por ejemplo, recibí amenazas por mi trabajo en el GAAT. Cuando me acerqué a denunciar, me preguntaban que si estaba segura de que no había sido uno de mis novios, que si no se trata de alguien que yo conocía o que si de verdad yo estaba segura de que se trataba de una amenaza. Entonces, nos ignoran o no nos creen. Incluso, a la fundación han llegado casos de mujeres trans a quienes, al momento de intentar presentar una denuncia, les piden el documento para indagar primero si tienen antecedentes o denuncias en su contra, reforzando esa idea de que somos peligrosas.

¿Quién la amenazó?

No sabemos. Me amenazaron a mí y a varios integrantes del GAAT, pero la investigación no avanzó. Se quedó en etapa preliminar. Son amenazas por ser personas LGBT y trabajar por esto.

En los últimos años, las personas trans han ido conquistando un escenario importante: los medios de comunicación. ¿Cómo cree que los medios están hablando sobre las personas trans?

De un tiempo para acá hemos tenido unos avances importantes porque se habla de las personas trans, sí, pero muchas veces, creo, no se hace de la manera adecuada. Muchos comunicadores no están formados para hablar. No se trata solamente de querer hablar de estos temas sino hacerlo de manera asertiva. Cuando se informa, creo yo, debe hacerse siempre con respeto y conocimiento. De lo contrario, se está desinformando. Entonces, ahí es cuando propongo unir fuerzas: ¿por qué no unimos el conocimiento que yo tengo sobre este tema con sus habilidades para informar? Eso ayudaría muchísimo a cambiar los imaginarios sociales acerca de las personas trans.

El mito del cuerpo

Por William Moreno Hernández

Bogotá, un miércoles de marzo en la tarde. Concreté una cita en la Biblioteca Luis Ángel Arango con Vicente García, docente, investigador y activista de derechos humanos. Coincidimos en la entrada, al lado de una estatua de la diosa Minerva. Vicente viene en compañía de José David Díaz, también activista. Nos saludamos y pasamos el primer filtro de la biblioteca. Una vez adentro, Vicente me pide permiso para sujetar mi brazo derecho. Yo accedo. José David hace lo propio con mi brazo izquierdo. Caminamos en busca de una mesa para conversar a gusto. Avanzamos. Mientras subimos unas escaleras, Vicente y José David conversan. Son amigos, se conocen hace años. Yo, en el medio, los escucho. Intervengo solo cuando hay ocasión.

En el primer piso no encontramos lugar. Decidimos subir. Ellos conocen mejor que yo el camino al ascensor. Vienen seguido a la biblioteca. "Derecho y luego giramos a la izquierda", me indica Vicente. Entramos al ascensor. José David busca el botón para subir y lo oprime. Llegamos al otro piso. Avanzamos por un pasillo corto que desemboca a una puerta angosta de vidrio. Les comento que debemos entrar de a uno. Primero entra José David, luego yo y el último es Vicente. El lugar está lleno. Los presentes nos observan, quizá sienten asombro. Después de buscar durante un par de minutos, encontramos una mesa libre. Nos sentamos a charlar.

Vicente García perdió buena parte de la vista a los veinte años en un atentado. Era 2001, formaba parte del movimiento estudiantil de Bogotá, que venía siendo víctima de persecución desde los años 90. En una ocasión, paramilitares estallaron un artefacto explosivo en la sede donde funcionaba el movimiento. Decenas de estudiantes quedaron heridos. Años después, muchos de ellos decidieron exiliarse. Otros prefirieron mantenerse en bajo perfil. Vicente, en cambio, siguió

resistiendo. En la actualidad, hace parte de la coordinación nacional del Movimiento Social de Discapacidad Colombia (Mosodic), uno de los grupos más visibles en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.

José David Díaz, por su parte, es artista. Su contribución al movimiento ha sido a través del arte y la cultura. En la actualidad, dirige Integrarte, una organización local que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque artístico.

La historia del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Colombia es reciente y poco documentada, en eso coinciden Vicente y José David. Y es que, a lo largo de la historia, las personas con discapacidad han vivido entre la exclusión, la usurpación de sus derechos y la patologización.

En su 'Breve historia de las personas con discapacidad' (2014), el escritor e investigador Luciano Andrés Valencia explica que "desde la antigüedad las personas con discapacidad han sufrido la opresión y la discriminación que recae sobre lo considerado 'diferente' de acuerdo al paradigma dominante de la 'normalidad'". Y ese es, precisamente, el común denominador: la opresión.

En Colombia, a pesar de que se han conseguido avances importantes –como la ley 1306 de 2009, que busca "la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental" como directriz para garantizar sus derechos fundamentales, o la ley 1752 de 2015, que sanciona penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad—, lo cierto es que hay enormes retos para hacer efectivos los derechos de esta población.

De acuerdo con datos del reciente Censo de Población, revelados a finales de mayo pasado por el Dane, en el país hay 3.065.361 personas con discapacidad, lo que equivaldría al 7,1 por ciento de la población. Esa medición ha permitido dimensionar la situación actual de las personas con discapacidad, pues se preguntó a detalle sobre puntos trascendentales de su desarrollo integral.

Se encontró, por ejemplo, que la mayoría de personas con discapacidad se encuentran en la edad más productiva. El 58,5 por ciento está entre los 15 y los 64 años de edad. Sin embargo, al momento de hacer el estudio, se pudo calcular que solo 29,1 por ciento (3 de cada 10 personas con discapacidad) ha recibido alguna vez un ingreso por su trabajo y que la tasa de analfabetismo entre la población con discapacidad que está entre 15 y 24 años de edad es de 85,8 por ciento.

Ese panorama pone en evidencia la necesidad de planificar estrategias de desarrollo económico y social efectivas para la inclusión productiva de esta población. Y esa es tan solo una de las luchas que adelanta el movimiento de personas con discapacidad en Colombia.

¿Cómo ha sido el proceso organizativo de las personas con discapacidad en Colombia?

Vicente: En el contexto internacional, los movimientos sociales de personas con discapacidad han surgido con ocasión de la guerra, quizá desde la configuración de la época de las posguerras esas reivindicaciones empiezan a tomar fuerza. Pero en Colombia, en cierta medida, los fenómenos de organización no ocurren al lado de la depuración de la guerra o de un cese definitivo de cualquier confrontación armada, pero sí en medio de las desigualdades sociales del país, porque esas desigualdades han recaído con más fuerza sobre la población con discapacidad.

Al principio, fueron organizaciones incipientes. Es decir, muchas de ellas son organizaciones no politizadas, que reivindican derechos pero no tienen un enfoque político. Son más como fundaciones, asociaciones, asociaciones de 3 o 4 personas y, además, son, en principio, muy sectorizadas. Entonces, los ciegos arman sus propias organizaciones, las personas sordas las suyas, etc. El caso de las personas con discapacidad cognitiva es distinto porque las personas con síndrome de Down como tal no se organizaron. Las organizaciones de ellos han estado siempre alrededor de sus familias. Uno podría decir, entonces, que en el caso de ellos quienes están organizadas, en sentido estricto, son sus familias.

¿Esa sectorización representó una ventaja o una desventaja para arrancar como movimiento?

V: Todas esas 'agrupaciones', sobre todo alrededor de la década de los 90, con toda la fuerza que tenía el discurso de la autonomía de las personas con discapacidad, se dedicaron a impactar de manera importante la configuración jurídica. Es decir, a principios de los 90 son reivindicaciones asociativas muy sectorizadas, pero que intentan, en conjunto, impactar, en principio, la Constitución del 91. Entonces, ahí entra todo lo que implicó la reivindicación de las personas más vulnerables y el lenguaje que se utilizaba en la época, que era sobre la protección constitucional de los 'desfavorecidos', de los 'impedidos'... Ese era un lenguaje que también utilizaban en las asociaciones. Entonces, lo que hicieron fue incorporar ese lenguaje a la Constitución del 91 y luego

a todo un marco jurídico que no ha parado de crecer desde esa época, pero que sí se ha modificado porque hubo circunstancias que permitieron ir conociendo cuál es la realidad de la población con discapacidad.

¿Qué circunstancias facilitaron esos cambios?

V: Todo el tema, por ejemplo, de la masificación de los discursos de género y la reivindicación de los movimientos LGBT. Eso nos ha ayudado a cambiar la manera como nosotros nos pensamos nuestra discapacidad, nuestra realidad y la forma como la vivimos. Entonces, de ese primer momento a la actualidad sí hubo una gran modificación en las reivindicaciones.

¿Cómo cambian esas reivindicaciones?

V: Antiguamente, en algunos contextos, por el hecho de que la población con discapacidad está generalmente en los márgenes de la pobreza más extrema, las reivindicaciones eran asistenciales. Eso se modificó porque los movimientos sociales de personas con discapacidad entendieron el fenómeno de la discapacidad ya no desde un asunto médico, sino como un asunto de realidad social, como un asunto que se debe modificar a nivel social. Y eso ha sido un hito, porque cambió el enfoque de las reivindicaciones e incluso ya hoy en día, al lado de la discapacidad, se habla también de una reivindicación que está ligada a los derechos humanos.

¿Y qué implicaciones tuvo entender la discapacidad como un asunto de realidad social?

V: Con las redes de organizaciones sociales que modificaron el enfoque se plantea que la reivindicación de las personas con discapacidad es de los derechos de última generación, entre otras, porque antiguamente se pensaba que las personas con discapacidad no teníamos derecho a los derechos humanos, por decirlo que alguna forma, y que atender desde el punto de vista estatal la discapacidad tenía que ver con un asunto médico y rehabilitador. Es decir, que la discapacidad se trataba con una silla de ruedas, con tener una prótesis y eventualmente generando una cierta estructura institucional para atender el tiempo libre de las personas con discapacidad. Eso se modificó cuando se planteó la discapacidad como una realidad social porque se empieza a entender que esta población tiene que incorporarse al sector económico y al sector educativo. Es decir, que es una población que produce tecnología, que produce saber, que produce conocimiento, que produce arte... y, en ese sentido, por parte del Estado ya no solo se trata de darle un bastón al ciego o una silla de ruedas a la persona con discapacidad física, sino que se trata de abrir los espacios

educativos, los espacios de campo cultural y los espacios del sector económico para insertarnos en la sociedad.

Entonces, eso ha pasado en el país. Ya es una jurisprudencia muy rica que protege ese marco de derechos, incluso de primera generación. Por ejemplo, en Colombia, hasta la década de los 90, los ciegos no votaban porque la población con discapacidad no era considerada objeto de votación.

Y hoy ya cuentan con tarjetón en Braille.

V: Exacto, con la nueva jurisprudencia lo que ocurre es que tenemos garantizado, por ejemplo, ese derecho básico que es votar. Con el tarjetón Braille seguimos teniendo dificultades, pero, en términos jurídicos, puede decirse que hay un nivel de protección muy avanzado y progresista. Entonces, en Colombia, en ese sentido, si algo tiene la población con discapacidad son leyes. Ahora, de eso a la concreción y la realidad de los derechos en la vida diaria hay un trecho bastante largo.

¿Ese trecho tiene que ver con la necesidad de que un cambio cultural acompañe ese avance jurídico?

José: Es una lucha de diferentes niveles: En la calle, con la sociedad, en nuestros propios hogares y también como población. Entonces, creo que hay varios niveles, porque hemos tenido que dar la lucha desde la sociedad hacia nosotros, pero principalmente de nosotros hacia la sociedad. Abundan las leyes, sí, y hay un marco jurídico muy amplio que se fortalece cada día, pero aún en la población con discapacidad hay rezagos muy fuertes de problemas como el asistencialismo. Y eso, en parte, no ha permitido que progresemos de forma unificada como la población LGBT, por ejemplo. Ellos han ganado mucho desde la unidad porque lograron unir a los diferentes sectores dentro de su sector. Nosotros, en cambio, estamos 'biches' en eso. No luchamos en gavilla sino por sectores. No hemos logrado articular necesidades colectivas, sino que seguimos sectorizados, y eso ha generado fuertes discrepancias en asuntos claves.

¿Y qué pasa cuando se trata de una persona con discapacidad que es, además, homosexual, bisexual o trans?

V: Hay un fenómeno bastante interesante, que incluso se ha analizado a nivel mundial, y es que, en ocasiones, en los ámbitos de reivindicación política, las personas con discapacidad que se

reivindicación de homosexuales que con las reivindicaciones de población con discapacidad porque encuentran que allí por lo menos uno de los elementos de discriminación, que sería la homosexualidad, va a tener otra consideración y va a ganar un espacio a nivel social totalmente distinto que la discapacidad no ha logrado. Aquí en Colombia ese fenómeno se ve, por ejemplo, con colectivos de personas sordas que son homosexuales y se reivindican más como homosexuales que como personas con discapacidad.

Mencionaban unas discrepancias alrededor del asistencialismo, ¿Cuál es la discusión al respecto?

J: A ver, el asistencialismo es pensar que nosotros no somos sujetos de derechos, que no somos sujetos autónomos ni capaces sino dignos de que todo el tiempo se nos de la mano y vivamos de la caridad. Es un tema también de crianza religiosa. Entonces, darle al ciego, al 'enfermo', porque lo necesita. La gente, cuando no conoce el tema, tiende a sobreproteger y subestimar. Y hay personas con discapacidad que quieren que les den las cosas y eso redunda en organizaciones o personas que están abriendo caminos con nuevas posibilidades.

V: Exacto, por eso es que es tan importante hablar del enfoque, porque la discapacidad siempre se atendió desde lo médico. O sea, como patología, entonces alguien quedaba ciego o alguien nacía con una discapacidad y la categorización siempre era: 'Nació defectuoso'. Y todo eso está atravesado por lo religioso. Decían: 'No, es que hubo una maldición en la familia, ¿Qué hicimos mal?'.

Entonces, con esa categoría de 'cuerpo enfermo', pues ¿Qué haces tú con un enfermo? Lo atiendes, lo llevas al baño... Pero la discapacidad tiene otras dimensiones. Como esa visión de 'cuerpo enfermo' ha sido tan fuerte, entonces ha trascendido el espectro de los Estados. ¿Entonces qué hace el Estado con una persona con discapacidad? Inventarse el asilo, el auspicio o incluso matarlos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El chivo expiatorio de la sociedad ha sido la discapacidad y, en otros casos, es ese 'cuerpo defectuoso' que hay que "rehabilitar" para que pueda "funcionar normalmente en la sociedad".

¿Y esa categoría de 'cuerpo enfermo' trae unas consecuencias sociales?

V: Claro, con esa categoría uno socialmente no existe. No eres importante para el sector económico, se cree que no produces absolutamente nada de conocimiento. No eres tampoco objeto de educación. Y si lo eres, es, básicamente, para rehabilitarte, para que puedas eventualmente vivir. Y para vivir necesitas trabajar, pero como eres 'un cuerpo defectuoso', entonces ahí viene la caridad, el mercado, el bono.

Todo esto, de alguna manera, atraviesa cómo se entiende la autonomía de una persona con discapacidad, ¿no?

V: Es que justamente se trata de romper esa idea del 'cuerpo enfermo'. O sea, la discapacidad es una realidad que no se puede negar. También en el caso de las personas que adquirimos la discapacidad en determinado momento de la vida. Obviamente, hay una condición que cambia, pero los derechos no. La producción intelectual tampoco ni el deseo cambia. El hecho de ser y estar en la sociedad no cambia. Y en esa línea, la reivindicación de la autonomía es trascendental: Yo no soy un 'cuerpo enfermo'. Soy un estudiante, soy un artista, soy un productor de conocimiento. Incluso aquí aparecen otros elementos propios de un país tan pluricultural como el nuestro: Que soy una mujer o un indígena con discapacidad. Como sea, tenemos derechos, podemos tener familia, procrear, educarnos –y, además, elegir en qué formarnos—. Todo eso está alrededor de la autonomía.

Pero aquí también es importante mencionar que esa dependencia no es solo un asunto que se ha ejercido desde afuera sino que, de tanto ejercerse, en cierta medida ha moldeado profundamente la subjetividad de las personas con discapacidad. Entonces, ahí también hay una lucha para que las personas con discapacidad ganen autonomía, que se liberen de la discapacidad, que se liberen de esa condición que los hace dependientes y entiendan que, aunque su condición haya cambiado o sea distinta, siguen siendo personas autónomas y sujetas de derechos.

En ese ejercicio de la autonomía hay dos áreas importantes en la lucha del movimiento de personas con discapacidad: Educación inclusiva e inclusión laboral. ¿Hay acceso a esos derechos?

V: En eso se ha avanzado jurídicamente. Es un fenómeno muy extraño porque antes de la política de educación inclusiva en Colombia muchos nos formamos sin ese tipo de políticas, pero había una especie de consenso al interior de los centros educativos o de las universidades para que esas

barreras se superaran y la persona se educara. Sin embargo, cuando aparecen todas las políticas, fue como si vinieran más trabas. Es decir, en los centros educativos niegan más la formación. Es paradójico, pero pasa en la realidad colombiana. Antes era difícil porque había que ganarse el espacio, pero tú podías terminar la trayectoria académica. Hoy, con la educación inclusiva, cuando alguien solicita un ingreso casi que se lo niegan, quizá por las exigencias de la ley.

En todo caso, el hito fundamental de la construcción de la autonomía de personas con discapacidad ha sido la formación porque en cierta medida, cuando el médico te dictamina que tú eres una persona con discapacidad, entras a la dinámica que hablábamos del 'cuerpo defectuoso'. Pero cuando ingresas a la educación y el ámbito te da herramientas, eso cambia. Desde ahí se puede reflexionar, aportar ideas y producir conocimiento.

Ahora, en términos económicos y de productividad es lo mismo, porque, aunque haya una condición que cambia, también es cierto que esa condición hace que la manera como te relacionas con el mundo sea diferente y, en esa medida, la producción intelectual y de conocimiento se modifique. Ahí hay unos aportes trascendentales. Mira el caso, por ejemplo, de Stephen Hawking. Su conocimiento y aporte es valioso. Todo eso se da a punta de educación.

Pero aquí entraría a jugar, de nuevo, el cambio social, ¿no es así?

V: Ese es el otro elemento fundamental. El marco jurídico puede estar ahí, pero si te encuentras con el servidor público que te considera como un 'cuerpo enfermo', ya no es una reivindicación jurídica sino más personal. Lo clave es entender que, cuando se reconoce a una persona con discapacidad no como una experimentación sino como una realidad social, como la particularidad que aporta a la producción de narrativa nacional, todo cambia. Entonces, un docente con discapacidad que enseñe en una institución educativa o una universidad aporta al conocimiento, pero también a la construcción de tejido social. Es poner la diferencia en el contexto, pero valorarla más allá de su diferencia.

J: Desde el punto de vista práctico y económico es pensar que cada persona con discapacidad devenga no sé cuánta plata anual por parte del Estado, pero si se le brinda oportunidades será una persona que no le va a exigir plata al Estado. Al contrario, va a aportar. Su autonomía va a generar que esa persona devengue, pague impuestos y mueva la economía.

En un país como Colombia esa inserción en el tejido social tiene otra arista a considerar: el conflicto armado. ¿Qué pasa cuando la condición de discapacidad se adquiere en el marco del conflicto o cuando una persona con discapacidad es víctima de violencia en esas condiciones?

V: En el país, según la Unidad de Víctimas, el 6 por ciento de la población víctima del conflicto corresponde a personas con discapacidad. Pero aquí hay un punto importante y es que esta discusión se ha reducido a actores armados, fundamentalmente a la fuerza pública –Ejército, militares, civiles que trabajan con el sector Defensa– que adquirieron una discapacidad en el contexto de la guerra y parecen ser los más afectados. Ellos son los más visibles, pero no son la totalidad de la población afectada. Es un sector, si se quiere poner en esos términos. También están la población civil que adquirió la discapacidad en el contexto de la confrontación y las personas que adquirieron una discapacidad por estar inmersas en crisis humanitarias –desplazamiento forzado, por ejemplo–. Y el otro grupo, que es el menos visible pero que es trascendental, es la población con discapacidad que adquirió su discapacidad producto de la inasistencia estatal, y no solo en el contexto de la guerra.

Aquí el tema también es que el concepto de 'víctima', incluso el de 'discapacidad', es muy reciente en Colombia, quizá unos diez o quince años. Entonces, hay por ejemplo personas con discapacidad que reconocen su discapacidad pero, por las implicaciones de la guerra en Colombia, han ocultado y han desviado su historia. En mi caso era así, yo me reconocía como persona con discapacidad, pero el relato de mi discapacidad no lo ligaba a ser víctima. Así pasa con muchas personas, incluso personas que adquirieron su discapacidad en la época del Estatuto de Seguridad Nacional de Turbay, que por la excesiva fuerza de la autoridad pública hoy son personas con discapacidad. Ellos reconocen el hecho y su discapacidad, pero no se reconocen víctimas de la confrontación social y armada en el país. Ahí hay un tema por superar.

Si bien es cierto que todavía falta mucho para identificar las consecuencias del conflicto armado sobre esta población, como movimiento, ¿están buscando una reparación?

V: Sí, desde los compañeros de organizaciones antiminas, y desde el movimiento en general también, ha habido un intento por configurar la discapacidad como sujeto de reparación colectiva. Es decir, aunque la discapacidad la vive la persona en el cuerpo y la reflexiona de manera individual, también es cierto que es una población que ha padecido ciertas prácticas de opresión y

exclusión más o menos sistemáticas. En ese caso, y entendiendo que la reparación individual en el Estado colombiano es difícil, el mecanismo de ser sujetos de reparación colectiva podría ser el camino para que se garantice una reparación amplia.

Entonces, al entender que somos sujetos de reparación colectiva, la reparación no son cuatro o veinte millones de pesos de manera individual porque eso no garantiza autonomía, pero sí un mecanismo, por ejemplo, que garantice una formación académica en una universidad o la financiación de proyectos productivos de manera colectiva.

Eso ha estado ahí, pero, ante la indiferencia estatal, la gente ha tendido a formar grupos pequeños y montar cooperativas que financian proyectos colectivos a través de ayuda internacional. Entonces, las personas con discapacidad víctimas del conflicto se han organizado bastante, sí, pero desde la visión de organizaciones defensoras de derechos humanos o de organizaciones de víctimas. No hay esa diferenciación de ser personas discapacitadas, a pesar de que varias organizaciones civiles influenciamos para incluir la discapacidad en el proceso de negociación de los acuerdo de paz.

Hemos venido hablando principalmente de la autonomía en lo público —La educación, el trabajo, el conflicto—, ¿pero qué pasa con la autonomía que se ejerce en lo privado? Es decir, la que está relacionada con derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo.

V: Ese es un asunto que se mueve entre la discapacidad y el machismo. Incluso, entre la discapacidad y la heteronormatividad. Es decir, que a las personas con discapacidad también se les ha negado la posibilidad de una orientación sexual diversa. Ahora, si bien es cierto que existe una negación de sexualidad y derechos reproductivos para la población con discapacidad, lo cierto es que esa negación ha recaído con más fuerza en las mujeres. Hay casos en los que se ha contemplado la esterilización definitiva de las mujeres con discapacidad, como si no tuvieran deseo o no quisieran ser madres.

J: Y también como sujetos de abuso sexual.

V: Sí. Es que, además, en algunos casos la esterilización se convirtió en la regla para evitar que las mujeres con discapacidad quedaran embarazadas al momento de ser abusadas. Es un poco decir 'No es que no la violenten sexualmente sino que si la van a violentar por lo menos que no tenga hijos'. Ese es un pensamiento barbárico.

Pero, en la actualidad, en la medida en la que muchas mujeres han ganado autonomía, porque muchas son profesionales, con altísimos niveles de producción intelectual, pues también se ha reivindicado el derecho de acabar con la interdicción, que es uno de los mecanismos que hace que pierdas derechos jurídicos. Y al perder esos derechos jurídicos, tu mamá, tu papá o quien tenga la tutela jurídica, en el caso de las mujeres, eran quienes decidían el momento para esterilizarte. Eso también se ha superado, pero de nuevo: hay un marco jurídico que relativamente protege, pero el tema también es cultural en el sentido de que se naturalice que estamos ante personas que, más allá de su discapacidad, tienen deseos y la posibilidad de tener hijos o no.

La conversación avanza. De repente, un hombre se acerca a la mesa. Vicente reconoce su voz. "¿John?", pregunta. El hombre asiente. Sin esperarlo, una tercera voz se suma a esta entrevista. Se trata de John Díaz, también activista.

En los últimos años, el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad ha decidido salir con decisión a la calle. Una de las movilizaciones más visibles es la ya recurrente 'marcha antiteletón', motivada por la controversia que despierta el popular evento televisivo de caridad llamado Teletón, que busca recaudar fondos para financiar centros que benefician, sobre todo, a personas con discapacidad motora. Sin embargo, para integrantes del movimiento como John Díaz –Coordinador del grupo antiteletón desde hace seis años—, este tipo de eventos estigmatizan y victimizan a la población con discapacidad.

Como movimiento, ¿cuál es su posición respecto a eventos como Teletón?

John Díaz (JD): Hay que ver las cosas desde la naturaleza propia. Cuando uno habla de Teletón, tiene que hablar de que es una IPS y, como tal, está ligada a la salud. Pero ver a las personas con discapacidad desde ese punto de Teletón es ver desde la mirada rehabilitadora, desde la mirada clínica-enfermedad, que es uno de los paradigmas de cómo se ve a la población con discapacidad.

Otro punto es el tema social y político que atraviesa a la población con discapacidad. Si uno mira a Teletón desde lo social y lo político, entonces se entiende por qué estamos en contra del evento como show televisivo y no como IPS. Como IPS, ellos pueden generar su práctica de rehabilitación

y cobrar por ello porque son una IPS y esa es su naturaleza. La discusión está en cuanto al uso de la población con discapacidad para su beneficio como institución privada. Es decir, 'Yo cojo esta población, la proyecto como una población vulnerable, carente y necesitada, pero además que tiene una falencia física'. Bajo esa idea, se quita la naturaleza de ser persona y se impone la de 'ser discapacitado'. Entonces, se mira a la persona porque le falta un brazo, porque no ve o porque tiene una discapacidad cognitiva y no por su naturaleza de ser, primero que todo, persona y de ser una persona limitada por las carencias estructurales que no le permiten un desarrollo integral dentro de la sociedad. Teletón se lucra a partir de eso, por eso revictimiza a la población con discapacidad a partir de esa 'carencia' o 'deficiencia'.

Incluso, desde la comunicación puede analizarse esto con lo que se denomina como la 'pornomiseria', que es usar a la población con discapacidad por volverla carente para sacar dinero de ella. Y con ninguna otra población es así.

José David Díaz (J): Eso también pone en evidencia los contratiempos de la implementación del marco jurídico que nos cobija. Hasta ahora, casi 30 años después de la Constitución del 91, los movimientos sociales de las personas con discapacidad logramos reconocer que esos eventos nos estaban desestabilizando.

¿Qué acciones han adelantado para manifestar su rechazo a ese tipo de eventos?

J: ¡Uf! Hemos bloqueado calles. Pero hemos sido pocos porque hay muchos sectores dentro de la población con discapacidad que sí están de acuerdo. También por un tema económico, porque Teletón mueve mucha plata. Pero nosotros, como ciudadanos y como movimiento, hemos hecho protestas. Incluso, varios compañeros resultaron heridos por la fuerza pública en esas movilizaciones.

¿Cuál ha sido la respuesta de Teletón?

J: Esconderse. Quedarse callados. Pero sí hemos logrado avances, hay que decirlo. Ellos han perdido mucha plata.

JD: Así es. En el 2010 arrancan con cinco mil millones de pesos. En el 2015 tenían, más o menos, unos trece mil millones de pesos y, desde que empezamos a movilizarnos, se viene reduciendo. Hoy va en seis mil millones más o menos.

De hecho, si mal no recuerdo, en las últimas tres ediciones -2016, 2017 y 2018-, no han alcanzado la meta económica que se proponen en la transmisión.

JD: De acuerdo. Todo eso ha sido, en parte, por la lucha de los movimientos de personas con discapacidad. Nosotros hemos hecho marchas desde el 2010, porque Teletón se desapareció en 1995 y volvió ese año. Y desde entonces, empezamos a hacerle oposición al tema. Hemos hecho foros para que la misma población con discapacidad empiece a comprender cuál es la situación.

J: ¡Hemos hecho de todo! Incluso, hemos hecho charlas en Transmilenio, en las esquinas, en todo lado. Hemos repartido volantes. En fin. Es que Teletón es, precisamente, ese proceso de mercantilizar a las personas con discapacidad. Es ponerlas frente a una pantalla y que la gente, conmovida, suelte la plata que necesitan. Es gente que viene y se apropia de nuestras luchas para enriquecerse.

JD: Es un tema capitalista también. Una prostitución de la "deficiencia de la discapacidad", si me permiten llamarla así, para llenarse las arcas y privatizar la lucha.

También habría que hablar de medios de comunicación porque, de alguna manera, el proyecto de Teletón ha funcionado porque se transmite casi que un día entero en televisión. Es decir, los medios tienen una cuota de responsabilidad.

J: De acuerdo. Y no te imaginas el impacto que tienen esas casi 24 horas en nuestra vida diaria. Uno sale al otro día de que transmiten Teletón y las personas le dan plata en la calle. ¿Por qué? Porque se vende esta imagen de la discapacidad que necesita asistencialismo y piedad. Eso afecta nuestra lucha social porque todos los días trabajamos para normalizar la discapacidad y reivindicar estos temas, pero en 24 horas ese trabajo se va a la basura por cuenta de Teletón.

¿Qué habría que hacer? Se lo pregunto, además, como comunicador.

J: Esto no solo se trata de los medios que informan. Se trata de cómo nos proyectan en telenovelas, en películas... se trata de que nos permitan ser parte de esos procesos para reivindicarnos desde ahí. ¿Cuántas veces ves tú una persona con discapacidad en una telenovela? Si es un ciego, es un actor que hace de ciego, pero ¿Cuándo ves a un ciego actor? ¿O a un periodista ciego? Si no es la lástima, entonces la discapacidad se muestra como 'el castigo'. Entonces, el "castigo" del villano de la telenovela es perder un brazo o quedar en silla de ruedas.

JD: Los medios tienen la responsabilidad de cambiar eso. Que no lo quieran hacer es distinto. No se trata de que sean 'aliados', ellos deben modificar esos imaginarios sobre la discapacidad en lugar de alentar esos discursos discriminatorios. Ese sería un avance importante en esta lucha.

Agradecimientos

A los valientes líderes y activistas que nos compartieron sus historias y las razones por las cuales trabajan a diario por un país mejor. De igual forma, a los profesores y profesoras que, a lo largo del pregrado, nos enseñaron las bases del periodismo y alimentaron nuestra fascinación por este oficio. En especial, a Mauricio Díaz, nuestro asesor, por sumarse a este proyecto y acompañarnos en este proceso con sus siempre acertadas sugerencias y su rigurosidad a la hora de revisar los textos.

Yo, Camila, quiero agradecerles a mis padres por impulsarme a ser mi mejor versión y por siempre creer en mis habilidades. A mi hermano, por ser mi polo a tierra y ayudarme en los momentos más difíciles. A mis amigos y amigas, que me apoyaron en todo este camino, y especialmente a William, que sin sus ideas y su inspiración no hubieran hecho posible este gran trabajo. Quiero dedicarle este trabajo a Juliana y Manuela Peña, que siempre creyeron en mí, aun cuando yo no lo hacía.

Yo, William, quiero agradecerle a mi papá por su apoyo incondicional. A Santiago García, mi primo, por su trascendental ayuda en la producción de este libro. A Camila, por su amistad y su compromiso con este proyecto. Y, sobre todo, a mi mamá, por ser siempre mi inspiración.

Referencias bibliográficas

Amnistía Internacional (2018). Incremento de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, principal reto de la implementación del Acuerdo de Paz. Recuperado de https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2381902018SPANISH.PDF

Cantavella, J (1996). Manual de la entrevista periodística. Barcelona, España: Editorial Ariel S.A

Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2018. Recuperado de file:///C:/Users/morwil/Downloads/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf

Defensoría del Pueblo Colombia (2019). "Ni un paso atrás ante el asesinato y amenazas a los líderes comunales en Colombia": Defensor Carlos Negret en Mesa por la vida de Soacha. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/7867/%E2%80%9CNi-un-paso-atr%C3%A1s-ante-el-asesinato-y-amenazas-a-los-l%C3%ADderes-comunales-en-Colombia%E2%80%9D-Defensor-Carlos-Negret-en-Mesa-por-la-vida-de-Soacha-mesa-por-la-vida-Soacha-Defensor%C3%ADa-Procuradur%C3%ADa.htm

Fundación Ideas Para la Paz (FIP). ¿Dónde, cómo, quiénes y por qué se movilizan los colombianos? Preparémonos para una protesta social amplia y menos violenta. Recuperado de http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59dc0df5c5cff.pdf

Gaviria, P. (Comunicación telefónica, 06 de junio de 2019).

González, L. (2019, enero). Entrevista con Revista Semana. Líderes sociales ¿Quién podrá defenderlos? Recuperado de http://especiales.semana.com/lideres-sociales-asesinados/index.html

Halperín, J. (2008). La entrevista periodística. Buenos Aires: Aguilar.

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz (2019). Todos los nombres, todos los rostros. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/04/SEPARATA-

DE-ACTUALIZACI%C3%93N-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-30-Abril-de-2019.pdf

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019). Asesinato de Líderes Sociales. Colombia. Recuperado de https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2019/06/seminario-licc81deres.pdf

Jiménez, A. (Comunicación telefónica, 22 de mayo de 2019).

López, J. (2017). Movilización y acción colectiva por los derechos humanos en la paradoja de la institucionalización. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 51, 60-63.

Organización de las Naciones Unidas (2019). Sobre los defensores de los derechos humanos. Recuperado de https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx

Presidencia de la República (2019). Durante el Gobierno del Presidente Duque los homicidios de líderes sociales se han reducido el 32%, reveló el Consejero para los Derechos Humanos. Recuperado de https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190605-Gobierno-Presidente-Duque-homicidios-lideres-sociales-reducido-32-Consejero-Derechos-Humanos.aspx

Ramos Garbiras (2015). Los movimientos sociales (2). Diario Occidente. Recuperado de https://occidente.co/opinion/columnistas/los-movimientos-sociales-2/

Restrepo, A (2012). Página en blanco. Medellín, Colombia: Sílaba Editores

Somos Defensores (2019). La Naranja Mecánica. Recuperado de https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf

Tilly, C. y Wood, L. (2009). Los movimientos sociales 1768 – 2008. Desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica.

Touraine, A. (2005). Los movimientos sociales. Revista Colombiana de Sociología (Universidad Nacional de Colombia), 260-262.

Velásquez Ossa, C., Gutiérrez Coba, L., & Salcedo Ramos, A. (2000). Manual de géneros periodísticos. Universidad de La Sabana.